



Fascículo VI

Año 1951

INDICE ALFABETICO

37368

Accidentes del Trabajo.—*Indemnizaciones.*—A los Vocales de los Montepíos y Mutualidades Laborales. (O.) Ref. 235.

Aceite y sus Derivados.—*Montepío Laboral.*—Estatutos. Texto. (O.) Ref. 231.

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Véase Propiedad Inmobiliaria (Agentes de la).

Alfa (Máquinas de Coser).—*Montepío Laboral.*—Caja de Empresa. Aprobación de sus Estatutos. (O.) Ref. 238.

Banca (Mutualidad Laboral de la).—*Caja de Empresa.*—Del Banco de Bilbao. (O.) Ref. 236.

—*Creación.*—De esta Mutualidad. (O.) Ref. 234.

Banco de Bilbao.—*Montepío Laboral.*—Caja de Empresa. Aprobación de sus Estatutos. (O.) Ref. 236.

Banca y Seguros.—*Montepío Laboral.*—Banca y Seguros. Se disuelve este Montepío. (O.) Ref. 234.

—Banca (Mutualidad Laboral de la).—Se constituye en sustitución del disuelto Montepío de Banca y Seguros. (O.) Ref. 234.

—Seguros (Mutualidad Laboral de).—Se constituye en sustitución del disuelto Montepío de Banca y Seguros. (O.) Ref. 234.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Bilbao.—

Montepío Laboral.—Se aprueban los Estatutos de su Caja de Empresa. (O.) Ref. 239.

Caja de Ahorros Vizcaína.—*Montepío Laboral.*—Se aprueban los Estatutos de su Caja de Empresa. (O.) Ref. 237.

Cajas de Empresa.—*Banco de Bilbao.* (O.) Ref. 236.

—*Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Bilbao.* (O.) Ref. 239.

—*Caja de Ahorros Vizcaína.* (O.) Ref. 237.

—*Energía e Industria Aragonesa.* (O.) Ref. 241.

—*Máquinas de Coser Alfa.* (O.) Ref. 238.

Cerámica y similares (Industrias del).—Véase Vidrio, Cerámica y similares (Industrias del).

Colegios Oficiales de la Propiedad Inmobiliaria.—*Reglamento.*—Aprueba el Reglamento de los Colegios Oficiales. (D.) Ref. 230 y rectifica los arts. 56 y 57. (R.) Ref. 232.

Energía e Industria Aragonesa, S. A.—*Montepío Laboral.*—Caja de Empresa. Aprueba sus Estatutos. (O.) Ref. 241.

Madera (Industria de la).—*Reglamento de Trabajo.*—Prendas de trabajo. (R.) Ref. 240.

Máquinas de Coser.—Véase Alfa (Máquinas de Coser).

Monte de Piedad de Bilbao (Caja de Ahorros y).—Véase Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Bilbao.

Mutualidades y Montepíos Laborales.—*Normas de aplicación general.*—Accidentes del Trabajo. De los Vocales de los Montepíos y Mutualidades Laborales. (O.) Ref. 235.

—Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.—Reorganización. (D.) Ref. 242.

Prensa (Trabajos en).—*Reglamento de Trabajo.*—Rectifica arts. 16 y 55. (O.) Ref. 233.

Propiedad Inmobiliaria.—*Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.*—Regulación de la profesión. (D.) Ref. 230.

—*Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.*—Aprobación de su Reglamento. (D.) Ref. 230.

Seguros (Mutualidad Laboral de).—*Montepío Laboral.*—Creación de este Montepío en sustitución del de Banca y Seguros. (O.) Ref. 234.

Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.—*Reorganización.* (D.) Ref. 242.

Vidrio, Cerámica y similares (Industrias del).—*Montepío Laboral.*—Estatutos. Texto. (O.) Ref. 243.

Fecha		Ref.
6	Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Estatutos de los Colegios y reglamentación de la profesión. (D.) ...	230
13	Industria de la Madera.—Prendas de Trabajo. (R.)	240
24	Industrias del Vidrio, Cerámica y Similares.—Estatutos del Montepío. (O.)	243
27	Industrias del Aceite y sus Derivados.—Estatutos del Montepío Laboral. (O.)	231

17	Trabajos en Prensa.—Rectifica los arts. 16 y 55 del Reglamento de Trabajo. (O.)	233
21	Accidentes del Trabajo.—De los Vocales de las Mutualidades y Montepíos Laborales. (O.)	235
21	Caja de Empresa.—Banco de Bilbao. (O.)	236
21	Montepío de Banca y Seguros.—Se disuelve, creándose por separado el de Banca y el de Seguros. (O.)	234
23	Caja de Empresa.—Caja de Ahorros de Vizcaya. (O.)	237
23	Caja de Empresa.—Máquinas de Coser Alfa, S. A. (O.)	238
23	Caja de Empresa.—Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Bilbao. (O.)	239
23	Caja de Empresa.—Energía e Industria Aragonesa. (O.)	241
25	Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.—Reorganización. (D.)	242

1	Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Rectifica arts. 56 y 57. (O.)	232
---	---	-----

zación expresa del Ministerio de Trabajo, el cual, previamente, estudiará la posible coordinación que pueda existir con proyectos análogos de otros Organismos o Instituciones.

Art. 85. La Mutualidad constituirá en cada Ejercicio un fondo para prestaciones extrarreglamentarias, formado con el 2 por 100 de la cotización obtenida en el Ejercicio anterior. Dicho fondo se aplicará en la siguiente forma:

a) El 50 por 100 para atender los casos en que se prolongue la percepción de la pensión de larga enfermedad, con arreglo a lo que se dispone en el artículo 105 de estos Estatutos.

b) El otro 50 por 100, para prestaciones extrarreglamentarias, distribuido en esta forma: Las tres cuartas partes del importe procedente de cada provincia, a disposición de la respectiva Comisión Provincial; la otra cuarta parte, a disposición de los Organos de Gobierno Centrales.

Al finalizar cada Ejercicio, el saldo del fondo de prestaciones extrarreglamentarias incrementará el del Ejercicio siguiente.

Art. 86. Los excedentes libres, después de constituir las reservas y fondos que se especifican en los artículos anteriores, se destinarán a los fines que determine el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, a propuesta de la Junta Rectora.

CAPITULO IV

Sistema contable

Art. 87. La Sede Central de la Mutualidad organizará su contabilidad por el sistema de partida doble, desarrollándola en los siguientes libros:

- a) Libro Diario.
- b) Libro Mayor.
- c) Libro de Inventarios y Balances.
- d) Libro de movimiento de Caja.
- e) Libro de cuentas corrientes con las Delegaciones.
- f) Libro de cuentas corrientes de Tesorería.
- g) Libro de cuentas técnicas.
- h) Registro de Valores y Reservas.
- i) Otros libros que la práctica haga necesarios.

Art. 88. Las Delegaciones provinciales organizarán su contabilidad oficial por el mismo sistema que el de la Sede Central y será común a todas las Instituciones que las Delegaciones representen.

TITULO V

Prestaciones

CAPITULO PRIMERO

De sus clases

Art. 89. La Mutualidad Nacional de las Industrias de Cemento, Yeso y Cal concederá a sus beneficiarios las prestaciones que a continuación se enumeran, siempre que concurran las circunstancias y se cumplan los requisitos que para cada una de ellas se establecen:

- Pensión por jubilación.
- Pensión por invalidez.
- Pensión por larga enfermedad.
- Subsidios de viudedad y orfandad.
- Premio de nupcialidad.

Premio de natalidad.

Auxilio de defunción.

Asistencia sanitaria.

Art. 90. Cuando lo permitan las disponibilidades del fondo a que se refiere el artículo 85, la Institución podrá conceder prestaciones extrarreglamentarias a aquellas personas que vinculadas a las profesiones que encuadra la Mutualidad no pueden hacer efectivos sus derechos por faltarles alguna condición o requisito o sufran una desgracia o necesidad apremiante que no ocasione derecho a prestación alguna con arreglo a los presentes Estatutos.

CAPITULO II

Pensión por jubilación

Art. 91. Se concederá una pensión vitalicia a los socios beneficiarios que al cesar en el servicio activo de las Empresas reúnan las condiciones siguientes:

a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.

b) Tener una antigüedad mínima de diez años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

c) Tener cubierto el período de cotización previsto en el artículo 130 de estos Estatutos.

d) Ser socio activo de la Mutualidad.

Art. 92. También tendrán derecho a Pensión por jubilación al cumplir los sesenta y cinco años de edad:

1.º Los pensionistas de la Mutualidad por larga enfermedad.

2.º Los incapacitados por accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable.

En ambos casos, el beneficiario deberá reunir los requisitos de los apartados b), c) y d) del artículo anterior al tiempo de cesar en el trabajo activo por causa del accidente o enfermedad, y no le será computado el tiempo transcurrido desde aquel momento para determinar la cuantía de la pensión.

Art. 93. La cuantía de esta pensión será la que resulte de aplicar al salario regulador del socio beneficiario el porcentaje que corresponda con arreglo a su antigüedad laboral y períodos de cotización a la Mutualidad, según la siguiente escala:

A los diez años de antigüedad, el 25 por 100 del salario regulador.

A los quince años de antigüedad, el 35 por 100 del salario regulador.

A los veinte años de antigüedad, el 45 por 100 del salario regulador.

A los veinticinco años de antigüedad, el 55 por 100 del salario regulador.

De treinta años en adelante, el 65 por 100.

Si la antigüedad laboral acreditada por el socio beneficiario se hallare comprendida entre dos de los períodos establecidos anteriormente, se aplicará el tanto por ciento que corresponda al período inferior, incrementado proporcionalmente por cada año completo que excediere de aquel período.

El tanto por ciento que corresponda aplicar conforme a la antigüedad laboral del asociado será a su vez incrementado en un 1 por 100 por cada año de cotización, sin que pueda exceder del 5 por 100, que corresponderá a los asociados que hubiesen cotizado durante cinco o más años.

Art. 94. La pensión de jubilación podrá ser solicitada con una antelación máxima de tres meses a la fecha en que el asociado desee disfrutarla. Caso de ser concedida la pensión, no producirá sus efectos hasta que el productor presente el certificado de baja definitiva en sus servicios profesionales.

Art. 95. La pensión de jubilación será incompatible con todo trabajo remunerado por cuenta ajena, salvo los prestados en las actividades agrícolas y pecuaria.

Los jubilados pensionistas que volvieren a trabajar por cuenta ajena dejarán de percibir su pensión. A estos efectos deberán dar cuenta a la Mutualidad; si así no lo hicieren serán sancionados con la pérdida de la pensión y estarán obligados a devolver las cantidades cobradas.

Al cesar nuevamente en el trabajo, la Mutualidad restablecerá la pensión que venían percibiendo, sin que ésta pueda sufrir variación por razón de los trabajos prestados después de su concesión.

El fallecimiento del productor en la situación regulada en el segundo párrafo del presente artículo no privará a sus familiares de los derechos concedidos en el presente Título a los derechohabientes de los pensionistas de la Mutualidad.

CAPITULO III

Pensión por invalidez

Art. 96. La Mutualidad concederá pensión vitalicia por invalidez a los socios beneficiarios que quedasen incapacitados absoluta y permanentemente para todo trabajo, una vez dados de alta médica y con los requisitos y limitaciones que se establecen en este capítulo.

En caso de incapacidad indemnizable, según la legislación de accidentes y enfermedades profesionales, el incapacitado tendrá el derecho consignado en el artículo 101.

Art. 97. No tendrán derecho a pensión por invalidez aquellos asociados que hubieren adquirido imposibilidad física de trabajo por causas que la Junta Rectora estime voluntarias.

Art. 98. Se concederá la pensión por invalidez al socio beneficiario que al tiempo de cesar en su trabajo reuniera los siguientes requisitos:

a) Ser socio activo.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.

c) Tener cubierto un período mínimo de cotización de un año.

También se concederá esta pensión al asociado que quedase inválido, siendo pensionista de la Mutualidad por larga enfermedad y reuniera los requisitos de los apartados b) y c) al tiempo de cesar en el trabajo activo por causa de enfermedad.

Cuando la invalidez del asociado se haya producido por accidente o hecho súbito, la Junta Rectora podrá conceder pensión de invalidez sin que estén cubiertos los períodos mínimos de antigüedad laboral y de cotización, siempre que el asociado tenga efectuada la cotización anterior a la fecha del hecho causante.

Art. 99. La cuantía de la pensión por invalidez será igual a la que correspondería por jubilación al asociado al tiempo de cesar en el trabajo activo por cuenta ajena, con un mínimo del 50 por 100 del salario regulador.

Cuando la antigüedad acreditada por el asociado no llegare a los diez años, se considerará que tenía cubierto este período a los solos efectos de determinar la cuantía de la pensión que por jubilación le hubiera correspondido.

Art. 100. La pensión por invalidez quedará anulada si el beneficiario de la misma recobrara las condiciones físicas suficientes para realizar trabajo activo por cuenta ajena o cuando no cumpliera con exactitud las prescripciones facultativas de los médicos de la Institución.

La Mutualidad revisará periódicamente los expedientes y se reservará el derecho de reconocimiento médico siempre que lo estime conveniente.

Art. 101. En el caso de incapacidad indemnizable, según la legislación de accidentes y enfermedades profesionales, el incapacitado tendrá derecho a pensión de jubilación desde la edad de sesenta y cinco años, conforme a lo prevenido en el artículo 92.

CAPITULO IV

Pensión por larga enfermedad

Art. 102. Se concederá un auxilio por larga enfermedad a los socios beneficiarios que temporalmente estuvieren imposibilitados totalmente para el trabajo por causa de enfermedad, y siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que hubieren agotado los plazos de disfrute del Seguro Obligatorio de Enfermedad o que hubiere transcurrido el plazo de veintiséis semanas si no se hallasen afiliados a dicho Seguro.

b) Que la enfermedad que los imposibilita totalmente para el trabajo no tenga carácter indemnizable y sea diagnosticada por los facultativos especialistas que designe la Mutualidad, cuando ésta lo considere conveniente.

c) Que cumplan rigurosamente las prescripciones facultativas de los médicos que los asistan; en caso de contravenir el plan o régimen de vida establecido por éstos perderán automáticamente el derecho a este auxilio.

d) Que el asociado tuviere una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena. No se exigirá este requisito a los productores menores de diecinueve años, siempre que la enfermedad hubiese sido contraída con posterioridad a su ingreso como asociado.

e) Que tenga cubierto el período mínimo de cotización que preceptúa el artículo 130 de estos Estatutos.

Se exceptúan los menores de diecinueve años a que se refiere el apartado anterior, a quienes sólo se exigirá un período mínimo de seis meses de cotización.

Art. 103. La cuantía del auxilio por larga enfermedad será equivalente al 50 por 100 del salario regulador.

Art. 104. Los períodos máximos por los

que se concederá este auxilio serán los siguientes:

- a) En el primer año de enfermedad, veintiséis semanas como máximo.
- b) En el segundo año de enfermedad, cincuenta y dos semanas, con excepción de las que pudieran corresponder al asociado por el Seguro de Enfermedad.
- c) En el tercer año, cincuenta y dos semanas como máximo.

Art. 105. Agotados los plazos de duración a que se refiere el artículo anterior, el beneficiario que continuare enfermo será sometido a reconocimiento médico, y la Junta Rectora podrá acordar que se prolongue la percepción de la pensión, siempre que ello fuera posible por existir el remanente necesario en el fondo especial que se establece a continuación.

Para cubrir estas atenciones se constituirá anualmente un fondo especial con la mitad del importe total del fondo para prestaciones extrarreglamentarias a que se refiere el artículo 85 y con la parte de intereses que excedan del 3,5 por 100 de los producidos por el capital de la Institución en el año anterior.

CAPITULO V

Subsidio de viudedad y orfandad

Art. 106. Causará derecho al percibo de esta prestación el socio beneficiario que al tiempo de su fallecimiento reuniere las siguientes condiciones:

- a) Ser socio activo o pensionista de la Mutualidad.
- b) Tener cubierto un período de cotización de un año.

En caso de fallecimiento por accidente o hecho súbito se aplicará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 98.

En el caso del artículo 108 tampoco se exigirá que el causante tuviese cubierto el período de cotización mínimo.

Art. 107. Tendrá derecho al percibo de esta prestación la viuda o viudo del socio beneficiario fallecido que reúna las siguientes condiciones:

- a) Haber contraído matrimonio con el socio causante con dos años de antelación, por lo menos, a la fecha del fallecimiento de éste. No se exigirá este requisito cuando queden hijos legítimos del fallecido con derecho a subsidio de orfandad.
- b) Haber hecho vida conyugal con el socio fallecido hasta su muerte o que en caso de separación careciese de culpabilidad.
- c) No haber abandonado a sus hijos y observar una conducta honesta y moral.

El viudo sólo percibirá este subsidio cuando se hallare incapacitado absoluta y permanentemente para el trabajo y no perciba pensión derivada de la legislación de accidentes y enfermedades profesionales o de este u otra Institución de Previsión Laboral.

Art. 108. Cuando no existiese viuda o viudo o no tuviese derecho a esta prestación por no reunir las condiciones señaladas en el artículo anterior, tendrán derecho:

- a) Los hijos legítimos —incluso los póstumos— legítimos, naturales reconocidos y adoptivos del asociado fallecido.
- b) Los demás descendientes huérfanos de

padre y madre que no perciban pensión por este concepto y viviesen a expensas del asociado fallecido.

Los beneficiarios comprendidos en los apartados anteriores deberán ser menores de dieciocho años o incapacitados totalmente para el trabajo que no perciban ninguna otra pensión por este concepto.

Art. 109. Cuando no existieren beneficiarios de los comprendidos en los dos artículos anteriores o no tuvieren derecho por no reunir las condiciones precisas, percibirán esta prestación:

- a) Los padres que reuniesen las siguientes condiciones: ser pobres, sexagenarios o incapacitados para el trabajo; no percibir pensión alguna de Institución de Previsión Laboral o accidente o enfermedad profesional indemnizable; no realizar trabajo por cuenta ajena y que convivan con el asociado fallecido y a sus expensas.
- b) Cuando no existan padres que reuniesen los requisitos del apartado anterior, los abuelos del fallecido.
- c) Cuando no existan beneficiarios de los dos apartados anteriores, los hermanos huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años o incapacitados para el trabajo que no perciban pensión por este concepto y que vivieren a expensas del asociado fallecido.

Art. 110. La cuantía del subsidio que se regula en el presente capítulo será igual al importe de dieciséis mensualidades del salario regulador del fallecido.

Cuando el beneficiario fuese la viuda o viudo, dicho importe será incrementado con un 10 por 100 más por cada uno de los hijos o nietos que reunieren las condiciones del artículo 108.

Cuando los beneficiarios fuesen los comprendidos en dicho artículo 108, a uno de ellos se le acreditará el importe del subsidio, y a cada uno de los restantes el 10 por 100 a que se refiere el párrafo anterior; la suma de estos importes parciales se dividirá entre el número total de beneficiarios.

Si los beneficiarios fuesen los ascendientes y hermanos especificados en el artículo 109, percibirán el subsidio por el orden de preferencia que en aquél se establece. A cada uno de los restantes beneficiarios comprendidos en el mismo artículo se les concederá un diez por ciento del importe del subsidio.

En caso de tener el causante la condición de pensionista de la Mutualidad al tiempo de su fallecimiento, el importe del subsidio será de dieciséis mensualidades de la pensión que estuviese percibiendo.

Art. 111. Las personas que tengan derecho al subsidio establecido en el presente capítulo deberán justificar ante la Mutualidad el título en que funden su derecho. Las Comisiones Provinciales Permanentes, cuando sea posible, procurarán avisar a los mencionados parientes del derecho que les asiste.

Para prevenir cualquier reclamación que pudiera formularse a la Mutualidad, las Comisiones Provinciales Permanentes, en caso de duda, podrán demorar la correspondiente liquidación hasta transcurridos los treinta días inmediatos a la defunción del asociado; pasado este término la Mutualidad no tendrá responsabilidad alguna.

Art. 112. El importe del subsidio, en caso de enfermedad absoluta, se entregará a la persona o personas que tengan el carácter de cabeza o consejo de familia y acojan en su hogar, por razón de parentesco inmediato, a los huérfanos, o ejerzan el patronato sobre los beneficiarios. La Comisión Provincial Permanente deberá comprobar el buen destino del importe del subsidio en orden al mantenimiento, educación y formación profesional de los huérfanos, velando con el mayor celo por el más eficaz cumplimiento de lo que con el mismo se pretende lograr y de acuerdo en todo con el espíritu social que lo informa.

Cuando la Comisión Provincial Permanente lo estime oportuno, en razón a la no existencia de parientes inmediatos de los huérfanos, o que habiéndolos, no se hiciesen cargo de éstos, o por sus antecedentes se estimase oportuno cosa distinta, procederá con el máximo interés a estudiar y someter a la Junta Rectora la forma de protección de dichos huérfanos. Este informe deberá comprender, después de la exposición de motivos, el coste que la protección de aquéllos pueda ocasionar a la Institución.

CAPITULO VI

Premio de nupcialidad

Art. 113. Los socios beneficiarios que contraigan matrimonio tendrán derecho a un premio de nupcialidad consistente en 1.500 pesetas.

Para tener derecho a este premio serán requisitos indispensables:

- a) Ser socio activo de la Mutualidad.
- b) Tener, como mínimo, cinco años de antigüedad en el trabajo por cuenta ajena.
- c) Tener cubierto el período mínimo de cotización previsto en el artículo 130 de estos Estatutos.
- d) Presentar en la Mutualidad el correspondiente certificado de matrimonio, expedido por el Registro Civil.

CAPITULO VII

Premio de natalidad

Art. 114. Los socios beneficiarios tendrán derecho a la percepción de un premio de natalidad, consistente en 500 pesetas por cada hijo que les nazca con la condición de legítimo o que fueren legitimados por subsiguiente matrimonio de los padres y reúnan los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Civil.

En aquellos casos en que los hijos nacidos no alcanzasen la viabilidad legal, quedará al justo criterio de las Comisiones Permanentes la concesión o denegación del referido premio.

Para percibir esta prestación son requisitos indispensables los señalados en los apartados a), b) y c) del artículo anterior y acreditar fehacientemente el hecho del nacimiento del hijo y el matrimonio de los padres.

CAPITULO VIII

Auxilio por defunción

Art. 115. Ocurrido el fallecimiento de un socio en activo o pensionista por jubilación,

invalidez o larga enfermedad, la Mutualidad procederá a la entrega de 1.500 pesetas a los familiares más próximos o personas que convivieren con aquél, a fin de que atiendan los gastos derivados del fallecimiento.

En aquellos casos en que, a juicio de la Presidencia o de la Dirección, aparezcan suficientemente justificados los hechos que determinan la percepción de este auxilio, harán entrega del mismo, debiendo dar cuenta a la Comisión Provincial Permanente en la primera reunión que celebre.

Para causar derecho a esta prestación el asociado fallecido no necesitará reunir ninguna otra condición distinta de las previstas en el primer párrafo de este artículo.

Art. 116. Si al ocurrir el fallecimiento del asociado no convivieran con éste parientes u otras personas que pudieran atender a su sepelio, la Comisión Permanente Provincial o, en su defecto, el Delegado, designará a uno de los miembros de aquéllas para que se encargue del pago de los gastos producidos, que no deberán exceder de la cantidad señalada en el artículo anterior.

CAPITULO IX

Asistencia sanitaria

Art. 117. La Mutualidad concederá la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica a sus pensionistas y familiares que convivieren con ellos y a sus expensas con anterioridad a la solicitud de la pensión y reúnan, además, las condiciones siguientes:

a) Si el pensionista hubiese estado inscrito en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, los familiares con derecho a esta prestación serán los inscritos en la Cartilla de dicho Seguro al tiempo de solicitar la pensión, así como los hijos que naciesen posteriormente.

b) Si el pensionista no pertenecía al Seguro Obligatorio de Enfermedad, tendrán derecho los familiares comprendidos dentro del tercer grado de consanguinidad y los hijos que naciesen posteriormente.

Art. 118. A los efectos de este beneficio, la Mutualidad, al conceder una pensión, vendrá obligada a notificar a los interesados el procedimiento que tenga establecido para la efectividad del mismo, sin que para ello sea preciso solicitud alguna por parte de los beneficiarios.

Art. 119. Los familiares de los pensionistas dejarán de disfrutar este beneficio tan pronto tengan obligación de estar inscritos en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, dejen de convivir con el asociado o cuando, por cualquier circunstancia, el pensionista dejase de tener esta condición.

Art. 120. En caso de fallecimiento del pensionista únicamente tendrán derecho a seguir percibiendo este beneficio su viuda, si no estuviera obligada a pertenecer al Seguro de Enfermedad, o el viudo con incapacidad total y absoluta para el trabajo, y los hijos con derecho a subsidio de orfandad.

Art. 121. La Mutualidad coordinará sus servicios de asistencia sanitaria con los establecidos por otros Montepíos y Mutualidades, con los del Estado, Instituciones de Previsión y Organización Sindical.

CAPITULO X

Disposiciones comunes a todas las prestaciones*Disposiciones generales*

Art. 122. Los beneficios que concede esta Institución son compatibles con los derivados de los Seguros Sociales Obligatorios y con los que puedan concederse por el Estado, Corporaciones, Compañías de Seguros y Empresas, con las excepciones derivadas de las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.

Art. 123. Las prestaciones que la Mutuaidad concede en función del haber o salario del asociado son compatibles con las de igual clase de otras Instituciones de Previsión Laboral.

Las prestaciones de cuantía fija son incompatibles con las de la misma clase concedidas por otras de aquellas Instituciones, e incurrirá en responsabilidad penal el beneficiario que, por un mismo hecho, solicite prestaciones de esta clase en dos Instituciones distintas.

Art. 124. La cotización de un asociado a la Mutuaidad por dos o más Empresas no dará derecho a percibir, por cada hecho causante, más que una prestación de cuantía fija; las prestaciones que estén en función del haber o salario se concederán en razón del salario regulador resultante de las diversas cotizaciones.

Art. 125. Las prestaciones que concede la Mutuaidad tienen carácter personal e intransferible, y, en consecuencia, no podrán ser embargadas ni servir de garantía de ninguna obligación.

Consideración de socio activo

Art. 126. Serán considerados como socios activos de la Institución, a efectos del percibo de prestaciones, aquellos trabajadores que hayan dejado de cotizar a la misma por causa de enfermedad ininterrumpida con imposibilidad para toda clase de trabajo después de agotar los beneficios económicos del Seguro Obligatorio de Enfermedad o los que correspondan en virtud de lo dispuesto en su Reglamentación de Trabajo, con exclusión del accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable.

Para gozar de tal consideración será preciso que el asociado enfermo o sus familiares den cuenta a la Institución, en el plazo máximo de treinta días a partir de la última cotización, a fin de que ésta realice las comprobaciones oportunas. Si así no lo hicieran, el asociado no podrá causar derecho a prestaciones.

Si en esta situación fuese concedida al trabajador una prestación, la Institución descontará del importe del beneficio las cuotas patronal y obrera correspondientes al tiempo transcurrido desde su última cotización.

Art. 127. Los asociados que, teniendo la consideración de socios activos de la Mutuaidad y cubierto el período mínimo de cotización que corresponda, se incorporen a filas para el cumplimiento del servicio militar, bien con carácter obligatorio o voluntario para anticipar aquél, tendrán derecho, por el tiempo de duración del mismo, a percibir las prestaciones que conceden los presentes Estatutos, siempre que reúnan los demás requisitos en ellos previstos.

Art. 128. Los asociados que hubiesen dejado de cotizar por causa de paro involuntario conservarán la condición de socio activo siempre que demuestren fehacientemente aquella circunstancia a juicio de los Organos de Gobierno de la Institución y de acuerdo con las disposiciones vigentes.

La condición de socio activo la conservarán los productores en paro por un plazo igual a un mes por cada semestre o fracción de cotización, con un máximo de diez meses. Si el trabajador tuviese más de sesenta años de edad conservará tal condición sin sujeción a plazo, a efectos de poder causar prestaciones de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y auxilio por defunción.

Art. 129. Los productores que sean baja en la Mutuaidad por cambio de actividad que lleve consigo la obligatoriedad de afiliación a otra Institución de Previsión Laboral, conservarán el derecho a solicitar de la Mutuaidad Nacional de las Industrias del Cemento, Yeso y Cal las prestaciones consignadas en los presentes Estatutos que no se hallen previstos en los Estatutos de su nueva Institución.

Para ello será preciso que el hecho causante de la prestación solicitada se haya producido dentro de un período de tiempo equivalente a un mes por cada trimestre o fracción que hubiere cotizado en esta Mutuaidad, sin que dicho período pueda exceder de un año a partir de su baja.

Período mínimo de cotización

Art. 130. Para causar derecho a las prestaciones de jubilación, larga enfermedad, nupcialidad y natalidad, será preciso que el asociado haya cotizado a la Mutuaidad durante un período de tiempo igual a la mitad del comprendido entre la fecha inicial de cotización en el Sector Laboral a que el asociado pertenezca y aquella otra en que se produzca el hecho causante de la prestación.

A partir de la fecha en que se cumplan diez años de obligatoriedad de cotización en cada Sector, el período mínimo de cotización será de cinco años, mientras no se disponga otra cosa.

Concepto de antigüedad

Art. 131. A los efectos de antigüedad laboral para el percibo de las prestaciones, se computará el tiempo de trabajo efectivo por cuenta ajena prestado en territorio nacional, Plazas de soberanía, Protectorado y Colonias, en cualquier rama de la producción, con excepción de la agropecuaria y del trabajo a domicilio, hasta tanto se encuadre una y otro en el Mutualismo Laboral. También se reconocerá como antigüedad laboral el tiempo de servicio militar obligatorio prestado en cualquier época, e igualmente el voluntario realizado para anticipar el cumplimiento de aquél y por el tiempo normal de permanencia en filas.

Los años servidos al Estado, Provincia, Municipio, Organismos oficiales y Corporaciones de derecho público, tendrán también la consideración de antigüedad laboral cuando los mismos no causen derecho a pensión de jubilación en los regímenes de previsión que aquéllos tuvieren establecidos. No gozarán de esta concesión aquellos funcionarios que hayan sido separados de sus respectivos Cuer-

pos en virtud de expediente o por Tribunal de Honor.

Art. 132. Para que el tiempo de trabajo efectivo a que se refiere el artículo anterior deba ser tenido en cuenta, será indispensable que por el interesado se acredite en la siguiente forma:

a) Respecto a los trabajos realizados con anterioridad a la fecha inicial de cotización en el Sector Laboral a que aquéllos correspondan, con certificado de las Empresas en que el productor hubiese prestado sus servicios o mediante algún otro medio probatorio, incluso comparecencia o información testimonial efectuada ante autoridad, Organismo o persona que designe el Organismo Rector.

Quando el trabajador hubiese pertenecido a Empresas desaparecidas aportará, si es posible, testimonios o documentos de Organismos oficiales que acrediten la existencia en su día de la Empresa.

b) Los trabajos prestados por cuenta ajena después de establecida la obligación de cotizar en el Sector Laboral de que se trate, se acreditarán exclusivamente por los tiempos de cotización efectiva realizada en la respectiva Institución.

Art. 133. No se computará a ningún efecto el tiempo trabajado por cuenta ajena que el interesado alegue si no lo prueba debidamente a juicio de los Organos de Gobierno, los que tienen facultades para aceptar o rechazar, en todo o en parte, la documentación que al efecto se aporte, sin perjuicio de las responsabilidades administrativa y criminal en que incurra quien aporte o extienda documentos falsos.

Salario regulador

Art. 134. El salario regulador para la concesión de prestaciones se hallará en la forma siguiente:

Las cantidades sujetas a cotización percibidas por el trabajador durante doce meses consecutivos, elegidos por él dentro del periodo de cotización, se dividirán por doce. El cociente representará el salario mensual para el cálculo de la prestación.

Si los meses de cotización fuesen inferiores a doce, se tomará los que hubiere y se completarán hasta alcanzar el indicado número con los meses necesarios e inmediatamente anteriores a los de cotización.

Si el cociente resultante fuese inferior al salario reglamentario de la categoría respectiva, más los aumentos por antigüedad reconocidos al causante de la prestación, se tomará este salario en lugar de dicho cociente. El salario reglamentario de la categoría se reducirá en lo que corresponda, cuando se trate de productores de jornada reducida.

Art. 135. Si las prestaciones concedidas por la Institución resultaran de cuantía superior a la que corresponda, como consecuencia de falsedad de las Empresas en las declaraciones de los salarios del trabajador en relación con los que realmente sirvieron de base de cotización, la Mutualidad podrá reclamar a la Empresa las diferencias resultantes ante la jurisdicción competente.

Si por la misma causa de falsedad de la Empresa en dichas declaraciones la prestación concedida fuese inferior a la que real-

mente corresponda, el productor perjudicado podrá reclamar contra la Empresa por el perjuicio sufrido.

Solicitud de prestaciones

Art. 136. Las prestaciones que la Institución otorga se solicitarán utilizando los modelos de instancia que por aquélla se establezcan, acompañados de los documentos que para cada caso se señalen.

Art. 137. Los plazos para solicitar los beneficios que otorga la Institución serán los siguientes:

a) Para el auxilio de larga enfermedad, seis meses, contados a partir del día en que el solicitante agotó el disfrute de los beneficios del Seguro de Enfermedad o haber transcurrido veintiséis semanas enfermo, si no se hallare afiliado a dicho Seguro.

b) Para las demás prestaciones, tres años, contado desde el día en que ocurrió el hecho causante de las mismas.

Percepción de prestaciones

Art. 138. Las prestaciones que se establecen en los presentes Estatutos no podrán satisfacerse por la Mutualidad si la Empresa, en el momento en que deban ser abonadas, no estuviera al corriente en el pago de todas las cotizaciones exigibles a la misma.

En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en la Orden de 16 de mayo de 1950 (Ref. 422/50).

Art. 139. Las pensiones que conceda la Mutualidad se devengarán desde el día siguiente al que ocurrió el hecho causante de las mismas, siempre que se soliciten dentro de los tres meses siguientes.

Dejará de percibirse la pensión el último día del mes en que ocurriese el hecho causante de la extinción de las mismas, y si tal hecho originase otra pensión, ésta comenzará a devengarse desde el día primero del mes siguiente, de forma que, ininterrumpidamente y por mensualidades completas, se enlace la pensión que se suprime y la nueva que comienza.

En cualquier caso, sólo se tendrá derecho a percibir la prestación con una retroactividad de tres meses a partir del día de la petición.

Art. 140. Los socios beneficiarios a quienes les haya sido concedida alguna prestación en virtud de declaraciones falsas o inexactas de los mismos no tendrán derecho a su percibo. En el caso de que hubiesen recibido ya su importe, estarán obligados a su devolución, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

Art. 141. Las cantidades que correspondan a los beneficiarios por cualquiera de las prestaciones otorgadas por esta Institución, podrán ser percibidas por aquéllos en la Empresa donde últimamente hubieren prestado sus servicios o en aquella otra que se halle más cerca de su domicilio, siempre que la organización de la Mutualidad lo permita y así convenga.

Art. 142. Las mensualidades que un pensionista tuviera pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento se entregarán a la esposa, hijos, padres sexagenarios o familiares más próximos que conviviesen con el fallecido, previa la justificación que los Organos de la Mutualidad consideren oportuna en cada caso.

La misma norma se aplicará respecto de cualesquiera prestaciones que un asociado tu-

viere pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento.

A falta de los citados familiares, el importe de las pensiones o prestaciones revertirá a la Mutualidad.

TITULO VI

Régimen disciplinario

CAPITULO PRIMERO

De las faltas y sus sanciones

Art. 143. Constituirán falta y darán lugar a la imposición de sanción los siguientes hechos:

1.º Defraudar a sabiendas los intereses de la Mutualidad o poner voluntariamente los medios que conduzcan a tal fin.

2.º Falsear las declaraciones ordinarias y extraordinarias que se hagan ante la Mutualidad, o aportar datos inexactos a la misma, bien en orden a la concesión de beneficios o con respecto a otra cualquiera manifestación de las actividades de esta Entidad.

3.º Realizar actos indecorosos o perjudiciales para la reputación o el buen crédito de la Mutualidad.

4.º Entorpecer intencionadamente la actividad de la Mutualidad. Se considerarán comprendidos en este apartado los que, habiendo sido elegidos Vocales de la Junta Rectora o restantes Organos de Gobierno, no asistan a sus reuniones o no presten la colaboración debida.

5.º No observar las normas, disposiciones o acuerdos emanados de los Organos competentes de la Mutualidad, relativos al cumplimiento de sus fines o al buen desarrollo y orden de su actividad.

Art. 144. Las sanciones que podrá imponer la Mutualidad a sus asociados serán las consignadas en la siguiente escala:

1.º Apercibimiento privado, consistente en comunicación verbal o escrita al sancionado.

2.º Apercibimiento público. El grado de publicidad que proceda dar a esta sanción se determinará en cada caso por el Organo sancionador.

3.º Inhabilitación temporal para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución u ocupar cargos de la misma. Esta sanción se entenderá por un tiempo comprendido entre los dos y los cinco años.

4.º Inhabilitación permanente para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 145. Siempre que haya de imponerse una sanción se atenderá, para la determinación de la misma, en cada caso, a la gravedad de la falta cometida, al perjuicio que haya ocasionado o que haya pretendido ocasionar el sancionado, al criterio adoptado en resoluciones recaídas en casos anteriores y análogos y a cualesquiera otras circunstancias que deban tenerse en cuenta a juicio del Organo sancionador.

CAPITULO II

Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones

Art. 146. La imposición de sanciones será de competencia de la Junta Rectora.

Art. 147. Las Comisiones Provinciales Per-

manentes, tan pronto tengan conocimiento de haberse realizado algún hecho constitutivo de falta, lo pondrán en conocimiento de la Junta Rectora en escrito razonado, en el que se expondrán los hechos y circunstancias anejas, proponiendo la oportuna sanción.

En la primera reunión que celebre la Junta Rectora, después de recibir el expediente incoado, se pronunciará por la sanción que corresponda o declarará la no existencia de responsabilidad, devolviendo el expediente, una vez tomada debida nota, a la Comisión de procedencia, a los fines de su oportuno archivo y efectos.

Art. 148. En los casos en que la Junta Rectora o Asamblea General observasen posibles faltas sancionables entre los componentes de los Organos de Gobierno subordinados, acomodarán su procedimiento al enunciado en los artículos precedentes, pudiendo suspender en sus funciones a los miembros de las Comisiones o Junta Rectora, según los casos, interin se sustancie el oportuno expediente, dando cuenta de la medida a la Jefatura del Servicio.

TITULO VII

De los recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno

Art. 149. Como trámite previo a la iniciación de la reclamación en vía contenciosa, podrán los interesados afectados por las Resoluciones de los Organos de Gobierno entablar recurso contra todos los acuerdos adoptados por éstos y ante los siguientes Organismos:

a) Ante la Comisión Permanente Nacional si el acuerdo fué adoptado por la misma o por los Organos de Gobierno Provinciales.

b) Ante la Junta Rectora si el acuerdo hubiese sido adoptado por ésta.

La Dirección de la Mutualidad o Delegación Provincial, en su caso, al notificar los acuerdos recaídos, harán saber a los interesados el derecho que les asiste para recurrir o solicitar la revisión, con aportación de nuevos datos.

Art. 150. Con independencia de los recursos establecidos en el artículo anterior también podrá interponerse recurso ante el Jefe del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales contra los acuerdos adoptados por los Organos de Gobierno en asuntos cuya competencia y conocimiento no estén atribuidos a las Delegaciones y Magistraturas de Trabajo. El recurso deberá ser interpuesto ante el Jefe del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del acuerdo adoptado. La resolución dictada por el Jefe del Servicio pondrá fin a la vía administrativa.

Art. 151. Para la sustanciación de los recursos se seguirán los procedimientos siguientes:

a) Recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno Provinciales:

1.º El interesado, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acuerdo recaído, presentará escrito de recurso ante el Organo provincial que lo hubiere adoptado. En el escrito de interposición, al que se acompañará copia, se consignarán los fundamentos en que apoye su derecho el recurrente, formulando con claridad la pretensión que trate de deducir,

con inclusión de los justificantes que considere necesarios.

2.º El Órgano Provincial, en el plazo de quince días naturales, elevará el expediente de recurso, con su copia e informe oportuno a la Comisión Permanente Nacional de la Mutualidad.

3.º La Dirección de la Mutualidad remitirá al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, para su conocimiento, la copia del escrito de recurso y el informe emitido.

4.º En la primera sesión que celebre la Comisión Permanente Nacional conocerá del recurso, dictando resolución fundada, que se notificará al interesado a través de la Delegación Provincial respectiva, haciéndole saber, al propio tiempo, que contra dicha resolución podrá interponer, en su caso, la oportuna demanda ante la Magistratura de Trabajo.

De la resolución dictada se remitirá copia al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

b) Contra los acuerdos de la Comisión Permanente Nacional o Junta Rectora:

1.º El interesado, dentro de los meses siguientes a la notificación del acuerdo recaído, presentará escrito de recurso ante la Dirección de la Mutualidad. En el escrito de interposición del recurso, al que se acompañará copia, se consignarán los fundamentos en que apoye el interesado sus derechos, formulando con claridad la pretensión que trate de deducir y con inclusión de los justificantes que se consideren necesarios.

2.º La Dirección de la Mutualidad remitirá al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, para su conocimiento, la copia del escrito del recurso, acompañada del oportuno informe.

3.º En la primera sesión que celebre la Comisión Permanente Nacional o Junta Rectora, en su caso, conocerá del recurso, siguiéndose el procedimiento establecido en el número cuarto del apartado a) del presente artículo.

Art. 152. Conforme a lo que se determina en la Ley de Montepíos y Mutualidades, corresponderá a la Magistratura de Trabajo el conocimiento de las cuestiones de carácter contencioso que puedan surgir entre la Mutualidad y sus asociados sobre cumplimiento, existencia o declaración de sus obligaciones y derechos respectivos cuando previamente se hayan agotado los procedimientos que los presentes Estatutos establecen y regulan.

TITULO VIII

De la inspección e intervención

Art. 153. La inspección e intervención del cumplimiento por la Mutualidad de las obligaciones que se contienen en los presentes Estatutos y en la legislación correspondiente estará a cargo del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales y de la Inspección Técnica de Previsión.

Art. 154. El incumplimiento por parte de las Empresas de las obligaciones que se derivan de los presentes Estatutos o de las normas que se dicten por la Junta Rectora para su aplicación, serán sancionadas por los Delegados

de Trabajo y con arreglo a las disposiciones vigentes.

Art. 155. La inspección y vigilancia del cumplimiento de los preceptos reglamentarios de la Mutualidad, en cuanto se refiere a las obligaciones de Empresas y productores beneficiarios, estará a cargo del Ministerio de Trabajo, de las Delegaciones de Trabajo y de la Inspección Nacional de Trabajo.

Art. 156. Los asociados en general, tanto Empresas como productores beneficiarios, facilitarán la labor informadora, allanando, en cuanto esté a su alcance, las dificultades que encuentren en el desempeño de sus funciones los funcionarios competentes, pudiendo llegar, en caso contrario, a incurrir en responsabilidad y ser objeto de sanción.

TITULO IX

Disposiciones generales

Art. 157. Para que la Mutualidad pueda proponer la reforma de estos Estatutos será preciso que exista la conformidad de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea General en sesión convocada al efecto.

Art. 158. Cualquier modificación de estos Estatutos habrá de ser aprobada por el Ministerio de Trabajo, previo informe del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, a quien asimismo corresponde la interpretación de este texto.

Art. 159. La Mutualidad, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la celebración de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea general y Junta Rectora, remitirá certificación de los acuerdos adoptados al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales. Dichos acuerdos, para que tengan validez, serán confirmados por el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, antes de haber transcurrido los quince días siguientes a su recepción. Se considerarán válidos los referidos acuerdos si después de transcurrido el plazo señalado el indicado Servicio no hubiere hecho uso del derecho de veto.

La certificación de los acuerdos adoptados por las Comisiones Provinciales se remitirán, en los mismos plazos y a los mismos efectos señalados en este artículo, al inmediato Órgano jerárquico nacional.

Art. 160. Los acuerdos de los Organos de Gobierno serán válidos y firmes una vez adoptados, salvo lo que sobre veto del Servicio se establece en el artículo anterior, sin necesidad de esperar a la aprobación del acta en la sesión posterior.

Disposición final

Los presentes Estatutos comenzarán a regir el día 2 de mayo de 1951, y se aplicarán íntegramente a las prestaciones causadas con posterioridad a dicha fecha.

Disposición transitoria

Los derechos a prestaciones nacidos en virtud de hechos acaecidos durante la vigencia de los Estatutos provisionales de 15 de noviembre de 1947, se regirán por las siguientes normas:

a) El plazo para la solicitud de prestaciones

será el señalado en el artículo 137 de los presentes Estatutos.

b) Las clases, cuantía y requisitos de las prestaciones se regularán conforme a las normas contenidas en los Estatutos provisionales derogados, cualquiera que sea la fecha de su solicitud.

230 DEPARTAMENTOS MINISTERIALES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS OFICIALES.—AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Decreto del Ministerio de Trabajo del 6 de abril de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 146 del 26 de mayo de 1951.

I. INDICE GENERAL.—A) Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Se aprueba el Reglamento para el funcionamiento de los Colegios Oficiales y de su Junta Central.—B) Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Se reglamenta el ejercicio de esta profesión.

II. TEXTO LITERAL.—El Decreto de diecisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho (*Boletín Oficial del Estado* número 17 del año 1949) (Ref. 13/49) creó los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, para cuyo adecuado funcionamiento es indispensable dictar normas reglamentarias que desarrollen y puntualicen la aplicación de sus preceptos.

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo único.—Se aprueba el Reglamento insertado a continuación para el funcionamiento de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta Central, regulando el ejercicio de la profesión de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

REGLAMENTO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y DE SU JUNTA CENTRAL, Y REGULANDO EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

TITULO PRIMERO

De los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

CAPITULO PRIMERO

Del nombramiento de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

Artículo 1.º A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por Agente de la Propiedad Inmobiliaria todo mandatario que, estando colegiado y dado de alta en la contribución industrial, medie, en nombre propio y por cuenta ajena, o en nombre y por cuenta

ajena, en operaciones de compraventa, préstamo o hipoteca de fincas urbanas o rústicas.

La profesión de Agente de la Propiedad Inmobiliaria no podrá ejercerse sin la previa inscripción en el Colegio Oficial de la provincia donde el Agente tenga su domicilio habitual o el centro de operaciones.

Art. 2.º Para ingresar en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se requiere:

a) Ser mayor de edad, justificado con la oportuna certificación del Registro Civil.

b) Carecer de antecedentes penales.

c) Acreditar buena conducta y reconocida probidad por medio de información suscrita por tres personas que sean Agentes colegiados de la Propiedad Inmobiliaria, Agentes de Cambio y Bolsa, Corredores Oficiales de Comercio, Notarios o comerciantes de notoria solvencia, o por información suscrita por la Cámara de la Propiedad Urbana de la provincia.

d) Constituir en el Colegio de su ingreso la correspondiente fianza.

e) Acreditar haberse dado de alta en la contribución industrial.

f) Acreditar hallarse en posesión de un título facultativo o profesional.

g) Acreditar la debida competencia por medio del oportuno concurso-oposición ante el Tribunal que será designado por la Junta directiva de cada Colegio, previa propuesta a la Junta Central, en la que deberá incluirse el programa de materias sobre que habrá de versar el examen.

Las Juntas directivas de los Colegios podrán organizar los oportunos cursos de capacitación y ampliación de conocimientos para los Agentes colegiados procedentes de los antiguos Colegios.

Art. 3.º A los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se les proveerá de un carnet firmado por el Presidente de la Junta Central, que les servirá de nombramiento y de título comprobativo de su profesión.

CAPITULO II

De la colegiación

Art. 4.º El que solicite su inscripción en el Colegio Oficial como Agente de la Propiedad Inmobiliaria lo hará por medio de instancia dirigida al Presidente, debidamente firmada y reintegrada a la que acompañará los documentos acreditativos de reunir los requisitos que exige el artículo segundo, de cuya instancia y documentos acompañatorios, el Colegio dará traslado por copia a la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la provincia, para su conocimiento e informe favorable, en su caso.

Una vez admitida su inscripción, deberá satisfacer al Colegio como cuota de entrada la cantidad que fije cada Colegio Provincial dentro de los límites establecidos por la Junta central.

Art. 5.º Tan pronto como se hayan cumplido los expresados requisitos, el Presidente del Colegio lo pondrá en conocimiento de la Junta Central, para que por ésta se expida al interesado el carnet a que se refiere el artículo tercero, y se le entregará al interesado, previo abono de los derechos de expedición.

Art. 6.º Siendo la profesión de Agente de la Propiedad Inmobiliaria de carácter personal,

no podrá ejercerse por ninguna Sociedad mercantil ni privada, ni concedérseles la colegiación.

Art. 7.º Cuando un Agente fuera dado de baja en el Colegio, por cualquier motivo, vendrá obligado a la devolución del carnet de identidad, y si no lo hiciera, se anulará éste, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir el Agente por uso indebido de dicho documento.

CAPITULO III

De las fianzas

Art. 8.º La fianza que han de prestar los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para su colegiación deberá depositarse en el Banco de España a nombre del Agente y a disposición de la Junta directiva del Colegio oficial en el que se pretende ingresar, en efectivo o en valores públicos del Estado o del Tesoro, calculados al cambio medio de la cotización del día en que se depositen.

Art. 9.º La cuantía de la fianza, según la categoría de las plazas, será fijada por cada Colegio provincial con la aprobación de la Junta central.

Art. 10. Las fianzas de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria estarán afectas, principalmente, a las responsabilidades derivadas de las operaciones que realicen en el ejercicio de su cargo y sean propias de su oficio, y en segundo término, a las demás obligaciones impuestas por este Reglamento.

Las Juntas directivas de los Colegios serán competentes para conocer de cuanto tenga relación con las fianzas, correspondiéndoles la facultad de levantar los depósitos para hacer efectivas las responsabilidades o para su devolución a los interesados, cuando proceda, salvo retención judicial de la misma.

Art. 11. Si un Agente de la Propiedad Inmobiliaria incurriera en responsabilidades derivadas del ejercicio de su cargo debidamente declaradas, o dejara incumplida alguna obligación de carácter pecuniario impuesta por el Reglamento, la Junta directiva de su Colegio le requerirá para que haga efectiva inmediatamente su responsabilidad o cumpla la obligación desatendida, y si el requerimiento resultara infructuoso, la Junta realizará la parte de fianza indispensable para satisfacer las reclamaciones formuladas. En ningún caso en el requerimiento de la Junta directiva al Agente moroso se concederá a éste un plazo mayor de diez días para ponerse al corriente en el pago de sus obligaciones.

Con el acuerdo de la realización parcial o total de la fianza, la Junta directiva adoptará el de suspender al Agente en el ejercicio de su cargo. Dentro de los treinta días siguientes el Agente suspenso podrá reponer la fianza, con lo que será levantada la suspensión.

Transcurrido este plazo sin que se efectúe la reposición, quedará el Agente privado definitivamente de su oficio, debiendo la Junta directiva dar cuenta a la Junta central, ante la cual podrá interponerse por el interesado recurso de alzada.

CAPITULO IV

Normas de contratación. — Obligaciones. Prohibiciones e incompatibilidades

Art. 12. Cuando un Agente de la Propiedad Inmobiliaria reciba un encargo de venta, permuta, préstamo o hipoteca, invitará al cliente

a llenar un impreso, cuyo modelo se facilitará por la Junta directiva del Colegio, en el cual se hará constar los pormenores previos para la identificación de la finca, con la fecha del encargo y demás datos necesarios que hayan de tenerse presentes para formalizar la operación. El Agente hará constar en el impreso, lo antes posible, una diligencia, escrita por él mismo, en la que conste la situación registral en relación con el dominio y gravámenes de la finca, así como las posibles expropiaciones, y si ésta tiene cubiertos todos los requisitos legales exigidos por la Administración general o municipal, todos cuyos datos deberá comprobarlos el Agente en el Registro de la Propiedad, Oficinas de la Fiscalía de la Vivienda, Oficinas municipales y Centros oficiales.

Art. 13. Cuando un Agente reciba una nota de encargo, el propietario de la finca o su representante declarará que no tiene ofrecida a ningún otro Agente la misma, o bien al Agente que con anterioridad se la hubiera ofrecido.

La nota de encargo recibida por el Agente tendrá el carácter de exclusiva por el plazo que de común acuerdo se fije por escrito en la nota correspondiente; de no haberse fijado dicho plazo, se entenderá que tiene de duración tres meses.

Art. 14. Ningún Agente podrá encargarse de la gestión del encargo recibido, si le consta que con anterioridad se le ha ofrecido a otro Agente y no ha transcurrido el plazo citado en el artículo anterior, a no ser que el Agente anteriormente encargado le conceda por escrito la venia.

Art. 15. Los Agentes sólo podrán tener despacho en la provincia de su Colegio. No obstante, podrán realizar operaciones directamente, aunque las fincas que hayan de ser objeto de transmisión o gravamen radiquen en otra provincia distinta a la de su Colegio.

Para operar directamente en otra provincia distinta a la de su Colegio precisará darse de alta en el Colegio respectivo y en la contribución industrial.

Art. 16. Cuando un Agente se valga de la cooperación de un compañero, ya sea del mismo Colegio, ya sea de otro distinto, para realizar cualquier operación, cederá el corretaje convenido documentalmente, y en su defecto, el 50 por 100.

Art. 17. Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria percibirán sus honorarios con arreglo a la escala que se determinará en el Reglamento interior de cada Colegio y que no podrán ser superiores a la comisión que por uso y costumbres se vengán percibiendo, cuyos reglamentos tendrán que ser aprobados por el Ministerio de Trabajo, previo informe de la Junta central.

Art. 18. Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria habrán de cumplir en el ejercicio de su profesión las siguientes obligaciones:

1.ª Llevar un libro-registro con arreglo al modelo que determine la Junta directiva de cada Colegio, y en el cual harán constar cada una de las operaciones realizadas, con su fecha, nombre del cliente y demás datos esenciales de la operación. De acuerdo con este libro vendrá obligado a dar los datos y certificaciones que soliciten los interesados.

2.ª Realizar todas las operaciones con toda probidad, lealtad, claridad y su debida reserva, utilizando los modelos de los documentos apro-

bados por las respectivas Juntas directivas de los Colegios.

3.ª Cumplir exactamente los preceptos de este Reglamento y cuantas disposiciones se promulguen en esta materia.

Art. 19. No podrán ejercer la profesión de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, ni por sí ni por persona interpuesta:

1.º Los que no tengan la capacidad legal para el ejercicio de la profesión, según las leyes vigentes.

2.º Los concursados y quebrados, mientras no estén rehabilitados, así como los expulsados de cualquier dependencia del Estado, Provincia o Municipio, o de algún Colegio o corporación oficial.

3.º Todos aquellos que por razón de su función u oficio de carácter público puedan ejercer coacción moral sobre las partes que intervengan en operaciones sobre fincas urbanas o rústicas.

En todo caso, los funcionarios del Estado, Provincia o Municipio no podrán intervenir como mediadores en las operaciones en las que una de las partes sea el organismo de la Administración en que presten sus servicios. El incumplimiento de esta disposición se considerará como falta grave de probidad profesional.

CAPITULO V

De los Auxiliares o colaboradores de los Agentes

Art. 20. Cada Agente de la Propiedad Inmobiliaria podrá admitir en su despacho los auxiliares o colaboradores que estime precisos, que trabajarán por cuenta y bajo la responsabilidad de su principal, debiendo recabar previamente la autorización de la Junta directiva del Colegio a que pertenezca, comunicándole el nombre y circunstancias personales del interesado.

Estos auxiliares o colaboradores no podrán trabajar por cuenta propia ni ajena, sino siempre por cuenta y orden del Agente que los nombró.

CAPITULO VI

De la cesación de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

Art. 21. La cesación de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en sus actividades podrá ser temporal o definitiva.

Art. 22. La cesación temporal podrá ser voluntaria u obligatoria. La cesación voluntaria temporal se producirá cuando el Agente desista temporalmente del ejercicio de su profesión, dándose de baja en la contribución industrial. En este caso podrá seguir perteneciendo al Colegio en situación de "sin ejercicio", siempre que contribuya a las cargas del Colegio con la cuota que para esta situación se determine en el Reglamento de régimen interior del respectivo Colegio.

La cesación temporal obligatoria se producirá en los casos de suspensión acordada por el Colegio, con arreglo a las normas que se establecen en el presente Reglamento.

Art. 23. La cesación definitiva de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en el ejercicio de sus actividades se producirá en los siguientes casos:

1.º Por fallecimiento del Agente.

2.º Por incapacidad física o mental permanente.

3.º Por haber sido condenado a inhabilitación absoluta o especial para ejercer el cargo, o a pena correccional o aflictiva en causa por delito común que a juicio de la Junta central redunde en desprestigio del cargo.

4.º Por privación del oficio.

5.º Por estar incurso en alguna de las incompatibilidades que determine el presente Reglamento.

6.º Por acuerdo firme de expulsión del Colegio a que pertenezca el Agente.

7.º Por renuncia expresa hecha ante la Junta directiva del Colegio.

8.º Por renuncia tácita en los casos previstos en este Reglamento.

Art. 24. Se considerará que existe renuncia tácita:

1.º Cuando el Agente por cualquier causa tuviera disminuida su fianza y no la reponga dentro de los treinta días siguientes al que fuese requerido para ello.

2.º Cuando omita el pago de la contribución correspondiente, si requerido para ello deja transcurrir veinte días sin hacerla efectiva.

3.º Cuando no satisfaga, dentro de los quince días siguientes al requerimiento que le haga la Junta directiva, las cuotas o las multas impuestas con arreglo al Reglamento.

TITULO II

De las funciones propias de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

CAPITULO PRIMERO

De la intervención de los Agentes

Art. 25. La intervención de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se considerará voluntaria.

No obstante, cuando los organismos oficiales hagan uso de mediador para sus transacciones sobre fincas urbanas o rústicas, tal mediador tendrá que ser precisamente Agente colegiado.

Esta intervención consistirá, por regla general, en aproximar o acercar a las partes contratantes y mediar en el concierto de la operación.

El Agente mediador responderá de la exactitud de los datos que facilite como base para realizar la operación.

Art. 26. Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, para la debida uniformidad de su actuación, se ajustarán en la redacción de los documentos y asientos, a los modelos y normas establecidas por las Juntas directivas de sus respectivos Colegios, los cuales, a su vez, se atenderán a las instrucciones de la Junta central.

Art. 27. Corresponderá a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria la mediación en las siguientes operaciones:

1.ª Compra-venta o permuta de fincas urbanas o rústicas en todas las manifestaciones de su propiedad, tanto del suelo como del subsuelo.

2.ª Préstamos, hipotecas, anticresis o cualesquiera otras modalidades crediticias con garantía hipotecaria.

3.ª Traspasos de negocios o de industrias.

4.ª Arrendamientos urbanos o rústicos.

CAPITULO II

De la mediación de la Junta directiva en determinadas operaciones

Art. 28. Corresponderá a las Juntas directivas la intervención en las operaciones que les sean encargadas judicialmente o por algún organismo oficial o cualquier persona natural o jurídica.

La Junta directiva actuará en estos casos con arreglo a las normas que establezca cada Colegio en su Reglamento de régimen interior.

TITULO III

De la organización colegial

CAPITULO PRIMERO

De los Colegios

Art. 29. Los Colegios oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria dependerán del Ministerio de Trabajo, afectos a la Subsecretaría del mismo, siempre a través de la Junta central.

Art. 30. Existirán Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en todas las provincias del territorio nacional y plazas de soberanía. No obstante, cuando en una provincia no existan cinco Agentes por lo menos, podrán agruparse o inscribirse en el Colegio de una provincia limítrofe, previo acuerdo de la Junta central. Asimismo, en las plazas importantes, por la cuantía del negocio, podrán establecerse Delegaciones de los Colegios provinciales, que se hará siempre a solicitud del Colegio, previa aprobación de la Junta central.

Art. 31. Los fines principales del Colegio serán los siguientes.

a) Velar por el mayor prestigio de la profesión, impidiendo y sancionando toda clase de actos que la menoscaben.

b) Evitar la competencia desleal entre los Agentes.

c) Evitar que los particulares sufran perjuicio al confiar sus intereses a los colegiados, los cuales deberán considerarse siempre como defensores de los intereses de los clientes, informándoles y asesorándoles con toda lealtad e interés.

d) Informar a los organismos oficiales de todas aquellas cuestiones que sean de su competencia profesional.

e) Perseguir a los que realicen clandestinamente las funciones propias de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

f) Tramitar las altas y bajas en la contribución industrial de los colegiados y solicitar la agremiación de los mismos a los efectos del oportuno reparto de la referida contribución.

Art. 32. El régimen interior de cada Colegio corresponde a su Junta directiva, la cual tendrá en todo momento la plena representación de la Corporación.

Art. 33. La Junta directiva ejercerá todas las facultades que específicamente le confiere este Reglamento, y con carácter general las siguientes:

a) Vigilar la actuación de los Agentes, llevando a cabo las inspecciones necesarias para evitar, y en su caso corregir, reglamentariamente toda inobservancia de los deberes

que impone este Reglamento o las demás disposiciones legales y acuerdos que reglamentariamente se adopten.

b) Defender los derechos de los Agentes y actuar como conciliadora en las incidencias que surjan entre los mismos y sus clientes o los Agentes entre sí.

c) Dirigir el funcionamiento del Colegio, tanto en lo que se refiere a la vida económica del mismo como a los servicios, acordando lo procedente para el régimen de la corporación, previa aprobación de la Junta central.

Art. 34. Las Juntas directivas estarán formadas por el Presidente y los vocales, elegidos por votación.

Los vocales serán cuatro, si el número de Agentes no excede de diez. Si los colegiados son más de diez, la Junta tendrá seis vocales.

Al ser elegidos los vocales se designarán de entre ellos los que deben ocupar los cargos de Vicepresidente, Tesorero-archivero, Contador y Secretario.

En todo caso, los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario recaerán en Agentes que residan en la plaza donde esté domiciliado el Colegio. Los Presidentes de los Colegios serán designados por la Junta central de una terna que a este efecto remitirán los Colegios provinciales.

Art. 35. Los cargos de la Junta directiva durarán cuatro años, renovándose por mitad cada dos años, y son obligatorios, salvo caso de reelección, en el cual es voluntaria la aceptación. Podrán también excusarse los colegiados mayores de sesenta años.

Art. 36. Las vacantes que por causa distinta de la renovación reglamentaria ocurran en la Junta directiva serán cubiertas, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produjeran, debiendo la Junta directiva adoptar las medidas pertinentes para que no se interrumpa el buen servicio del Colegio mientras se provee la vacante. El Agente designado para ocupar ésta cesará en su cargo cuando hubiere correspondido hacerlo a quien la haya producido.

Art. 37. La Junta directiva se reunirá periódicamente con arreglo a lo que se establezca en el Reglamento de Régimen interior de cada Colegio, y siempre que lo disponga su Presidente o cuando lo soliciten dos miembros de la misma.

Art. 38. El Presidente tendrá todas las facultades que según este Reglamento son propias del cargo, y especialmente será el representante del Colegio a todos los efectos legales; será el ejecutor de los acuerdos de la corporación; convocará y presidirá las reuniones de la Junta directiva y de las Juntas generales del Colegio; firmará la correspondencia oficial; pondrá el visto bueno en las certificaciones que la Secretaría expida; autorizará, con el Secretario, las actas de la Junta directiva y de las Juntas generales; ordenará los cobros y pagos, firmando conjuntamente con el Tesorero los talones librados contra las cuentas corrientes del Colegio, y dispondrá cuanto, dentro de sus facultades, estime conveniente para la buena marcha de la corporación.

Al Presidente corresponderá también legalizar, cuando procediere, la firma de los Agentes y conferir a los miembros de la Junta directiva y a los demás colegiados las comisiones que estime oportunas.

El Vicepresidente sustituirá al Presidente si por cualquier circunstancia no pudiera ejercitar sus funciones.

El Tesorero conservará bajo su responsabilidad los fondos del Colegio, dando a éstos la inversión que la Junta directiva acuerde, debiendo tenerlos siempre depositados en algún Banco o Instituto de crédito. Además, el Tesorero custodiará el archivo del Colegio.

El Contador intervendrá los documentos de cobros y pagos y tendrá a su cargo la contabilidad.

El Secretario redactará y firmará con el Presidente las actas de las reuniones de las Juntas directivas y de las Juntas generales; expedirá las certificaciones; custodiará el sello del Colegio y tendrá, además, los deberes y funciones que de manera especial se determinen en este Reglamento o en el de régimen interior del Colegio.

CAPITULO II

De la vida económica de los Colegios

Art. 39. Los Colegios tendrán plena capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes y para disponer de los que les pertenezcan, siempre que sea para aplicarlos al cumplimiento de sus fines propios.

Art. 40. Ajustarán los Colegios su vida económica a un presupuesto de ingresos y gastos que para cada año formulará la Junta directiva, y que será sometido a la aprobación de la Junta general ordinaria del Colegio.

Art. 41. Los ingresos de los Colegios serán los siguientes:

a) La cuota de colegiación, que, según el artículo cuarto de este Reglamento, deberán satisfacer los Agentes.

b) Los derechos por las certificaciones que se expidan por la Junta sindical, cuya cuantía no habrá de exceder de diez pesetas por certificación.

c) Los derechos por reconocimiento o legalización de firma de los Agentes, cuando fuere procedente; derechos que se fijan en cinco pesetas por reconocimiento.

d) Las multas que los Colegios impongan a sus colegiados.

e) La cuota mensual que deberán pagar los Agentes colegiados, y cuya cuantía se fijará en los respectivos reglamentos de régimen interior de los Colegios.

Faltas y sanciones

Art. 42. Las faltas que los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria cometan en el ejercicio de su cargo o por infracciones reglamentarias serán corregidas por la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, por la Junta Central o por la respectiva Junta directiva, con arreglo a las normas que se establecen en los siguientes artículos.

Art. 43. Se considerarán faltas cometidas por los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria toda infracción a los preceptos legales o reglamentarios; o el incumplimiento de los deberes relacionados con el ejercicio del cargo en general, y en particular las siguientes:

a) Leves: La demora en el desempeño de las funciones que les estén encomendadas; los deberes que este Reglamento impone y las ór-

denes que reciban de la Superioridad, de la Junta Central o de la Junta directiva de su Colegio; las que sean consecuencia de negligencia o descuido excusable, y las faltas reiteradas de asistencia a las Juntas generales, sin haber delegado en otro Agente y sin justificación de causa.

b) Graves: Los actos de indislicia contra la Superioridad o contra las Juntas Central y directiva; las faltas reiteradas de asistencia a las Juntas generales; la desconsideración grave a las Autoridades, a sus compañeros o a sus propios clientes en el ejercicio de sus funciones; la demora reiterada en el cumplimiento de sus deberes y de las órdenes que reciba de la Superioridad, de la Junta Central o de la Junta directiva; los altercados y pendencias dentro y fuera del Colegio, con desdoro personal, aunque no constituyan delito ni falta punible, y la no exhibición de sus libros-registro cuando para ello sean requeridos por la Junta directiva.

c) Muy graves: El mantenimiento de la negativa a exhibir sus libros-registro, después de haber sido multado; el hallarse incurso en alguna de las incompatibilidades que establece este Reglamento; la insubordinación en forma de amenaza individual o colectiva; la alteración maliciosa de los datos consignados en los documentos que expidan u otorguen; la realización de actos de competencia ilícita o que cedan en desprestigio personal o profesional; la falta de probidad y las constitutivas de delito.

Art. 44. Las correcciones disciplinarias que podrán imponerse a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, por faltas que cometan, son las siguientes:

1.ª Apercibimiento.

2.ª Multa de 25 a 500 pesetas.

3.ª Multa de 501 a 1.000 pesetas.

4.ª Suspensión en el ejercicio de su cargo hasta por seis meses.

5.ª Suspensión desde seis meses y un día a un año.

6.ª Expulsión del Colegio, con la consiguiente pérdida de todos los derechos adquiridos.

La primera y segunda correcciones serán aplicadas discrecionalmente, según la índole de la falta y las circunstancias que en el hecho concurren, a las faltas leves; la tercera y cuarta, a las faltas graves, y la quinta y sexta, a las muy graves.

El apercibimiento se hará por escrito en todo caso, y constará, como todos los demás correctivos, en el expediente personal del Agente.

El tercer apercibimiento implicará la imposición de multa, con arreglo a lo establecido en el número segundo de la corrección y cuantía que discrecionalmente se fija.

La imposición de tres multas, con sujeción a lo establecido en el número segundo, y de dos, en el número tercero, determinará simultáneamente la suspensión en el ejercicio del cargo por seis meses.

Dos suspensiones por más de seis meses en el intervalo de tres años llevarán aparejadas necesariamente, la expulsión del Colegio, con la consiguiente pérdida de todos los derechos adquiridos.

En todo caso, la reincidencia se corregirá con la máxima sanción graduada que corres-

ponda, entendiéndose que hay reincidencia cuando el Agente realice la misma o análoga falta en el transcurso de tres años, a contar de la primera corrección.

Art. 45. Las sanciones comprendidas en los números primero al cuarto del artículo anterior podrán ser impuestas por la Junta directiva del Colegio. La sanción del número quinto, podrá ser impuesta por la Junta Central. Y la sanción del número sexto sólo podrá ser impuesta por el Subsecretario del Ministerio de Trabajo, previa formación del oportuno expediente, en el que será oído el interesado e informado por la Junta Central.

Las sanciones comprendidas en los números primero y segundo son inapelables. Las sanciones comprendidas en los números tercero y cuarto e impuestas por la Junta directiva de los Colegios Provinciales serán recurribles en alzada ante la Junta Central en el plazo de quince días, a contar desde su notificación.

Contra las resoluciones de la Junta Central imponiendo correcciones disciplinarias —excepto de los números primero y segundo— podrá recurrirse en alzada en el plazo de quince días, a contar desde la notificación ante la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo.

Las sanciones impuestas por la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo serán recurribles en alzada ante el Ministro del Departamento.

Los recursos de alzada deberán tramitarse por conducto del Organismo que haya impuesto la sanción, elevándose el recurso a resolución, con el informe que sobre el mismo proceda.

Art. 46. Si el hecho perseguido pudiera dar origen a un procedimiento criminal, por presentar caracteres de delito, la Junta directiva, sin esperar a la ultimación del expediente, lo comunicará al Juzgado competente, remitiendo certificación de los documentos o diligencias que se consideren necesarias para la incoación de la causa.

El procesamiento dictado contra cualquier Agente de la Propiedad Inmobiliaria podrá ocasionar la suspensión del mismo en el ejercicio de su cargo, cuando se base en motivos que redunden en desprestigio del cargo, a juicio de la Junta Central, bien sea por hechos profesionales o privados, viniendo obligada la Junta directiva a notificar el hecho del procesamiento a la Junta Central en el plazo de ocho días, a partir de la fecha en que tuviere conocimiento del mismo.

Las Juntas directivas serán responsables del cumplimiento de las obligaciones que les impone el párrafo anterior, cuya infracción constituirá falta grave, sancionada con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento.

Art. 47. El Presidente del Colegio, al ordenar la incoación del expediente contra un Agente de la Propiedad Inmobiliaria, podrá acordar la suspensión del mismo, comunicándolo en el mismo día y con expresión de sus fundamentos a la Junta Central, para que en el término de cinco días pueda ésta dictar resolución definitiva, confirmando o revocando aquel acuerdo.

Art. 48. Cuando un Agente de la Propiedad Inmobiliaria deba ser privado de su oficio, por hallarse incurso en las prohibiciones o incompatibilidades que establece este Reglamento, será preciso incoar el oportuno expe-

diente, con audiencia del interesado, debiendo forzosamente acordarse, al propio tiempo que la formación del expediente, la suspensión del expedientado en el ejercicio de su cargo, suspensión que deberá mantenerse hasta que finalice la tramitación del expediente.

Art. 49. Cuando la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo o la Junta Central, en uso de sus atribuciones, ordenen la formación de expediente a un Agente de la Propiedad Inmobiliaria, podrá nombrar discrecionalmente instructor del expediente a un miembro de la Junta directiva del Colegio a que pertenezca el Agente o a un Delegado de la Junta Central, pudiendo ordenar al mismo tiempo la suspensión en el ejercicio de su cargo del Agente expedientado.

Si, como consecuencia de la tramitación de un expediente, se apreciase responsabilidad para la Junta directiva, por no haber sancionado en su día la falta cometida, podrá imponerse a aquélla, previo informe de la Junta Central, por la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, el correctivo a que se hubiese hecho acreedora.

Art. 50. Las Juntas directivas comunicarán a la Junta Central toda sanción impuesta a los Agentes para la constancia en el expediente personal del interesado.

Art. 51. La Junta directiva que incumpliere los deberes que este Reglamento impone, o demostrare falta de celo en su cumplimiento, será apercibida por la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo o por la Junta Central, o corregida con multa de 500 a 5.000 pesetas, según la gravedad de la falta. Las sanciones impuestas por la Junta Central, con arreglo a este artículo, serán recurribles en alzada ante la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo en el plazo de quince días, a partir de la fecha de su notificación. Si la Junta directiva que hubiere sido apercibida o multada reincidiese, en su falta de celo, podrá ser destituida por la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Junta Central.

Art. 52. Las multas que se impongan a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, de no hacerse efectivas por los interesados en el plazo de quince días, podrán ser satisfechas con cargo a la fianza del Agente sancionado, a cuyo efecto, la Junta directiva correspondiente enajenará la parte de fianza correspondiente y suficiente para cubrir la multa impuesta y los gastos que ocasione su cumplimiento, procediéndose después a suspender en el cargo al Agente sancionado si en el plazo de treinta días no repone la fianza hasta completarla.

Las sanciones que se impongan a las Juntas directivas podrán recaer en el Presidente cuando, a juicio de la Subsecretaría o de la Junta Central, resulte responsable único de las faltas cometidas. Ni los miembros de las Juntas directivas, que deberán satisfacer por partes iguales la multa impuesta, ni el Presidente, caso de ser éste el único sancionado, podrán repercutir las multas sobre los fondos de la Corporación, ni prorratear su importe sobre los demás colegiados.

Art. 53. Los individuos de una Junta directiva que hubieren sido destituidos de sus cargos directivos por la Superioridad no podrán ejercer nuevos cargos en el Colegio en

el plazo de tres años, o en el que se señale al imponer la sanción, si hubiere motivo para ampliar este plazo. Si, como consecuencia de la destitución de la Junta directiva y del escaso número de colegiados, un Colegio se hallare en la imposibilidad de nombrar nueva Junta directiva se acordará por la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo, previo informe de la Junta Central, la incorporación provisional a otro Colegio de plaza limítrofe.

Art. 54. La Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y la Junta Central podrán acordar las visitas de inspección que estimen necesaria, tanto en relación con la actuación del Colegio como de los colegiados.

Los gastos que ocasionen estas visitas de inspección serán sufragados con cargo al presupuesto de la Junta Central; pero si se comprobasen anomalías en el funcionamiento del Colegio, podrá acordarse que sean satisfechas por éste, reintegrándose su importe a la Junta Central.

CAPITULO III

De la Junta Central

Art. 55. Como Organismo Central de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, funcionará con carácter oficial, y afecta al Ministerio de Trabajo, la Junta Central de los mismos.

Art. 56. La Junta Central tendrá una misión consultiva, reguladora y propulsora de la profesión de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, a través de los Colegios Provinciales.

Serán funciones propias de la Junta Central, sin perjuicio de las que específicamente se le atribuyen en este Reglamento, las siguientes:

a) Informar al Ministerio de Trabajo, y especialmente a la Subsecretaría del mismo, de la que directamente dependerá esta Junta Central, acerca de los asuntos referentes a los Colegios Provinciales y a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, en los casos en que sea preceptivo, o aquéllos en que, por la índole o importancia de la cuestión, considere la Subsecretaría conveniente oír su dictamen.

b) Elevar a la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo todas las iniciativas encomendadas a mejorar la organización y el funcionamiento de los Colegios Provinciales.

c) Evacuar las consultas que formulen los Colegios Provinciales sobre asuntos de la Profesión.

d) Llevar un registro, por fichas, de todos los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, con indicación de las fechas de sus nombramientos; toma de posesión y constitución de fianzas, valores que las representan y cualesquiera otros datos relativos a los interesados.

e) Procurar reglamentariamente la mejor solución de las diferencias que puedan surgir entre los Colegios o entre éstos y los Agentes.

f) Contribuir a unificar la actuación de los Colegios y de los Agentes.

g) Realizar cuantas gestiones puedan ser beneficiosas para los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, a cuyo fin tendrá plena personalidad y ostentará la representación de los Colegios.

h) Acordar las visitas de inspección que

estime oportunas para el debido cumplimiento de las obligaciones profesionales de los Agentes y las corporativas del Colegio, de cuyo resultado informará a la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo cuando exista o se observe alguna anomalía o irregularidad.

i) Sancionar, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, las faltas que cometan las Juntas directivas de los Colegios y los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

j) Formar, con los datos que le remitirán las Juntas directivas de los Colegios, las oportunas estadísticas sobre la contratación de la propiedad inmobiliaria, con el fin de poder informar al Ministerio de Trabajo, o a cualquier otro Organismo oficial, sobre las cuestiones que se relacionen con dicha contratación.

Art. 57. La Junta Central constará de un Presidente, nombrado por el Ministerio de Trabajo, a propuesta de la Junta Central; dos Vicepresidentes, que lo serán necesariamente los Presidentes de los Colegios de Madrid y Barcelona; dos Vocales natos, que lo serán los Presidentes de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana de Madrid y Barcelona, y cuatro Vocales, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que serán designados por el Ministerio de Trabajo, quien los elegirá libremente entre los doce nombres que proponga la Junta Central.

Art. 58. La Junta Central designará de entre sus miembros el que haya de desempeñar el cargo de Tesorero.

Art. 59. Serán funciones privativas de los miembros de la Junta Central las siguientes:

El Presidente asumirá la representación de la Junta y será el ejecutor de sus acuerdos. Convocará y presidirá las sesiones, fijando el orden del día, y resolverá los empates con su voto de calidad si aquéllos subsistieren después de dos votaciones sucesivas. Asumirá, por delegación, todas las funciones de la Junta Central en los casos cuya urgencia así lo requiera, pudiendo adoptar las resoluciones que estime pertinentes bajo su responsabilidad, a reserva de someterlas después a la convalidación de la Junta. Será el ordenador de los pagos, y firmará con el Tesorero todos los justificantes de ingresos y pagos. Pondrá el visto bueno a los presupuestos de cuentas que formalice el Tesorero, sometidos a la aprobación de la Junta.

El Tesorero custodiará, bajo su responsabilidad, los fondos de la Junta Central, en la forma que ésta disponga, y efectuará los cobros y pagos previa orden del Presidente y toma de razón del Secretario. Formulará los presupuestos y cuentas anuales, sometiendo unos y otras al visto bueno del Presidente y a la aprobación de la Junta.

El Secretario se encargará de la correspondencia oficial; cuidará de que sean ejecutados los acuerdos de la Junta y cumplidas las órdenes del Presidente. Redactará las actas y la Memoria anual; será el Jefe de la oficina de la Junta e intervendrá los presupuestos y cuentas que formule el Tesorero. Expedirá, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones de actas y documentos cuando fuere procedente.

Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en sus funciones cuando éste no pue-

da actuar, y ejercerán las funciones que por delegación les encomiende el Presidente.

Los Vocales intervendrán en las deliberaciones de la Junta, con voz y voto, y podrán sustituir en ausencias o enfermedades a los demás miembros de la Junta.

Art. 60. La Junta Central tendrá personalidad jurídica para adquirir, poseer, administrar y enajenar bienes de todas clases.

Art. 61. Para el sostenimiento de la Junta Central contribuirán todos los Colegios Provinciales con una cuota anual en proporción al número de sus respectivos colegiados, y su cuantía se fijará anualmente y se someterá, en unión del presupuesto anual, a la aprobación de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo.

Con la misma finalidad, la Junta Central podrá recabar y aceptar subvenciones voluntarias tanto de los Colegios Provinciales como de cualquier otro organismo.

Art. 62. La Junta Central se reunirá una vez, por lo menos, cada cuatrimestre y siempre que lo ordene el Presidente o lo soliciten tres de sus miembros.

Disposición transitoria

Por excepción podrá ingresar en los respectivos Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, aquellos Agentes o Corredores de fincas que justifiquen estar al corriente en el pago de la correspondiente contribución industrial, no haber sido expulsados de ningún Colegio y depositen la correspondiente fianza, prohibiéndoseles el ejercicio de la profesión si no lo verifican en un plazo de sesenta días, a partir de la publicación de este Reglamento.

231 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—INDUSTRIAS DEL ACEITE Y SUS DERIVADOS

Orden del Ministerio de Trabajo de 27 de abril de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 144 del 24 de mayo de 1951.

I. ESTATUTOS.—Se aprueban los Estatutos del Montepío Laboral de las Industrias del Aceite y sus Derivados, con sujeción al siguiente índice general.

Orden aprobatoria.—Fecha de entrada en vigor (art. 1).—Derechos a las prestaciones por hechos producidos antes de la aprobación de los Estatutos (art. 2).

Título I.—Naturaleza y extensión del Montepío (arts. 1 al 7).

Título II.—De los socios y beneficiarios. *Capítulo I.*—De las clases de socios (art. 8). *Capítulo II.*—De los socios protectores (artículo 9).—Sección 1.ª De los socios protectores obligatorios (arts. 10 al 13).—Sección 2.ª De los socios protectores voluntarios (arts. 14 y 15).—*Capítulo III.*—De los socios beneficiarios (arts. 16 al 19).—*Capítulo IV.*—Del Gobierno del Montepío (art. 20).

Título III.—Organización y funcionamiento.—*Capítulo I.*—Del Gobierno del Montepío (arts. 21 al 23).—*Capítulo II.*—De los Organos de Gobierno Nacionales.—Sección 1.ª

De la Asamblea General (arts. 24 al 35).—Sección 2.ª De la Junta Rectora (arts. 36 al 41).—Sección 3.ª De la Comisión Permanente Nacional (arts. 42 al 45).—Sección 4.ª del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas (arts. 46 al 49).—*Capítulo III.*—De los Organos de Gobierno Provinciales (arts. 50 al 56).—*Capítulo IV.*—Elección de Vocales y Organos de Gobierno.—Sección 1.ª Disposiciones relativas a los miembros de los Organos de Gobierno (arts. 57 al 60).—Sección 2.ª de la elección de Organos de Gobierno (arts. 61 al 64).—*Capítulo V.*—De los Organos ejecutivos del Montepío.—Sección 1.ª Del Director (art. 65).—Sección 2.ª Del Delegado provincial (artículos 66 y 67).

Título IV.—Régimen económico.—*Capítulo I.*—Recursos económicos (arts. 68 al 76).—*Capítulo II.*—Presupuestos y gastos (artículos 77 al 79).—*Capítulo III.*—De las Reservas (arts. 80 al 86).—*Capítulo IV.*—Sistema Contable (arts. 87 y 88).

Título V.—Prestaciones.—*Capítulo I.*—De sus clases (art. 89).—Sección 1.ª Prestaciones a los productores fijos (art. 90).—Sección 2.ª Prestaciones a los productores no fijos (artículo 91).—Sección 3.ª Prestaciones extrarreglamentarias (art. 92).—*Capítulo II.*—Pensión por jubilación (arts. 93 al 96).—*Capítulo III.*—Pensión por invalidez (arts. 97 al 103).—*Capítulo IV.*—Pensión de viudedad (arts. 104 al 108).—*Capítulo V.*—Pensión de orfandad (arts. 109 al 116).—*Capítulo VI.*—Larga enfermedad (arts. 117 al 119).—*Capítulo VII.*—Auxilio por defunción (arts. 120 al 122).—*Capítulo VIII.*—Asistencia sanitaria (artículos 123 al 127).—*Capítulo IX.*—Premios por matrimonio y natalidad (arts. 128 al 130).—*Capítulo X.*—Premio a la vejez (arts. 131 al 133).—*Capítulo XI.*—Subsidio por viudedad (arts. 134 al 137).—*Capítulo XII.*—Subsidio por orfandad (arts. 138 al 140).—*Capítulo XIII.*—Subsidio por defunción (art. 141).—*Capítulo XIV.*—Premios por matrimonio y natalidad (art. 142).—*Capítulo XV.*—Disposiciones comunes a todas las prestaciones.—Sección 1.ª Disposiciones generales (arts. 143 al 146).—Sección 2.ª Consideración de socio activo (arts. 147 al 150).—Sección 3.ª Período mínimo de cotización (artículo 151).—Sección 4.ª Concepto de antigüedad (arts. 152 al 154).—Sección 5.ª Salario regulador (arts. 155 y 156).—Sección 6.ª Soledad de prestaciones (arts. 157 y 158).—Sección 7.ª Percepción de prestaciones (artículos 159 al 163).

Título VI.—Régimen disciplinario.—*Capítulo I.*—De las faltas y sus sanciones (artículos 164 al 166).—*Capítulo II.*—Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones (arts. 167 al 169).

Título VII.—De los recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno (artículos 170 al 172).

Título VIII.—De la Inspección e Intervención (arts. 173 al 177).

Título IX.—Disposiciones generales.—Reforma de los Estatutos (arts. 178 y 179). Eficacia de los acuerdos de los Organos de Gobierno (arts. 180 y 181).

Disposición final.—Fecha de entrada en vigor de los Estatutos.

Disposiciones transitorias.

4.º Percibir los beneficios y causar las prestaciones que correspondan con arreglo a lo regulado en el presente Estatuto y en las disposiciones o acuerdos del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

5.º Recurrir contra los acuerdos de los Organos de Gobierno de la Entidad en materia de reconocimiento de derechos, conforme se determina en los presentes Estatutos.

Art. 18. Serán obligaciones de los socios beneficiarios:

1.ª Extender y entregar a la Empresa la declaración de afiliación individual, consignando en ella los datos personales, familiares y profesionales que por la Entidad se determinen.

2.ª Permitir que por parte de su Empresa les sean descontadas de sus salarios las cuotas a su cargo que se establecen en los presentes Estatutos.

3.ª Dar cuenta a la Institución, por medio de las Delegaciones Provinciales, de las variaciones de orden personal, familiar o profesional que puedan modificar la declaración inicial a que se refiere el apartado primero de este artículo.

4.ª Cumplimentar, para la obtención de cualquiera de los beneficios concedidos por estos Estatutos, el necesario documento de solicitud, al que unirá aquellos documentos o declaraciones que para cada caso se exijan.

5.ª Observar los plazos y formalidades establecidos en los presentes Estatutos para la presentación de las solicitudes de beneficios.

6.ª Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Institución, facilitando a ésta cuantos datos le sean interesados y allanando, en la medida que esté a su alcance, las dificultades que los funcionarios de aquélla puedan encontrar en el desempeño de sus funciones; si así no lo hicieron podrán incurrir en responsabilidad y ser objeto de sanción.

7.ª Cumplir los preceptos de los Estatutos y los acuerdos y resoluciones de los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 19. Los asociados que voluntaria o forzosamente dejen de prestar sus servicios por cuenta ajena serán baja en el Montepío, sin perjuicio de que cuando se reintegren al trabajo en cualquiera de las Empresas encuadradas en esta Entidad, y así se notifique a la misma, se le reconozca la antigüedad laboral y mutualista que con anterioridad a su baja hubieran adquirido.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior y, por consiguiente, serán considerados como socios en servicio activo:

1.º Los productores enfermos, los que estuviesen cumpliendo el Servicio Militar y los que se encuentren en situación de paro involuntario, con las limitaciones y requisitos que para todos estos casos se establece en los artículos del presente Estatuto.

2.º Los que se encuentren en situación de excedencia voluntaria o forzosa.

Este derecho quedará limitado al período de tiempo que, según la Reglamentación de Trabajo, esté obligada la Empresa a reservar al productor su puesto en el trabajo. Por parte del asociado deberán cumplirse a estos efectos los siguientes requisitos:

a) Solicitar su continuidad, como socio ac-

tivo del Montepío, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que hubiera dejado de prestar su trabajo a la Empresa.

b) Abonar por su cuenta, y en los plazos reglamentarios, las cuotas patronales y obreras correspondientes. Para la determinación de éstas se considerará como salario base de cotización el que fuere regulador de prestaciones, según las cotizaciones efectuadas, al tiempo de su baja en el trabajo activo.

No gozarán del beneficio de continuar como socios activos de esta Institución, aquellos trabajadores que en situación de excedencia, ejerciten otra actividad que lleve consigo su obligada incorporación a otra Institución de Previsión Laboral.

CAPITULO IV

Del Gobierno del Montepío

Art. 20. Tendrán también la consideración de beneficiarios de este Montepío aquellas personas que sin estar asociadas a la Institución puedan solicitar y tengan derecho a percibir las prestaciones o beneficios establecidos en estos Estatutos, en virtud de la relación familiar en que se hallen con cualquier socio beneficiario-causante.

Serán obligaciones de las personas a que se refiere el presente artículo:

1.ª Solicitar, dentro de los plazos que en los presentes Estatutos se determinan y en la forma que se establece para cada caso, los beneficios que puedan corresponderle.

2.ª Aportar los documentos y datos que por la Entidad se les exija para la concesión de beneficios y prestar, con exactitud y fidelidad, las declaraciones que les fueran exigidas con el mismo fin.

TITULO III

Organización y funcionamiento

CAPITULO PRIMERO

Del Gobierno del Montepío

Art. 21. Los Organos de Gobierno del Montepío Nacional de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias del Aceite y sus Derivados, son:

a) La Asamblea General.

b) La Junta Rectora.

c) La Comisión Permanente Nacional.

d) Las Comisiones Provinciales Perma-

nententes.

Art. 22. Son ejecutores de los acuerdos los Organos de Gobierno:

a) El Director del Montepío.

b) Los Delegados Provinciales.

Art. 23. Los Organos de Gobierno del Montepío estarán integrados por el número de Vocales natos y electivos que se determinen en la resolución del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales a propuesta de la Junta Rectora de la Institución.

Para formular dicha propuesta deberá tenerse en cuenta la proporcionalidad existente entre el número de afiliados de los distintos Sectores Laborales y categorías profesionales así como las normas establecidas en las disposiciones vigentes sobre proporción entre las representaciones empresaria y obrera y demás requisitos que en ellas se exijan.

CAPITULO II

De los Organos de Gobierno nacionales

SECCIÓN 1.ª—De la Asamblea General

Art. 24. La Asamblea General es el Organismo supremo de la Institución, constituida por representantes de los socios protectores y beneficiarios. En ella concurren la orientación del presente y futuro de la Entidad, la adopción de medidas y estudio de sugerencias que entrañen modificación de estos Estatutos y la superior vigilancia de los Organos de Gobierno de ella derivados en el cumplimiento de sus misiones.

Art. 25. Será competencia de la Asamblea General:

1.º Elegir los miembros que han de constituir la Junta Rectora.

2.º Conocer la actuación de la Junta Rectora y de sus miembros en relación con el ejercicio de las funciones propias de sus cargos.

3.º Intervenir, en la forma que corresponda, en todos aquellos asuntos del Montepío cuya competencia no esté reservada a otros Organos del mismo.

4.º Examinar y aprobar, si procede, la Memoria, presupuestos, cuentas, inventarios y balances del Montepío que le someta la Junta Rectora.

5.º Estudiar, bien a propuesta de la Junta Rectora o por iniciativa propia, la concesión de otros beneficios que mejoren los establecidos en estos Estatutos, elevando la propuesta al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

6.º Resolver sobre las propuestas que le remita la Junta Rectora y las Comisiones Provinciales Permanentes por mediación de aquélla.

7.º Acordar la reforma de estos Estatutos cuando lo estime oportuno, elevándola al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales para su estudio y resolución.

Art. 26. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias o extraordinarias. Las reuniones ordinarias tendrán lugar una vez al año; las extraordinarias, siempre que, con la suficiente justificación, lo acuerde la Junta Rectora por su iniciativa o por solicitarlo la tercera parte de los asambleístas.

En las reuniones extraordinarias sólo podrán tratarse aquellos asuntos expresamente consignados en el orden del día, el que deberá ser sometido a la previa aprobación del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 27. Las convocatorias de la Asamblea General se harán por su Presidente con una antelación mínima de veinte días y por duplicado, a fin de dejar un ejemplar en poder del convocado y de que el otro sirva para poder acreditar en cualquier circunstancia el momento en que fué recibido por su destinatario.

A las convocatorias deberá acompañarse el orden del día de la sesión correspondiente.

Art. 28. Las reuniones de la Asamblea General podrán celebrarse en primera o segunda convocatoria. Desde el momento en que debiera haberse celebrado en primera convocatoria al señalado para celebrar sesión en segunda, mediará un espacio de veinticuatro horas, sin que por ningún motivo ni en ningún caso pueda reducirse este lapso de tiempo.

Art. 29. Para que la Asamblea General se considere válidamente constituida será necesario la asistencia de la mitad más uno de sus componentes en primera convocatoria; en segunda será suficiente con que asista la tercera parte de sus miembros.

Art. 30. Los miembros de la Asamblea General podrán hacer uso de la palabra:

1.º Para una cuestión previa o de orden.

2.º Para defender o impugnar una proposición.

3.º Para contestar cuando hayan sido aludidos personalmente.

4.º Para rectificar una sola vez, cuando hayan tomado parte en algún debate.

Art. 31. Siempre que los miembros de la Junta Rectora hagan uso de la palabra en reuniones de la Asamblea General se entenderá que no consumen turno, a los efectos reglamentarios.

Art. 32. Cuando un miembro de la Asamblea General se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido, sino para ser llamado al orden por la Presidencia.

El Presidente podrá retirar la palabra al miembro de la Asamblea General a quien hubiese llamado al orden e incluso ordenará su expulsión del local, si ello fuese necesario.

Art. 33. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría de votos entre los miembros que se hallen presentes. Cuando resulte empate en una votación, decidirá con su voto el Presidente.

Art. 34. Las votaciones serán nominales cuando así lo solicite la tercera parte de los miembros asistentes.

Art. 35. De las deliberaciones de la Asamblea General se harán constar en el Libro de Actas correspondiente —debidamente diligenciado por la Delegación de Trabajo—, las conclusiones y acuerdos adoptados, autorizándose las actas con las firmas del Presidente y Secretario.

SECCIÓN 2.ª—De la Junta Rectora

Art. 36. La Junta Rectora es el órgano que, en nombre de la Asamblea General, tiene a su cargo el gobierno constante y directo del Montepío.

Art. 37. Será competencia de la Junta Rectora:

1.º Cumplir y hacer cumplir los preceptos contenidos en los presentes Estatutos y los de carácter general que sean aplicables al Montepío.

2.º Proponer a la Asamblea General la creación de nuevos beneficios cuando las posibilidades económicas del Montepío lo permitan, y la reforma de estos Estatutos, si lo estimare necesario.

3.º El estudio y resolución, previo informe de la Comisión Provincial respectiva y de la Dirección del Montepío, de los expedientes sobre las siguientes prestaciones:

Pensión por jubilación.

Pensión por invalidez.

Pensión de viudedad.

Pensión de orfandad.

Pensión de larga enfermedad.

Premio a la vejez para productores no fijos.

Igualmente resolverá los expedientes de prestaciones extrarreglamentarias con cargo al tanto por ciento que, del fondo a este fin destinado, le corresponde según lo establecido en el artículo 85 de estos Estatutos.

4.º Autorizar que sea trimestral el pago de cuotas por parte de aquellas Empresas que lo soliciten y en las que concurran las circunstancias prevenidas en el artículo 71 de estos Estatutos.

5.º Conocer y aprobar, en su caso, las solicitudes formuladas por las Empresas relativas al ingreso conjunto del importe total de cuotas correspondientes a Centros de Trabajo establecidos en distintas provincias.

6.º Nombrar el Vocal representante del Montepío en las Entidades de Previsión Social que pudieran constituirse por las Empresas.

7.º Estudiar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

8.º Someter a la Asamblea General, para su aprobación, la Memoria anual, los estados de cuentas, inventarios y balances del Montepío.

9.º Aprobar la distribución de fondos.

10. Acordar las inversiones.

11. Imponer las sanciones procedentes con arreglo a lo establecido en el título correspondiente de estos Estatutos.

12. Proveer interinamente, hasta la inmediata renovación de los órganos de Gobierno, las vacantes que se produzcan con anterioridad a la extinción del mandato de sus miembros o los de la Asamblea General.

13. Resolver o informar a la Superioridad, según los casos, en los desacuerdos entre las Comisiones Provinciales Permanentes y los Delegados provinciales.

14. En general, adoptar las resoluciones que considere conveniente, siguiendo la orientación y las normas señaladas en los presentes Estatutos, así como elevar a la superioridad las sugerencias que estime oportunas para la adopción de medidas que redunden en beneficio de los beneficiarios.

Art. 38. La Junta Rectora se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, a fin de estudiar y resolver cuantos asuntos tenga pendientes.

Además de estas reuniones preceptivas, se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente, bien por iniciativa de éste o por haberlo así solicitado la tercera parte de los miembros, o porque el Director lo proponga, atendiendo a razones justificadas.

Art. 39. Las convocatorias para las reuniones de la Junta Rectora deberán hacerse con una antelación mínima de siete días y en la forma prevenida en el artículo 27.

Art. 40. En todo lo referente al número de asistentes necesarios para que la Junta Rectora se considere válidamente constituida, deliberaciones, acuerdos y acta de las sesiones, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 29 al 35, relativos a la Asamblea General.

Art. 41. Cuando por circunstancias especiales se hallen reunidos en el domicilio social la totalidad de los miembros de la Junta Rectora, sin previa convocatoria, podrán celebrar sesión y tener plena validez los acuerdos adoptados en la misma, sin más requisito que la aprobación previa y por unanimidad, de declarar la conveniencia de celebrarla en tal forma, debiendo levantarse el acta correspondiente, al igual que en las demás sesiones.

SECCIÓN 3.ª—De la Comisión Permanente Nacional

Art. 42. La Comisión Permanente Nacional es el Órgano delegado de la Junta Rectora, que se constituye para la más ágil y rápida resolución de los expedientes de prestaciones y asuntos de trámite de la Entidad.

Art. 43. Corresponde concretamente a la Comisión Permanente Nacional las funciones y cometidos que se regulan en los apartados primero, tercero y noveno del artículo 37 de los presentes Estatutos, así como todas aquellas funciones que siendo de la competencia de la Junta Rectora sean expresamente delegadas por ésta.

Art. 44. La Comisión Permanente Nacional se reunirá por lo menos una vez al mes.

Además de esta reunión preceptiva, se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente, bien por iniciativa de éste, por haberlo solicitado así la tercera parte de sus miembros o por proponerlo el Director, atendiendo a razones justificadas.

Las convocatorias para las reuniones deberán hacerse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, en la forma prevenida en el artículo 27 de estos Estatutos.

Art. 45. En todo lo referente al número de asistentes necesarios para que la Comisión Permanente Nacional se considere válidamente constituida, deliberaciones, acuerdos y actas de las sesiones se aplicarán las normas contenidas en los artículos 29 al 35, relativos a la Asamblea General.

SECCIÓN 4.ª—Del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas

Art. 46. En el Presidente de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional concurren la alta representación y orientación de la Entidad, de la que es primera jerarquía y máxima figura representativa de los asociados.

Serán funciones del Presidente del Montepío o de quien reglamentariamente le sustituya:

1.ª Representar al Montepío, en unión del Director del mismo, en todos los actos y contratos que se celebren.

2.ª Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional, dirigiendo la discusión, así como decidir las votaciones en caso de empate.

3.ª Fijar el orden del día de las reuniones de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional.

4.ª Ejercitar funciones de fiscalización en todos los servicios y actividades del Montepío, cuando lo considere oportuno, asistido del Director.

5.ª Designar, de acuerdo con la Junta Rectora, las personas que deban cubrir interinamente, hasta la inmediata renovación de los Órganos de Gobierno, las vacantes que se produzcan con anterioridad a la fecha de terminación del mandato de los Vocales de los Órganos de Gobierno.

Art. 47. El Vicepresidente sustituirá al Presidente, con iguales atribuciones y deberes, en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento u otra cualquier circunstancia que así lo requiera, como igualmente en aquellos casos en que mediare delegación.

Art. 43. El Secretario del Montepío actuará como Secretario de Actas de la Asamblea General y de los Organos derivados de ésta, sin derecho a voz ni voto.

Art. 49. Serán funciones del Secretario de Actas:

1.ª Actuar como tal en las sesiones que celebre la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional, redactando las actas que habrán de ser autorizadas con el visto bueno del Presidente, así como llevar los correspondientes Libros de las mismas.

2.ª Asistir al Presidente en la redacción del orden del día de las sesiones y cursar las convocatorias para ellas.

3.ª Autorizar con el visto bueno del Presidente las certificaciones que no sean de la especial competencia de otro cargo del Montepío.

CAPITULO III

De los Organos de Gobierno Provinciales

Art. 50. Se constituirá Comisión Provincial Permanente (que tendrá como domicilio irrenunciable el de la Delegación Provincial de Mutualidades y Montepíos Laborales) en las provincias y en la forma que se indique en la resolución correspondiente del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 51. Las Comisiones Permanentes Provinciales se reunirán siempre que lo determine el Presidente o mediante propuesta a aquél del Delegado Provincial de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Como mínimo, celebrarán sesión cada quince días. No obstante, deberá prescindirse de estas reuniones preceptivas cuando no hubiere asuntos pendientes de que tratar.

Art. 52. Las convocatorias se harán con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas y en la forma prevenida en el artículo 27. Deberá constar el día y hora fijado para la reunión y se hará saber que, de ser necesaria, la sesión en segunda convocatoria se celebrará media hora después de la señalada para la primera.

Art. 53. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, siendo necesario para que tengan validez que concurran en primera convocatoria la mitad más uno de sus componentes con voto y un mínimo de la tercera parte de sus miembros en segunda.

Las Comisiones de cuatro miembros podrán reunirse en segunda convocatoria con sólo dos de ellos.

En caso de empate decidirá con su voto el Presidente.

Art. 54. Los acuerdos de las Comisiones se harán constar en un Libro de Actas, que firmarán el Presidente y el Secretario; estos acuerdos serán ejecutivos, sin que sea precisa la aprobación del acta en la sesión posterior.

Inmediatamente después de cada sesión, y con el fin del más rápido cumplimiento de los acuerdos adoptados, el acta se pasará al Delegado provincial de Mutualidades y Montepíos Laborales, quien tendrá la facultad de suspender aquellos que estime antirreglamentarios.

Art. 55. El Delegado provincial de Mutualidades y Montepíos Laborales remitirá al Organó de Gobierno superior inmediato, en el plazo de cuarenta y ocho horas, copia autorizada de las actas, las cuales visará o exten-

derá en ellas la correspondiente diligencia de suspensión en los casos en que proceda.

Art. 56. Las Comisiones Provinciales Permanentes, como delegadas de sus Organos jerárquicos nacionales, tendrán las siguientes misiones y facultades:

A) Informativas:

1.ª Cuidar y mantener la relación directa con los asociados para lograr el más cierto conocimiento de sus aspiraciones y necesidades y orientarles en cuanto redunde en beneficio de la Obra Mutual.

2.ª Informar a los Organos superiores del Montepío de los defectos que observen o comprueben en el desarrollo y acción social de la Entidad, así como de las medidas que las circunstancias aconsejen adoptar para remediarlas.

3.ª Examinar e informar las solicitudes de las prestaciones que a continuación se establecen, elevándolas a la Comisión Permanente nacional para su resolución definitiva:

Pensión por jubilación.

Pensión por invalidez.

Pensión de viudedad.

Pensión de orfandad.

Pensión por larga enfermedad.

Premio a la vejez para productores no hijos.

4.ª Examinar e informar los expedientes relativos a la concesión de prestaciones extrarreglamentarias que fueren de la competencia de la Junta Rectora.

5.ª Fomentar el espíritu mutualista entre los asociados, mediante la gestión y actos convenientes que divulguen las ventajas del sistema.

B) De representación:

1.ª Actuar como delegadas de la Junta Rectora, dentro de su jurisdicción, a todos los efectos que los presentes Estatutos determinan, ostentando la representación de la Entidad y de sus Organos Rectores.

2.ª Representar a los Organos Superiores en los asuntos de la exclusiva competencia de éstos, cuando exista delegación.

C) De vigilancia:

1.ª Hacer cumplir los preceptos contenidos en los presentes Estatutos, las disposiciones dictadas con carácter general, así como los acuerdos de la Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional.

2.ª Examinar las liquidaciones de cuotas.

3.ª Cuidar la inmediata entrega a los asociados y beneficiarios de las prestaciones acordadas y aprobadas.

4.ª Revisar los expedientes relativos a pensiones por Invalidez y Larga Enfermedad que se hubieran concedido por los Organos de Gobierno competentes a cualquiera de los asociados de su jurisdicción.

D) Resolutivas:

1.ª Conocer y resolver, dando cuenta a los Organos Centrales conforme determinan estos Estatutos, los expedientes sobre Auxilios por Defunción, Subsidio de Viudedad, de Orfandad y Premios por Matrimonio y Natalidad.

2.ª Resolver los expedientes sobre prestaciones extrarreglamentarias con cargo a los fondos que para este fin correspondan a la provincia, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 85 de estos Estatutos.

3.ª Constituirse en patronato tutelar de los huérfanos de padre y madre de la respectiva profesión o rama laboral, con residencia en la provincia.

CAPITULO IV

Elección de Vocales y Organos de Gobierno**SECCIÓN 1.ª—Disposiciones relativas a los miembros de los Organos de Gobierno**

Art. 57. Para ser Vocal de los Organos de Gobierno Nacionales o Provinciales del Montepío se precisará reunir los siguientes requisitos: ser asociado, mayor de edad, estar en el pleno disfrute de sus derechos civiles y profesionales, llevar trabajando como mínimo diez años y pertenecer a la Organización Sindical.

No podrán ostentar cargos representativos en la Entidad aquellos socios que no cumplan normalmente las diversas obligaciones que estos Estatutos le imponen.

Art. 58. Para ser Vocal de las Comisiones Provinciales Permanentes se preferirá, en igualdad de circunstancias, aquellas personas que reúnan la condición de residir en la localidad donde tenga su sede la respectiva Comisión o en sus cercanías.

Art. 59. Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocales de los Organos de Gobierno del Montepío son honoríficos y obligatorios.

Los miembros de los Organos de Gobierno, por su asistencia a las reuniones reglamentariamente convocadas percibirán dietas de asistencia o de asistencia y desplazamiento, según los casos. La cuantía de estas dietas será fijada por la Junta Rectora.

Art. 60. La asistencia a las reuniones reglamentariamente convocadas tendrá la consideración de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, a los efectos prevenidos en el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo.

SECCIÓN 2.ª—De la elección de los Organos de Gobierno

Art. 61. Las Juntas Económicas y Sociales de los Sindicatos Provinciales elegirán las Comisiones Provinciales Permanentes entre las personas que reúnan las condiciones que se determinan en estos Estatutos.

A las Juntas Sociales corresponderá la elección de los Vocales representantes de los trabajadores, y a las Económicas, los de las Empresas. En la elección solamente tomarán parte aquellos vocales de las Juntas Sociales y Económicas que sean socios del Montepío.

Art. 62. Las actas de elección, debidamente autorizadas por el Delegado provincial de Sindicatos, serán remitidas a las Delegaciones Provinciales de Trabajo, las que, con su informe, las elevarán a la Jefatura del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Una vez autorizada por aquella Jefatura la constitución de una Comisión Permanente Provincial, será convocada por el Delegado provincial de Trabajo, quien dará posesión a los Vocales, elevando el acta correspondiente, que remitirá al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

En esta sesión los Vocales elegirán al Presidente y al Secretario de Actas.

Art. 63. La Asamblea General quedará constituida con Vocales de las Comisiones Provinciales Permanentes en la forma y número que se determine en la Resolución del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 64. La Asamblea General, en su primera reunión, elegirá de entre sus miembros los componentes de la Junta Rectora; ésta designará, a su vez, los cargos de Presidente y Vicepresidente, que lo serán de todos los Organos de Gobierno Nacionales.

Los cargos de Presidente y Vicepresidente deberán recaer en miembros electivos de la Junta Rectora.

El Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales podrá poner su veto a los nombramientos efectuados, previas las informaciones que considere precisas para fundar su resolución.

CAPITULO V

De los Organos ejecutivos del Montepío**SECCIÓN 1.ª—De Director**

Art. 65. Corresponderán al Director y serán funciones del mismo:

1.ª Representar al Montepío, en unión del Presidente, en todos los actos y contratos que se celebren, así como ante las Autoridades, Tribunales y Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares, o cualesquiera otros Organismos, Entidades, oficinas y personas con los poderes oportunos de la Junta Rectora cuando sean necesarios a los indicados efectos.

2.ª Asistir al Presidente, cuando proceda, en la fiscalización de las actividades y los servicios administrativos del Montepío.

3.ª Ejecutar los acuerdos de los Organos de Gobierno.

4.ª Proponer las reuniones de dichos Organos, cuando lo estime oportuno.

5.ª Ordenar los pagos correspondientes a la aplicación de los distintos conceptos presupuestarios y los derivados de la concesión de beneficios o prestaciones.

6.ª Autorizar con su visto bueno los justificantes de ingresos y demás documentos análogos que se expidan por el Montepío.

7.ª Ostentar la Jefatura del personal y de los servicios administrativos.

8.ª Cumplir y hacer cumplir, respondiendo ante sus Organos de Gobierno y Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, del fiel cumplimiento de los Estatutos, normas y procedimiento administrativo.

9.ª Informar los expedientes y documentos que se determinen o así lo requieran.

10.ª Todas las atribuciones de Dirección y gestión que no estén específicamente reservadas a la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional.

SECCIÓN 2.ª—Del Delegado provincial

Art. 66. A efectos análogos a lo establecido con respecto al Director, el Delegado provincial de Mutualidades y Montepíos Laborales ostentará, dentro de su respectivo ámbito provincial, en unión del Presidente de la Comisión Provincial Mixta, la representación legal de la Institución ante las Autoridades, Tribunales, Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares y cualesquiera otros Organismos o personas.

Art. 67. Corresponde al Delegado provincial y son funciones del mismo:

1.ª Realizar y ejecutar los acuerdos administrativos de los Organos de Gobierno na-

cionales y provinciales, debiendo estar en contacto y dependencia con el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, a los efectos de unificación, coordinación y régimen interior.

2.^a Proponer al Presidente de la Comisión Provincial, siempre que lo considere preciso, la reunión de sus miembros.

3.^a Asistir a las reuniones de la Comisión Provincial con derecho a voz, pero sin voto, con el carácter de Asesor Técnico.

4.^a Suspender, en su caso, por considerarlos antirreglamentarios, los acuerdos adoptados por la Comisión Provincial, dando cuenta al Órgano Superior inmediato a los oportunos efectos.

5.^a Coordinar la labor de los Departamentos de la Delegación con los Servicios del Montepío.

6.^a Ordenar los pagos acordados.

7.^a Ostentar la Jefatura del personal.

8.^a Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, normas y procedimiento administrativo, respondiendo de su fiel cumplimiento ante los Órganos de Gobierno del Montepío y Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

9.^a Llevar el despacho de los asuntos e informar los expedientes y documentos que se determinen, o así lo requieran.

10. Velar con el máximo interés para que los trabajadores de su ámbito territorial sean informados de todo lo referente a sus deberes y derechos cerca del Montepío.

11. Organizar, con la Comisión Provincial, los actos de entrega de pensiones y subsidios y disponer los medios para una eficaz y sincera propaganda que facilite el exacto conocimiento por los trabajadores de los fines y realizaciones del sistema mutualista.

TITULO IV

Régimen económico

CAPITULO PRIMERO.

Recursos económicos

Art. 68. Los recursos económicos del Montepío Nacional de los Trabajadores en las Industrias del Aceite y sus Derivados, son los siguientes:

1.^o La aportación de las Empresas, consistente en el 5 por 100 de los salarios de los productores que estén a su servicio.

2.^o Las cuotas de los productores, consistentes en el 4 por 100 de los salarios por ellos devengados.

3.^o El importe de cuantos donativos subvenciones o legados le sean hechos al Montepío.

4.^o Los intereses de los bienes patrimoniales de la Institución.

5.^o Los ingresos de cualquier índole que puedan efectuarse con arreglo a los preceptos contenidos en los presentes Estatutos y demás de general aplicación.

Art. 69. La obligación de cotizar a favor del Montepío por las Empresas y trabajadores en él encuadrados se inició el día 1 de mayo de 1947, con la cotización del 4 por 100 a cargo de las Empresas y otro 4 por 100 a cargo de los trabajadores.

La actual cotización regulada en el artículo

lo anterior tiene vigencia a partir del día 1 de mayo de 1951.

Art. 70. El haber o salario que ha de servir de base para la liquidación de las cuotas será el que para las Mutualidades y Montepíos Laborales se determine en la legislación vigente.

Art. 71. Las liquidaciones e ingreso de las cuotas patronal y obrera deberán realizarse por las Empresas por períodos mensuales.

No obstante, la Junta Rectora podrá autorizar que sea trimestral la liquidación y pago de cuotas para aquellas Empresas que lo soliciten, siempre que reúnan las dos condiciones siguientes:

a) Tener habitualmente un número de productores fijos superior a cincuenta.

b) Que no hayan sido objeto de sanción por morosas.

Art. 72. Los ingresos de cuotas deberán efectuarse en la forma y plazos que a continuación se expresan:

a) En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas a nombre del Montepío, en las Cajas de Ahorro Provinciales o Municipales y demás de carácter benéfico-social.

b) Cuando no exista Caja de Ahorro de la índole citada en las cercanías del Centro de Trabajo de la Empresa, ésta deberá ingresar las aportaciones en la cuenta corriente abierta a nombre del Montepío en la Entidad bancaria autorizada.

No producirán efecto alguno frente al Montepío los ingresos no realizados en las Cajas de Ahorro benéfico-sociales o Entidades bancarias expresamente autorizadas.

c) Los ingresos se realizarán dentro del mes siguiente al que la liquidación correspondía.

Las Empresas que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior efectúen los ingresos trimestralmente, lo harán dentro de los meses de abril, junio, octubre y enero; cada ingreso corresponderá a la liquidación del trimestre natural anterior.

d) Los ingresos se realizarán utilizando los modelos y cumpliendo las normas que por el Montepío se establezcan.

Art. 73. Las Empresas responderán en todo caso ante el Montepío del pago de las cuotas correspondientes a todos los asociados en ellas encuadrados. Para ello, cuando aquéllas realicen el pago de los salarios a cada interesado descontarán las cuotas que les corresponda, y que en unión de sus aportaciones deberán ser ingresadas en la forma que se determina en el artículo anterior.

Quando las Empresas no retuvieren las cuotas de sus trabajadores o no las ingresasen junto con sus aportaciones en los plazos reglamentarios, el importe de las cuotas atrasadas y de los recargos será exigible exclusivamente a la Empresa, sin que ésta pueda efectuar a los trabajadores descuento alguno.

Art. 74. La obligación de pago de cuotas al Montepío prescribirá a los cinco años, a contar de la fecha en que preceptivamente debieron ser abonadas.

Art. 75. Los asociados del Montepío que cesaren en el servicio activo de las Empresas no tendrán derecho alguno a que les sean devueltas las cuotas ingresadas, salvo cuando con carácter general y referido a

un determinado sector o clase de asociados así lo ordene el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

También procederá la devolución cuando por causa de afiliación errónea lo acuerde el Montepío o Mutualidad. Si el erróneamente afiliado viniese en la obligación de pertenecer a otra Institución de Previsión Laboral, en lugar de acordarse la devolución de cuotas se verificará el oportuno traspaso de las mismas.

Art. 76. La afiliación maliciosa de quienes no reúnan las condiciones necesarias para la misma, privará el derecho al reintegro de las cuotas satisfechas y a la concesión de toda clase de prestaciones.

CAPITULO II

Presupuestos y gastos

Art. 77. De los ingresos totales que obtenga el Montepío por todos los conceptos se destinarán los fondos necesarios para garantizar las pensiones que estos Estatutos conceden, para atender los auxilios y subsidios a los asociados activos y a sus derechohabientes y para el pago de los gastos de administración.

Art. 78. Los gastos de representación y administración de la Sede Central del Montepío, no excederán del 5 por 100 de los ingresos que la Institución obtenga por todos los conceptos.

Asimismo se destinará separadamente el 0,50 por 100 para satisfacer en canon de tutela y servicio oficial legalmente establecido y el tanto por ciento que al Montepío corresponda aportar en proporción al montante de la cotización que en cada provincia obtenga para nutrir el presupuesto que, aprobado y administrado por el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, se destinará al mantenimiento de las Delegaciones Provinciales.

Art. 79. A la Junta Rectora corresponderá la confección y presentación a la Asamblea General del presupuesto de gastos e ingresos para cada ejercicio.

A estos efectos, en el mes de enero de cada año, la Dirección del Montepío elevará al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales el censo técnico cerrado el 31 de diciembre anterior y el balance de saldos; también elevará el proyecto de presupuesto de gastos de administración.

A la vista de los documentos anteriores, el Servicio determinará conforme a las disposiciones en vigor y a lo que estos Estatutos disponen, las reservas, fondos y amortizaciones a establecer.

Recibidas las oportunas instrucciones, la Junta Rectora confeccionará en el mes de febrero el proyecto de presupuesto definitivo, que someterá a la Asamblea General en unión del balance y Memoria del ejercicio anterior.

A los efectos anteriores, la Asamblea General deberá reunirse, si no existe causa suficiente que lo impida, en el mes de marzo de cada año.

CAPITULO III

De las reservas

Art. 80. Las reservas técnicas del Montepío estarán constituidas en la cuantía y forma que el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales determine, e invertidas por el sistema y orden de preferencia que establezcan las disposiciones legales vigentes.

Art. 81. Con los saldos de cada ejercicio se establecerán las siguientes reservas:

a) "Reservas para prestaciones concedidas y obligaciones pendientes de pago", que serán equivalentes a las cantidades pendientes de liquidación al finalizar cada ejercicio.

b) "Reservas matemáticas". Para garantizar las pensiones a todos los jubilados o jubilables, viudas, huérfanos, inválidos o enfermos. Estas reservas serán equivalentes al capital que garantice técnicamente al 3,50 por 100 de interés anual dichas prestaciones.

c) "Reservas de seguridad". Para garantizar en parte las prestaciones a los productores en activo. Estarán constituidas por la diferencia existente entre la siniestralidad prevista y la real; su importe máximo será revisable, siendo en principio el 100 por 100 de los riesgos anuales, previstos para todas las prestaciones, excepto la de jubilación, que se cifra en los valores de cobertura de las cinco edades mayores no jubilables.

d) "Fondo de estabilización". Para regularizar las fluctuaciones de la cotización en periodos de crisis económica o incidentales. Estará constituido por los sobrantes de las reservas de seguridad y el 0,50 del total de la cotización.

e) "Fondo de reaseguro". Se constituirá con el 5 por 100 de la cotización a fin de que la Caja de Coordinación y Compensación cubra los excesos y diferencias de riesgos que se determinen.

Art. 82. Las reservas comprendidas en los apartados b) y c) del artículo anterior estarán constituidas por los valores mobiliarios que determine y apruebe el Ministerio de Trabajo, y serán depositados en el Banco de España a disposición conjunta del Ministerio y de la Institución, pudiendo destinarse únicamente al fin para el que fueron calculadas y depositadas.

Art. 83. Todo acto de disposición que se realice sobre los bienes inmuebles de propiedad de la Entidad deberá ser autorizado expresamente por el Ministerio de Trabajo. A estos efectos, en la escritura pública que se otorgue para la adquisición de dichos inmuebles se hará constar la necesidad del cumplimiento de tal requisito; igualmente se hará constar tal circunstancia en la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad.

Art. 84. En el caso de que se acuerde la creación de una Obra Asistencial o Institución que suponga inversiones permanentes no se podrá ejecutar dicho acuerdo sin la autorización expresa del Ministerio de Trabajo, el cual previamente estudiará la posible coordinación que pueda existir con proyectos análogos de otros Organismos o Instituciones.

Art. 85. El Montepío constituirá en cada ejercicio un fondo para prestaciones extra-

reglamentarias formado con el 2 por 100 de la cotización obtenida en el ejercicio anterior. Dicho fondo se distribuirá en la siguiente forma:

a) El 75 por 100 del importe procedente de cada provincia a disposición de los Organos provinciales.

b) El 25 por 100 restante, a disposición de los Organos de Gobierno Centrales.

Al finalizar cada ejercicio, el saldo del fondo de prestaciones extrarreglamentarias incrementará el fondo del siguiente ejercicio.

Art. 86. Los excedentes libres, después de constituir las reservas y fondos que se especifiquen en los artículos anteriores, se destinarán a los fines que determine el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, a propuesta de la Junta Rectora.

CAPITULO IV

Sistema contable

Art. 87. La Sede Central del Montepío organizará su contabilidad por el sistema de partida doble, desarrollándola en los siguientes libros:

- Libro Diario.
- Libro Mayor.
- Libro de Inventario y Balances.
- Libro de movimiento de Caja.
- Libro de cuentas corrientes con las Delegaciones.
- Libro de cuentas corrientes de Tesorería.
- Libro de cuentas técnicas.
- Registro de Valores y Reservas.
- Otros libros que la práctica haga necesarios.

Art. 88. Las Delegaciones Provinciales organizarán su contabilidad oficial por el mismo sistema que el de la Sede Central, y será común a todas las Instituciones que las Delegaciones representen.

TITULO V

Prestaciones

CAPITULO PRIMERO

De sus clases

Art. 89. Como consecuencia directamente derivada de las especiales circunstancias que concurren en los productores afectados por la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Industrias del Aceite y sus Derivados, las prestaciones que concede el Montepío serán de dos clases:

- Prestaciones a los productores que trabajan con carácter fijo.
- Prestaciones a los productores que prestan sus servicios con carácter temporal y temporero.

SECCIÓN 1.ª—Prestaciones a los productores fijos

Art. 90. El Montepío concederá a los beneficiarios productores fijos en las Industrias del Aceite las prestaciones que se enumeran a continuación, siempre que concurren las circunstancias y que se cumplan los requi-

sitos establecidos en los presentes Estatutos:

- Pensión por Jubilación.
- Pensión por Invalidez.
- Pensión por Viudedad.
- Pensión de Orfandad.
- Pensión por Larga Enfermedad.
- Asistencia Sanitaria.
- Auxilio por Defunción.
- Premio por Matrimonio.
- Premio por Natalidad.

SECCIÓN 2.ª—Prestaciones a los productores no fijos

Art. 91. El Montepío concederá a sus beneficiarios, trabajadores eventuales y temporeros en las Industrias del Aceite, las prestaciones que se enumeran a continuación, siempre que concurren las circunstancias y se cumplan los requisitos establecidos en los presentes Estatutos:

- Premio a la Vejez.
- Subsidio de Viudedad.
- Subsidio de Orfandad.
- Subsidio por Defunción.
- Premio por Matrimonio.
- Premio por Natalidad.

SECCIÓN 3.ª—Prestaciones extrarreglamentarias

Art. 92. Cuando lo permitan las disponibilidades del fondo a que se refiere el artículo 85, la Institución podrá conceder prestaciones extrarreglamentarias a aquellas personas que, vinculadas a las profesiones que encuadra el Montepío, no puedan hacer efectivos sus derechos por fallarles alguna condición o requisito, o que sufran una desgracia o necesidad apremiante que no ocasione derecho a prestación con arreglo a los presentes Estatutos.

CAPITULO II

Pensión por Jubilación

Art. 93. Se concederá una pensión vitalicia a los socios beneficiarios que al cesar en el servicio activo de las Empresas reúnan las condiciones siguientes:

- Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
- Tener una antigüedad mínima de diez años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena.
- Tener cubierto el período mínimo de cotización que se preceptúa en el artículo 151 de estos Estatutos.
- Ser socio activo del Montepío.

También tendrán derecho a la pensión de Jubilación al cumplir los sesenta y cinco años los pensionistas del Montepío por Invalidez o Larga Enfermedad y los incapacitados por accidente de trabajo o enfermedad profesional indemnizable, que reúnan los requisitos de los apartados b), c) y d) al tiempo de cesar en el trabajo activo por causa del accidente o la enfermedad. En estos casos, para la determinación de la cuantía de la pensión, no se computará el tiempo transcurrido desde aquel momento.

Art. 94. La cuantía de la pensión por Jubilación se determinará en la forma que a continuación se establece:

Con 10 años de antigüedad laboral	el 35 % del salario regulador.
" 20 " " " "	" 45 % " " "
" 30 " " " "	" 55 % " " "
" 40 " " " "	" 65 % " " "
" 45 " " " "	" 70 % " " "

Si la antigüedad en el trabajo que se acredite se hallare comprendida entre dos de los períodos establecidos anteriormente se concederá la pensión que corresponda al período inferior, incrementada proporcionalmente por cada año completo que excediere de estos períodos. Si dicha antigüedad no consiste en un número completo de años, la fracción se computará como año completo cuando exceda de seis meses.

El tanto por ciento que corresponda aplicar, conforme a la antigüedad laboral del asociado, será a su vez incrementado en un 1 por 100 por cada año de cotización, sin poder exceder del 5 por 100, que corresponderá a los asociados que hubiesen cotizado durante cinco o más años a la Institución.

Art. 95. La pensión de Jubilación podrá ser solicitada con una antelación máxima de tres meses a la fecha en que el asociado desee disfrutarla. Caso de ser concedida la pensión no producirá sus efectos hasta que el productor presente el certificado de baja definitiva en sus servicios profesionales.

Art. 96. La pensión de Jubilación será incompatible con todo trabajo remunerado por cuenta ajena, salvo los prestados en las actividades agrícolas y pecuarias.

Los jubilados pensionistas que volvieren a trabajar por cuenta ajena dejarán de percibir su pensión. A estos efectos deberán dar cuenta al Montepío; si así no lo hicieren serán sancionados con la pérdida de la pensión y estarán obligados a devolver las cantidades indebidamente cobradas.

Al cesar nuevamente en el trabajo, el Montepío restablecerá la pensión que venían percibiendo, sin que ésta pueda sufrir variaciones por razón de los trabajos prestados después de su concesión.

El fallecimiento del productor en la situación regulada en el párrafo segundo no privará a sus familiares de los derechos concedidos en el presente título a los derechohabientes de los pensionistas del Montepío.

CAPITULO III

Pensión por Invalidez

Art. 97. El Montepío concederá pensión vitalicia por invalidez a los socios beneficiarios que quedasen incapacitados absoluta y permanentemente para todo trabajo, una vez dados de alta médica y con los requisitos y limitaciones que se establecen en este capítulo.

En caso de incapacidad indemnizable, según la legislación de Accidentes y Enfermedades profesionales, el incapacitado tendrá el derecho consignado en el artículo 103.

Art. 98. No tendrán derecho a pensión por Invalidez aquellos asociados que hubieren adquirido imposibilidad física de trabajo por causas que la Junta Rectora estime voluntarias.

Art. 99. Se concederá la pensión por Invalidez al socio beneficiario que al tiempo de cesar en su trabajo reuniere los siguientes requisitos:

a) Ser socio activo o pensionista por Larga Enfermedad.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en el trabajo por cuenta ajena.

c) Tener cubierto el período mínimo de cotización que se establece en el artículo 151 de estos Estatutos.

Cuando la invalidez del asociado se haya producido por accidente o hecho súbito, la Junta Rectora podrá conceder pensión de Invalidez, aunque no estén cubiertos los períodos mínimos de antigüedad y cotización, siempre que el asociado tenga efectuada la cotización anterior a la fecha del hecho causante.

Art. 100. Para la determinación de la cuantía de esta pensión se aplicará la escala establecida para la pensión de Jubilación, teniendo en cuenta que su cuantía mínima será equivalente al 50 por 100 del salario regulador del socio beneficiario.

Art. 101. La pensión de Invalidez quedará anulada si el beneficiario de la misma recobra las condiciones físicas suficientes para realizar trabajo activo por cuenta ajena o cuando no cumpliera con exactitud las prescripciones facultativas de los Médicos de la Institución.

El Montepío revisará periódicamente los expedientes, y se reserva el derecho de reconocimiento médico siempre que lo estime conveniente.

Art. 102. Los pensionistas por invalidez que cumplieren la edad de sesenta y cinco años podrán optar entre continuar percibiendo aquella pensión o pasar a percibir la de Jubilación, siempre que reuniesen los requisitos exigidos en los apartados b) y c) de la artículo 93 al tiempo de cesar en el trabajo activo por causa de la invalidez. Para determinar la cuantía de la pensión no será computable el tiempo transcurrido desde aquel momento.

Art. 103. En el caso de incapacidad indemnizable, según la legislación de accidentes y enfermedades profesionales, el incapacitado tendrá derecho a pensión de Jubilación desde la edad de sesenta y cinco años, conforme a lo prevenido en el artículo 93.

CAPITULO IV

Pensión de Viudedad

Art. 104. Causará derecho a la pensión de Viudedad el socio beneficiario que reuniese a su fallecimiento las siguientes condiciones:

a) Ser socio activo o pensionista de la Institución.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en el trabajo por cuenta ajena.

c) Tener cubierto el período mínimo de cotización que se señala en el artículo 151 de estos Estatutos.

En caso de fallecimiento por accidente o hecho súbito se aplicará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 99.

Art. 105. Tendrá derecho al percibo de esta prestación la viuda o viudo del socio beneficiario fallecido que reuniese las siguientes condiciones:

a) Haber contraído matrimonio con el socio causante con dos años de antelación, por lo menos, a la fecha del fallecimiento. No se exigirá este requisito cuando quedaren hijos legítimos del fallecido con derecho a pensión de Orfandad.

b) Haber hecho vida conyugal con el causante hasta su muerte, o que en caso de separación careciese de culpabilidad.

c) No haber abandonado a sus hijos y observar una conducta honesta y moral.

El viudo deberá reunir, además de las anteriores, la condición de hallarse incapacitado total y permanentemente para el trabajo y no percibir pensión derivada de la legislación de accidentes y enfermedades profesionales.

Art. 106. Si el viudo beneficiario tuviere derecho a percibir como consecuencia de su incapacidad, de ésta u otra Institución de Previsión Laboral o de la Caja de Accidentes cualquier otra pensión, no tendrá derecho a la percepción de la de Viudedad en tanto aquella se mantenga. La viuda o viudo, en caso de percibir otra pensión de ésta u otra Institución de Previsión Laboral, sólo percibirá la de Viudedad en cuantía que, sumada a la anterior, no rebase el 100 por 100 del salario regulador del causante. En ambos casos, si se dejase de percibir aquellas pensiones, se percibirá la de Viudedad en su cuantía total.

Art. 107. La naturaleza y cuantía de la prestación de Viudedad se determinará conforme a las siguientes normas:

a) Viudas menores de cuarenta años de edad, sin hijos, con derecho a pensión de Orfandad: entrega de un capital consistente en veinticuatro anualidades.

b) Viudas mayores de cuarenta años o menores de esta edad, pero con hijos, con derecho a pensión de Orfandad; pensión vitalicia por un importe del 50 por 100 de la que por jubilación hubiese correspondido al causante, con un mínimo del 25 por 100 del salario regulador; igual norma se aplicará si el fallecido tenía la consideración de pensionista por Larga Enfermedad.

c) Viudos incapacitados para el trabajo, que podrán solicitar de la Junta Rectora, bien la entrega del capital que se señala en el apartado a) de este artículo, bien la pensión que se establece en el apartado b), a su elección.

La Junta Rectora decidirá libremente, a la vista de la documentación, garantías presentadas y circunstancias existentes.

Si el socio causante fuese pensionista por Larga Enfermedad se le reconocerá, de ser necesario, un mínimo de diez años de antigüedad laboral a los solos efectos de poder aplicar la escala de jubilación.

Cuando el asociado fallecido fuese pensionista por jubilación o invalidez, el porcentaje señalado se aplicará a la pensión que aquél estuviese percibiendo.

Art. 108. La viuda o viudo beneficiario dejará de percibir la pensión por las causas siguientes:

a) Contraer nuevas nupcias o adquirir estado religioso.

b) Abandono comprobado de los hijos menores sometidos a su tutela.

c) Observar una conducta deshonesto o inmoral.

d) Cesar en la incapacidad el viudo beneficiario.

CAPITULO V

Pensión de Orfandad

Art. 109. Causará derecho a esta pensión el socio beneficiario, varón o hembra, que reuniese a su fallecimiento las siguientes condiciones:

a) Ser socio activo o pensionista del Montepío.

b) Tener una antigüedad mínima de cinco años en el trabajo por cuenta ajena.

c) Tener cubierto el período mínimo de cotización que se señala en el artículo 151 de estos Estatutos.

En caso de fallecimiento por accidente o hecho súbito se aplicará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 96.

Art. 110. Tendrán derecho al percibo de esta prestación:

a) Los hijos legítimos —incluso los póstumos—, legitimados, naturales reconocidos y adoptivos del asociado fallecido.

b) Los hijos legitimados, naturales reconocidos y adoptivos que la viuda del asociado fallecido hubiese llevado al matrimonio, siempre que viviesen a expensas de aquél y no disfrutaran pensión de otra Institución de Previsión Laboral.

Los beneficiarios comprendidos en los apartados anteriores deberán ser menores de dieciséis años o incapacitados totalmente para el trabajo que no perciban ninguna otra pensión por este concepto.

Art. 111. La cuantía de la pensión de Orfandad, cuando al mismo tiempo haya sido concedida prestación de viudedad, será del 10 por 100 del sueldo regulador del causante por cada uno de los huérfanos con derecho a la misma. Como mínimo será de 100 pesetas por cada huérfano.

En caso de fallecimiento de la madre o padre viudo que percibiese pensión de Viudedad, se revisará la cuantía de la de Orfandad, que se regulará por las siguientes normas:

a) A uno de los huérfanos se le aplicará la que por Viudedad percibiese el padre o madre fallecido.

b) A los demás huérfanos se les aplicará el 10 por 100 a que se refiere el primer párrafo del presente artículo.

c) La suma total de las cantidades de los dos párrafos anteriores se dividirá por el número de beneficiarios.

d) Por cada beneficiario a quien se extinga el derecho se reducirá la suma dicha en un 10 por 100 del salario regulador del causante.

e) El último huérfano con derecho a la pensión será el que conserve la pensión de Viudedad.

Art. 112. Cuando al fallecimiento del causante no quedare cónyuge superviviente con derecho a prestación de Viudedad, la pensión de Orfandad se regulará por las mismas normas contenidas en los párrafos segundo y siguientes del artículo anterior.

Art. 113. La pensión de Orfandad se extinguirá cuando el beneficiario cumpliera la edad de dieciséis años, o cesare la incapacidad, por su fallecimiento o por adquirir estado matrimonial o religioso.

Art. 114. Las pensiones de Orfandad se entregarán al padre, madre, parientes o personas que acrediten los siguientes extremos:

a) Que el beneficiario viva en su compañía

y a sus expensas al tiempo de solicitar la pensión.

b) Que en lo sucesivo se continuarán encargando del mantenimiento, educación y formación profesional de los huérfanos, lo que comprobará periódicamente el Montepío en la forma que considere oportuno.

Art. 115. Si los huérfanos estuvieren totalmente abandonados o las personas que los tomen a su cargo no mereciesen la confianza del Montepío, la Comisión Provincial Permanente que corresponda se constituirá en patronato tutelar de los mismos, sin perjuicio de lo establecido por la legislación general, y propondrá a la Junta Rectora las medidas que deban adoptarse para la mejor protección de los huérfanos y que podrán consistir en la concesión de becas, en colegios o instituciones benéficas, escuelas de aprendices u otras medidas análogas.

Esta propuesta deberá comprender, además de la exposición de motivos, un cálculo de los gastos que la protección de dichos huérfanos pueda ocasionar.

Art. 116. Cuando el causante fuere soltero y reuniese las condiciones establecidas en el artículo 109, podrán ser considerados como beneficiarios de esta pensión de Orfandad, su madre, si fuese viuda y viviese a su cargo y sus hermanos huérfanos de padre o con padre sexagenario o incapacitado para toda clase de trabajo que no perciban pensión.

La pensión concedida a favor de la madre se mantendrá en tanto no concurra en ella las circunstancias que hacen extinguir la pensión de Viudedad, y para los hermanos hasta que alcancen la edad de dieciséis años.

No podrá hacerse valer este derecho cuando los hermanos huérfanos, o madre viuda, perciban pensión o subsidio de orfandad de esta u otra Institución cualquiera de Previsión Laboral.

CAPITULO VI

Larga Enfermedad

Art. 117. Se concederá un auxilio por Larga Enfermedad a los socios beneficiarios que temporalmente estuvieren imposibilitados totalmente para el trabajo por causa de enfermedad, y siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que hubieren agotado los plazos de disfrute del Seguro Obligatorio de Enfermedad o que hubiere transcurrido el plazo de veintiséis semanas si no se hallaren afiliados a dicho Seguro.

b) Que la enfermedad que los imposibilite totalmente para el trabajo no tenga carácter indemnizable y sea diagnosticado por los facultativos especialistas que designe el Montepío cuando éste lo considere conveniente.

c) Que cumpla rigurosamente las prescripciones facultativas de los médicos que les asistan; en caso de contravenir el plan o régimen de vida establecido por éstos perderán automáticamente el derecho a este auxilio.

d) Que el asociado tuviere una antigüedad mínima de cinco años en la prestación de sus servicios por cuenta ajena. No se exigirá este requisito a los productores menores de diecinueve años, siempre que la enfermedad hubiese sido contraída con posterioridad a su ingreso como asociado.

e) Que tenga cubierto el período mínimo de cotización que preceptúa el artículo 151 de estos Estatutos.

Se exceptúan los menores de diecinueve años a que se refiere el apartado anterior, a quienes sólo se exigirá un período mínimo de seis meses de cotización.

Art. 118. La cuantía del auxilio por Larga Enfermedad será de 200 pesetas mensuales, más 50 por esposa y cada hijo menor de dieciséis años que conviviese en el hogar del asociado, sin que el total a percibir pueda ser superior a 600 pesetas mensuales.

Se considerarán como beneficiarios a estos efectos los hermanos huérfanos de padre menores de dieciséis años, así como la madre o padre sexagenarios o incapacitados para el trabajo, que conviviesen en el hogar del asociado y a sus expensas.

Art. 119. Los períodos máximos por los que se concederá este auxilio serán los siguientes:

a) En el primer año de enfermedad, veintiséis semanas como máximo.

b) En el segundo año de enfermedad, cincuenta y dos semanas, con excepción de las que pudieran corresponder al asociado por el Seguro de Enfermedad.

c) En el tercer año, cincuenta y dos semanas como máximo.

El beneficiario del auxilio por Larga Enfermedad que después de agotar los plazos de duración de este beneficio se considere incapacitado total y permanente para el trabajo, podrá solicitar la pensión de Invalidez.

Para que ésta última le sea concedida deberá reunir los requisitos exigidos en el capítulo III y ser declarado incapacitado incurable por el Tribunal médico que designe la Ins-titución.

CAPITULO VII

Auxilio por defunción

Art. 20. Ocurrido el fallecimiento de un asociado en activo o pensionista por Jubilación, Invalidez o Larga Enfermedad, el Montepío procederá a la entrega inmediata de un auxilio en metálico a los familiares más próximos, parientes o personas que convivieren con aquél, a fin de que atiendan a los gastos derivados del fallecimiento.

Art. 121. La cuantía del Auxilio por Defunción será de 1.500 pesetas.

Art. 122. Si al ocurrir el fallecimiento del asociado no conviviera con éste pariente o persona alguna que pudiera atender a su sepelio, la Junta Rectora o Comisión Provincial Permanente, en su caso, designará a uno de sus miembros para que se encargue del pago de los gastos producidos, que no deberán exceder de la cantidad señalada en el artículo anterior.

CAPITULO VIII

Asistencia sanitaria

Art. 123. El Montepío concederá la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica a sus pensionistas y familiares que convivieren con ellos y a sus expensas con anterioridad a la solicitud de la pensión y reúnan, además, las condiciones siguientes:

a) Si el pensionista hubiese estado inscrito

en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, los familiares con derecho a esta prestación serán los inscritos en la cartilla de dicho Seguro al tiempo de solicitar la pensión, así como los hijos que naciesen posteriormente.

b) Si el pensionista no pertenecía al Seguro Obligatorio de Enfermedad, tendrán derecho los familiares comprendidos dentro del tercer grado de consanguinidad y los hijos que naciesen posteriormente.

Art. 124. A los efectos de este beneficio, el Montepío, al conceder una pensión, vendrá obligado a notificar a los interesados el procedimiento que tenga establecido para la efectividad del mismo, sin que para ello sea preciso solicitud alguna por parte de los beneficiarios.

Art. 125. Los familiares de los pensionistas dejarán de disfrutar este beneficio tan pronto tengan obligación de estar inscritos en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, dejen de convivir con el asociado o cuando por cualquier circunstancia el pensionista dejase de tener esta condición.

Art. 126. En caso de fallecimiento del pensionista únicamente tendrán derecho a seguir percibiendo este beneficio su viuda, si no estuviera obligada a pertenecer al Seguro de Enfermedad o el viudo con incapacidad total y absoluta para el trabajo y los hijos con derecho a la pensión de Orfandad.

Art. 127. El Montepío coordinará sus servicios de asistencia sanitaria con los establecidos por otros Montepíos y Mutualidades, con los del Estado, Instituciones de Previsión y Organización Sindical.

CAPITULO IX

Premios por matrimonio y natalidad

Art. 128. El Montepío concederá a los socios beneficiarios que contraigan matrimonio y que tengan una antigüedad laboral superior a cinco años y cubierto el período de cotización que se establece en el artículo 151 de estos Estatutos, un Premio de Nupcialidad consistente en 500 pesetas.

Art. 129. Con iguales requisitos de antigüedad laboral y de cotización, el Montepío concederá un Premio de Natalidad consistente en 250 pesetas por cada hijo que con la condición de legítimos tuvieren los socios de la Entidad.

Art. 130. Para la concesión de estos premios el socio beneficiario deberá acreditar, mediante los oportunos certificados del Registro Civil, los hechos que den origen a los mismos.

CAPITULO X

Premio a la vejez

Art. 131. Aquellos socios beneficiarios, trabajadores no hijos de las Industrias del Aceite, tendrán derecho a un Premio de Vejez siempre que concurren en ellos los siguientes requisitos:

- Haber cumplido los sesenta y cinco años de edad.
- Dejar de prestar servicio activo por cuenta ajena.
- Haber cotizado al Montepío, como mínimo, por un período de tres meses por cada

año transcurrido desde el día 2 de mayo de 1947 hasta la fecha en que soliciten la prestación.

Art. 132. La cuantía de este Premio a la Vejez será la que en cada caso corresponda conforme a la escala que a continuación se establece:

Con tres años de antigüedad laboral en las Industrias del Aceite, una anualidad completa de su salario regulador.

Con cuatro años de antigüedad laboral, dieciocho mensualidades.

Con cinco años de antigüedad laboral, veinticuatro mensualidades.

Con seis años de antigüedad laboral treinta y dos mensualidades.

De seis en adelante, cuarenta mensualidades.

Las fracciones de tiempo que excedan de seis meses serán computadas como años completos.

Art. 133. No habrá lugar a la concesión de este Premio a la Vejez cuando los períodos de antigüedad laboral y de cotización que se fijan en los artículos anteriores, sean reconocidos por otras Instituciones de Previsión Laboral a efectos de la concesión por ellas de las prestaciones que puedan corresponder.

A este fin las Comisiones Provinciales Permanentes vigilarán con especial cuidado esta circunstancia, a fin de que no pueda ser reconocido en dos Mutualidades o Montepíos un mismo tiempo de antigüedad laboral.

CAPITULO XI

Subsidio de viudedad

Art. 134. Las viudas de los socios beneficiarios trabajadores no hijos de las Industrias del Aceite tendrán derecho a un Subsidio de Viudedad, al fallecimiento de su esposo, con el que hubiese hecho vida conyugal hasta su muerte o que en caso de separación careciese de culpabilidad.

No habrá lugar a la concesión del subsidio si la viuda hubiese abandonado a sus hijos u observase una conducta deshonesto o inmoral.

El viudo percibirá este subsidio en el caso de que se hallare incapacitado total y permanentemente para todo trabajo.

Art. 135. Será requisito preciso para la concesión de este subsidio que el socio causante hubiese cotizado al Montepío, como mínimo, por un período de tres meses por cada año transcurrido desde el día 2 de mayo de 1947.

Art. 136. La cuantía del Subsidio de Viudedad será una cantidad equivalente al 50 por 100 de la que en concepto de Premio a la Vejez hubiera correspondido al asociado fallecido en el día de su muerte, siendo como mínimo una anualidad completa del salario regulador del causante.

Art. 137. La cantidad a percibir como Subsidio de Viudedad se incrementará en un 15 por 100 por cada hijo menor de dieciséis años o incapacitado para el trabajo.

CAPITULO XII

Subsidio de orfandad

Art. 138. Causará derecho a este subsidio el socio que a su fallecimiento tuviera la condición de trabajador activo o estuviere dado

de baja por enfermedad o accidente profesional, no exigiéndose por tanto período alguno de antigüedad laboral ni de cotización.

Art. 139. La cuantía del Subsidio de Orfandad consistirá en el 50 por 100 de la que hubiese correspondido al socio causante por Premio a la Vejez —como mínimo una anualidad completa del salario regulador—. Si existiese más de un huérfano con derecho al subsidio, dicha cantidad se incrementará en un 15 por 100 por cada uno de ellos.

Art. 140. Asimismo habrá lugar a la concesión de este subsidio, en similar cuantía, cuando el socio fallecido fuese soltero, y a favor de su madre viuda y hermanos menores de dieciséis años, huérfanos, y que no percibiesen Pensión de Viudedad u Orfandad de esta u otra Institución de Previsión Laboral.

CAPITULO XIII

Subsidio por defunción

Art. 141. Los socios beneficiarios trabajadores no hijos de las Industrias del Aceite percibirán un Subsidio por Defunción en la misma forma y cuantía que se establece en el capítulo VII del presente título.

CAPITULO XIV

Premios por matrimonio y natalidad

Art. 142. Los socios beneficiarios productores no hijos de las Industrias del Aceite tendrán derecho a la concesión de Premios por Nupcialidad y Natalidad, conforme a los requisitos y circunstancias que se establecen en el capítulo IX del presente título. El período de cotización que se exigirá es el señalado en el apartado e) del artículo 131.

CAPITULO XV

Disposiciones comunes a todas las prestaciones

SECCIÓN 1.ª—Disposiciones generales

Art. 143. Los beneficios que concede esta Institución son compatibles con los derivados de los Seguros Sociales Obligatorios y con los que puedan concederse por el Estado, Corporaciones, Compañías de Seguros y Empresas, con las excepciones derivadas de las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.

Art. 144. Las prestaciones que el Montepío concede en función del haber o salario del asociado son compatibles con las de igual clase de otras Instituciones de Previsión Laboral.

Las prestaciones de cuantía fija son incompatibles con las de la misma clase concedidas por otras de aquellas Instituciones, e incurrirá en responsabilidad penal el beneficiario que, por un mismo hecho, solicite prestaciones de esta clase en dos Instituciones distintas.

Art. 145. La cotización de un asociado al Montepío por dos o más Empresas no darán derecho a percibir, por cada hecho causante, más que una prestación de cuantía fija; las prestaciones que estén en función del haber o salario se concederán en razón del salario regulador resultante de las diversas cotizaciones.

Art. 146. Las prestaciones que concede el

Montepío tienen carácter personal e intransferible, y, en consecuencia, no podrán ser embargadas, objeto de cesión total o parcial ni servir de garantía de ninguna obligación.

SECCIÓN 2.ª—Consideración de socio activo

Art. 147. Serán considerados como socios activos de la Institución, a efectos del percibo de prestaciones, aquellos trabajadores que hayan dejado de cotizar a la misma por causa de enfermedad ininterrumpida con imposibilidad para toda clase de trabajo, después de agotar los beneficios económicos del Seguro Obligatorio de Enfermedad o los que correspondan en virtud de lo dispuesto en su Reglamentación de Trabajo, con exclusión del accidente de trabajo o enfermedad indemnizable.

Para gozar de tal consideración, será preciso que el asociado enfermo o sus familiares den cuenta a la Institución, en el plazo máximo de treinta días, a partir de la última cotización, a fin de que ésta realice las comprobaciones oportunas. Si así no lo hicieran, el asociado no podrá causar derecho a prestaciones.

Si en esta situación fuese concedida al trabajador una prestación, la Institución descontará del importe del beneficio las cuotas patronal y obrera correspondientes al tiempo transcurrido desde su última cotización.

Art. 148. Los asociados que teniendo la consideración de socios activos del Montepío y cubierto el período mínimo de cotización que corresponda, se incorporen a filas para el cumplimiento del Servicio Militar, bien con carácter obligatorio o voluntario para anticipar aquél, tendrán derecho por el tiempo de duración del mismo a percibir las prestaciones que conceden los presentes Estatutos, siempre que reúnan los demás requisitos en ellos previstos.

Art. 149. Los asociados que hubieren dejado de cotizar por causa de paro involuntario, conservarán la condición de socio activo, siempre que demuestren fehacientemente aquella circunstancia a juicio de los Organos de Gobierno de la Institución y de acuerdo con las disposiciones vigentes.

La condición de socio activo la conservarán los productores en paro por un plazo igual a un mes por cada semestre, o fracción de cotización, con un máximo de diez meses. Si el trabajador tuviese más de sesenta años de edad conservará tal condición sin sujeción a plazo, a efectos de poder causar prestaciones de Jubilación, Invalidez, Viudedad, Orfandad y Auxilio por Defunción.

Art. 150. Los productores que sean baja en el Montepío por cambio de actividad que lleve consigo la obligatoriedad de afiliación a otra Institución de Previsión Laboral, conservarán el derecho a solicitar del Montepío Nacional de las Industrias del Aceite y sus Derivados las prestaciones consignadas en los presentes Estatutos que no se hallen previstas en los Estatutos de su nueva Institución.

Para ello será preciso que el hecho causante de la prestación solicitada se haya producido dentro de un período de tiempo equivalente a un mes por cada trimestre o fracción que hubiere cotizado en este Montepío, sin que dicho período pueda exceder de un año a partir de su baja.

SECCIÓN 3.ª—*Periodo mínimo de cotización*

Art. 151. Para causar derecho a las prestaciones establecidas para los socios beneficiarios productores fijos de las Industrias del Aceite, a excepción del Auxilio por Defunción, será preciso haber cotizado al Montepío, como mínimo, durante un número de meses equivalentes a la mitad de los que hubiere transcurrido desde el 2 de mayo de 1947 —fecha en que se inició la obligación de cotizar al Montepío de las Industrias del Aceite y sus Derivados— hasta la fecha en que se produjo el hecho causante de la prestación.

A partir del 2 de mayo de 1947 el período de cotización será, como mínimo, de cinco años, mientras no se disponga otra cosa.

SECCIÓN 4.ª—*Concepto de antigüedad*

Art. 152. A los efectos de antigüedad laboral para el percibo de las prestaciones, se computará el tiempo de trabajo efectivo por cuenta ajena prestado en territorio nacional, plazas de Soberanía, Protectorado y Colonias en cualquier rama de la producción, con excepción de la agropecuaria y del trabajo a domicilio hasta tanto se encuadre una y otro en el mutualismo laboral. También se reconocerá como antigüedad laboral el tiempo de Servicio Militar obligatorio prestado en cualquier época e igualmente el voluntario realizado para anticipar el cumplimiento de aquél y por el tiempo normal de permanencia en filas.

Los años servidos al Estado, Provincia, Municipio, Organismos oficiales y Corporaciones de derecho público, tendrán también la consideración de antigüedad laboral cuando los mismos no causen derecho a pensión por Jubilación en los regímenes de previsión que aquéllos tuvieren establecidos. No gozarán de esta concesión aquellos funcionarios que hayan sido separados de sus respectivos Cuerpos en virtud de expediente o por Tribunal de Honor.

Art. 153. Para que el tiempo de trabajo efectivo a que se refiere el artículo anterior deba ser tenido en cuenta, será indispensable que por el interesado se acredite en la siguiente forma:

a) Respecto a los trabajos realizados con anterioridad a la fecha inicial de cotización en el Sector Laboral a que aquéllos correspondan, con certificados de las Empresas en que el productor hubiese prestado sus servicios o mediante algún otro medio probatorio incluso comparecencia o información testifical efectuada ante Autoridad, Organismo o persona que designe el Órgano Rector.

Cuando el trabajador hubiese pertenecido a Empresas desaparecidas aportará, si es posible, testimonio o documentos de Organismos oficiales que acrediten la existencia en su día de la Empresa.

b) Los trabajos prestados por cuenta ajena después de establecida la obligación de cotizar en el Sector Laboral de que se trate, se acreditarán exclusivamente por los tiempos de cotización efectiva realizada en la respectiva Institución.

Art. 154. No se computará a ningún efecto el tiempo trabajado por cuenta ajena que el interesado alegue si no lo prueba debidamente a juicio de los Organos de Gobierno, los

que tienen facultades para aceptar o rechazar en todo o en parte la documentación que al efecto se aporte, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y criminal en que incurra quien aporte o extienda documentos falsos.

SECCIÓN 5.ª—*Salario regulador*

Art. 155. El salario regulador para la concesión de prestaciones, se hallará en la forma siguiente:

Las cantidades sujetas a cotización percibidas por el trabajador durante doce meses consecutivos, elegidos por él dentro del período de cotización, se dividirán por doce. El cociente representará el salario mensual para el cálculo de la prestación.

Si los meses de cotización fuesen inferiores a doce, se tomarán los que hubiere y se completarán hasta alcanzar el indicado número con los meses necesarios e inmediatamente anteriores a los de cotización.

Si el cociente resultante fuese inferior al salario reglamentario de la categoría respectiva, más los aumentos por antigüedad reconocidos al causante de la prestación, se tomará este salario en lugar de dicho cociente. El salario reglamentario de la categoría se reducirá en lo que corresponda, cuando se trate de productores de jornada reducida.

Art. 156. Si las prestaciones concedidas por la Institución resultaran de cuantía superiores a la que corresponda, como consecuencia de falsedad de la Empresa en las declaraciones de salarios del trabajador en relación con los que realmente sirvieran de base de cotización, el Montepío podrá reclamar a la Empresa las diferencias resultantes, ante la jurisdicción competente.

Si por la misma causa de falsedad de la Empresa en dichas declaraciones la prestación concedida fuese inferior a la que realmente correspondiera, el productor perjudicado podrá reclamar contra la Empresa por el perjuicio sufrido.

SECCIÓN 6.ª—*Solicitud de prestaciones*

Art. 157. Las prestaciones que la Institución otorga se solicitarán utilizando los modelos de instancia que por aquélla se establezcan, acompañados de los documentos que para cada caso se señalen.

Art. 158. Los plazos para solicitar los beneficios que otorga la Institución serán los siguientes:

a) Para el Auxilio de Larga Enfermedad, seis meses, contados a partir del día en que el solicitante agotó el disfrute de los beneficios del Seguro de Enfermedad o haber transcurrido veintiséis semanas enfermo, si no se hallare afiliado a dicho Seguro.

b) Para las demás prestaciones, tres años, contados desde el día en que ocurrió el hecho causante de las mismas.

SECCIÓN 7.ª—*Percepción de prestaciones*

Art. 159. Las prestaciones que se establecen en los presentes Estatutos no podrán satisfacerse por el Montepío si la Empresa, en el momento en que deban ser abonados, no estuviera al corriente en el pago de todas las cotizaciones exigibles a la misma.

En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en la Orden de 16 de mayo de 1950 (Ref. 422/50).

Art. 160. Las pensiones que conceda el Montepío se devengarán desde el día siguiente al que ocurrió el hecho causante de las mismas, siempre que se soliciten dentro de los tres meses siguientes.

Dejará de percibirse la pensión el último día del mes en que ocurriese el hecho causante de la extinción de la misma, y si tal hecho originase otra pensión, ésta comenzará a devengarse desde el día 1 del mes siguiente, de forma que, ininterrumpidamente y por mensualidades completas, se enlace la pensión que se suprime y la nueva que comienza.

En cualquier caso, sólo se tendrá derecho a percibir la prestación con una retroactividad de tres meses a partir del día de la petición.

Art. 161. Los socios beneficiarios a quienes les haya sido concedida alguna prestación en virtud de declaraciones falsas o inexactas de los mismos, no tendrán derecho a su percibo. En el caso de que hubiesen recibido ya su importe estarán obligados a su devolución, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.

Art. 162. Las cantidades que correspondan a los beneficiarios por cualquiera de las prestaciones otorgadas por esta Institución podrán ser percibidas por aquéllos en la Empresa donde últimamente hubiere prestado sus servicios o en aquella otra que se halle más cerca de su domicilio, siempre que la organización del Montepío lo permita y así convenga.

Art. 163. Las mensualidades que un pensionista tuviera pendientes de cobro al tiempo de su fallecimiento se entregarán a la esposa, hijos, padres sexagenarios o familiares más próximos que conviviesen con el fallecido, previa la justificación que los Organos del Montepío consideren oportuno en cada caso.

La misma norma se aplicará respecto de cualquiera prestaciones que un asociado tuviera pendiente de cobro al tiempo de su fallecimiento.

A falta de los citados familiares, el importe de las pensiones o prestaciones, revertirá al Montepío.

TITULO VI

Régimen disciplinario

CAPITULO PRIMERO

De las faltas y sus sanciones

Art. 164. Constituirán falta y darán lugar a la imposición de sanción los siguientes hechos:

1.º Defraudar a sabiendas los intereses del Montepío o poner voluntariamente los medios que conduzcan a tal fin.

2.º Falsear las declaraciones ordinarias y extraordinarias que se hagan ante el Montepío o aportar datos inexactos al mismo, bien en orden a la concesión de beneficios o con respecto a otra cualquiera manifestación de las actividades de la Entidad.

3.º Realizar actos indecorosos o perjudiciales para la reputación o el buen crédito del Montepío.

4.º Entorpecer intencionadamente la actividad del Montepío. Se considerarán comprendidos en este apartado los que, habiendo sido elegidos Vocales de la Junta Rectora o restantes Organos de Gobierno, no asistan a sus reuniones o no presten la colaboración debida.

5.º No observar las normas, disposiciones o acuerdos emanados de los Organos competentes del Montepío, relativos al cumplimiento de sus fines o al buen desarrollo y orden de su actividad.

Art. 165. Las sanciones que podrá imponer el Montepío a sus asociados serán las consignadas en la siguiente escala:

1.º Apercibimiento privado, consistente en comunicación verbal o escrita al sancionado.

2.º Apercibimiento público. El grado de publicidad que proceda dar a esta sanción se determinará en cada caso por el Organo sancionador.

3.º Inhabilitación temporal para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución u ocupar cargos de la misma. Esta sanción se entenderá por un tiempo comprendido entre los dos y los cinco años.

4.º Inhabilitación permanente para formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 166. Siempre que haya de imponerse una sanción se atenderá, para la determinación de la misma, en cada caso, a la gravedad de la falta cometida, al perjuicio que haya ocasionado o que haya pretendido ocasionar el sancionado, al criterio adoptado en resoluciones recaídas en casos anteriores y análogos y a cualesquiera otras circunstancias que deban tenerse en cuenta a juicio del Organo sancionador.

CAPITULO II

Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones

Art. 167. La imposición de sanciones será de competencia de la Junta Rectora.

Art. 168. Las Comisiones Provinciales Permanentes tan pronto tengan conocimiento de haberse realizado algún hecho constitutivo de falta, lo pondrá en conocimiento de la Junta Rectora en escrito razonado, en el que se expondrán los hechos y circunstancias anejas, proponiendo la oportuna sanción.

En la primera reunión que celebre la Junta Rectora, después de recibir el expediente incoado, se pronunciará por la sanción que corresponda o declarará la no existencia de responsabilidad, devolviendo el expediente, una vez tomada debida nota, a la Comisión de procedencia, a los fines de su oportuno archivo y efectos.

Art. 169.—En los casos en que la Junta Rectora o Asamblea General observasen posibles faltas sancionables entre los componentes de los Organos de Gobierno subordinados, acomodarán su procedimiento al enunciado en los artículos precedentes, pudiendo suspender en sus funciones a los miembros de las Comisiones o Junta Rectora, según los casos, interin se sustancie el oportuno expediente, dando cuenta de la medida a la Jefatura de Servicio.

TITULO VII

De los recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno

Art. 170. Como trámite previo a la iniciación de la reclamación en vía contenciosa, podrán los interesados afectados por las resoluciones de los Organos de Gobierno entablar recurso contra todos los acuerdos adoptados por éstos y ante los siguientes Organismos:

a) Ante la Comisión Permanente Nacional si el acuerdo fué adoptado por la misma o por los Organos de Gobierno Provinciales.

b) Ante la Junta Rectora si el acuerdo hubiese sido adoptado por ésta.

La Dirección del Montepío o Delegación Provincial, en su caso, al notificar los acuerdos recaídos harán saber a los interesados el derecho que les asiste para recurrir o solicitar la revisión con aprobación de nuevos datos.

Art. 171. Con independencia de los recursos establecidos en el artículo anterior, también podrá interponerse recurso ante el Jefe del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales contra los acuerdos adoptados por los Organos de Gobierno en asuntos cuya competencia y conocimiento no estén atribuidos a las Delegaciones y Magistraturas de Trabajo. El recurso deberá ser interpuesto ante el Jefe del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del acuerdo adoptado.

Art. 172. Para la sustanciación de los recursos se seguirán los procedimientos siguientes:

a) Recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno Provinciales.

1.º El interesado, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acuerdo recaído, presentará escrito de recurso ante el Organismo Provincial que lo hubiera adoptado. En el escrito de interposición, al que se acompañará copia, se consignarán los fundamentos en que apoye su derecho el recurrente, formulando con claridad la pretensión que trate de deducir, con inclusión de los justificantes que considere necesarios.

2.º El Organismo Provincial, en el plazo de quince días naturales, elevará el expediente de recurso, con su copia e informe oportuno, a la Comisión Permanente Nacional del Montepío.

3.º La Dirección del Montepío remitirá al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, para su conocimiento, la copia del escrito de recurso y el informe emitido.

4.º En la primera sesión que celebre la Comisión Permanente Nacional conocerá del recurso dictando resolución fundada, que se notificará al interesado a través de la Delegación Provincial respectiva, haciéndole saber al propio tiempo que contra dicha resolución podrá promover, en su caso, la oportuna demanda ante la Magistratura del Trabajo.

De la resolución dictada se remitirá copia al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

b) Contra los acuerdos de la Comisión Permanente Nacional o Junta Rectora.

1. El interesado, dentro de los dos meses siguientes a la notificación del acuerdo recaído, presentará escrito de recurso ante la Dirección del Montepío.

En el escrito de interposición del recurso, al que se acompañará copia, se consignarán los fundamentos en que apoye el interesado sus derechos, formulando con claridad la pretensión que trate de deducir y con inclusión de los justificantes que se consideren necesarios.

2. La Dirección del Montepío remitirá al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, para su conocimiento, la copia del escrito del recurso acompañada del oportuno informe.

3. En la primera sesión que celebre la Comisión Permanente Nacional o Junta Rectora, en su caso, conocerá del recurso, siguiéndose el procedimiento establecido en el número 4.º del apartado a) del presente artículo.

TITULO VIII

De la inspección e intervención

Art. 173. La inspección e intervención del cumplimiento por el Montepío de las obligaciones que se contienen en los presentes Estatutos y en la legislación correspondiente estará a cargo del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales y de la Inspección Técnica de Previsión.

Art. 174. El incumplimiento por parte de las Empresas de las obligaciones que se derivan de los presentes Estatutos o de las normas que se dicten por la Junta Rectora para su aplicación serán sancionadas por los Delegados de Trabajo y con arreglo a las disposiciones vigentes.

Art. 175. La inspección y vigilancia del cumplimiento de los preceptos reglamentarios del Montepío, en cuanto se refiere a las obligaciones de Empresas y productores beneficiarios, estará a cargo del Ministerio de Trabajo, de las Delegaciones de Trabajo y de la Inspección Nacional de Trabajo.

Art. 176. Los asociados en general, tanto Empresas como productores beneficiarios, facilitarán la labor informadora, allanando en cuanto esté a su alcance las dificultades que encuentren en el desempeño de sus funciones los funcionarios competentes, pudiendo llegar, en caso contrario, a incurrir en responsabilidad y ser objeto de sanción.

Art. 177. Conforme a lo que se determina en la Ley de Montepíos y Mutualidades, corresponderá a la Magistratura de Trabajo el conocimiento de las cuestiones de carácter contencioso que puedan surgir entre el Montepío y sus asociados sobre cumplimiento, existencia o declaración de sus obligaciones y derechos respectivos, cuando previamente se hayan agotado los procedimientos que los presentes Estatutos establecen y regulan.

TITULO IX

Disposiciones generales

Art. 178. Para que el Montepío pueda proponer la reforma de estos Estatutos será preciso que exista la conformidad de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea General en sesión convocada al efecto.

Art. 179. Cualquier modificación de estos Estatutos habrá de ser aprobada por el Ministerio de Trabajo, previo informe del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, a quien asimismo corresponde la interpretación de este texto.

Art. 180. El Montepío, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la celebración de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y Junta Rectora, remitirá certificación de los acuerdos adoptados al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales. Dichos acuerdos, para que tengan validez, serán confirmados por el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, antes de haber transcurrido los quince días siguientes a su recepción. Se considerarán válidos los referidos acuerdos si después de transcurrido el plazo señalado, el indicado Servicio no hubiere hecho uso del derecho de veto.

En los mismos plazos y a similares efectos las Comisiones Provinciales Permanentes deberán remitir a la Comisión Permanente Nacional certificación de los acuerdos adoptados.

Art. 181. Los acuerdos de los Organos de Gobierno serán válidos y firmes una vez adoptados, salvo lo que sobre veto del Servicio se establece en el artículo anterior, sin necesidad de esperar a la aprobación del acta en la sesión posterior.

Disposición final

Los presentes Estatutos comenzarán a regir el día 2 de mayo de 1951 y se aplicarán íntegramente a las prestaciones causadas con posterioridad a dicha fecha.

Disposiciones transitorias

Primera.—Los derechos a prestaciones nacidos en virtud de hechos acaecidos durante la vigencia de los Estatutos provisionales de 2 de marzo de 1948 se registrarán por las siguientes normas:

a) El plazo para la solicitud de prestaciones será el señalado en el artículo 158 de los presentes Estatutos.

b) Las clases, cuantía y requisitos de las prestaciones se regularán conforme a las normas contenidas en los Estatutos provisionales derogados, cualquiera que sea la fecha de su solicitud.

Segunda.—No obstante lo establecido en la disposición anterior, las pensiones de viudedad solicitadas o que se soliciten por beneficiarias menores de cuarenta y cinco años de edad y por hechos acaecidos con anterioridad a 2 de mayo de 1951 podrán concederse de conformidad con lo dispuesto en el título V de los presentes Estatutos; a estos efectos, la Institución dirigirá comunicación a

las beneficiarias de aquellos expedientes ya resueltos y pendientes de efectividad económica por ser aquellas menores de cuarenta y cinco años, haciéndoles saber el derecho de opción que se les concede por esta disposición.

La misma información se facilitará a las interesadas en solicitudes ya presentadas o que se presenten en el futuro y relacionadas con hechos acaecidos con anterioridad a 2 de mayo de 1951.

232 DEPARTAMENTOS MINISTERIALES, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS OFICIALES.—AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Boletín Oficial del Estado núm. 152 del 1 de junio de 1951.

I. COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.—Rectifica los artículos 56 y 57, del Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de mayo de 1951. (Ref. 230 51).

II. TEXTO LITERAL.—Artículo 56. Apartado b). Donde dice "encomendadas", debe decir "encaminadas".

Art. 57. Debe añadirse el párrafo siguiente: "La Junta central nombrará un Secretario de la misma, pero sin voto."

233 REGLAMENTOS DE TRABAJO. — TRABAJO EN PRENSA

Orden del Ministerio de Trabajo de 17 de mayo de 1951 *Boletín Oficial del Estado* número 152 del 1 de junio de 1951.

I. REGLAMENTO DE TRABAJO.—Rectifica los arts. 16 y 55 del Reglamento Nacional de Trabajo, aprobado por Orden del 14 de julio de 1950. (Ref. 638 50).

II. TEXTO LITERAL.—La vigente Reglamentación Nacional de Trabajo en Prensa, aprobada por Orden de 14 de julio de 1950 (Ref. 638/50), incluye en el artículo 17, y como Auxiliares de Redacción, los Radiotelegrafistas y Radiotelefonistas que prestan sus servicios en las Redacciones de las Empresas comprendidas en dichas Ordenanzas Laborales. Teniendo en cuenta que dichos profesionales necesitan para su actuación como tales estar en posesión del título expedido por la Escuela Oficial de Telecomunicación, parece procedente clasificar a los mismos dentro de la categoría de Técnicos Titulados, y en su virtud, y de acuerdo con la propuesta formulada por esa Dirección General de Trabajo, este Ministerio ha tenido a bien acordar lo siguiente:

Primero. Se modifica el artículo 16 de la Reglamentación Nacional de Trabajo en Prensa, aprobada por Orden de 14 de julio de 1950, añadiendo los dos párrafos siguientes:

a) Radiotelegrafistas.—Son los que en posesión del título de Radiotelegrafista de primera o segunda clase, expedido por la Es-

cuela Oficial de Telecomunicación, realizan las funciones propias de su competencia profesional.

c) Radiotelefonista.—Es el personal que en posesión del título general de Radiotelefonistas, igualmente expedido por la Escuela Oficial de Telecomunicación, realizan sus funciones únicamente de Radiotelefonía.

Segundo. Se modifica el cuadro de salarios incluido en el artículo 55, añadiendo bajo el epígrafe técnico, y a continuación de Dibujantes Proyectistas, las dos líneas siguientes:

	Zona especial	Zona 1. ^a	Zona 2. ^a
Radiotelegrafistas	1.400	1.225	1.100
Radiotelefonistas	850	720	600

Tercero. Las retribuciones que se señalan en el anterior apartado, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 50 de las citadas Ordenanzas Laborales, se refieren al personal que preste servicio jornada completa, pudiendo las Empresas utilizar a este personal técnico en jornada inferior, con un mínimo de dos horas diarias, abonando a los interesados el sueldo en proporción al tiempo trabajado, sin perjuicio de respetar las condiciones más beneficiosas que en la actualidad tengan establecidas, de acuerdo con el artículo 109.

Cuarto. Lo dispuesto en la presente Orden empezará a regir a partir de su inserción en el *Boletín Oficial del Estado*.

234 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—BANCA Y SEGUROS.—MUTUALIDAD LABORAL DE LA BANCA.—MUTUALIDAD LABORAL DE SEGUROS

Orden del Ministerio de Trabajo de 21 de mayo de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 152 del 1 de junio de 1951.

I. INDICE GENERAL A).—Banca y Seguros (Montepío Laboral de).—Se disuelve este Montepío desdoblándose en dos: uno para la Banca y otro para Seguros.—B) Mutualidad Laboral de la Banca. Su constitución.—C) Mutualidad Laboral de Seguros.—Su constitución.

II. TEXTO LITERAL.—La Asamblea General del Montepío de Empleados de Banca y Seguros, en su reunión celebrada el día 4 de los corrientes, se ha pronunciado en el sentido de separarse dichos Sectores en dos Instituciones diferentes, a los efectos de que cada uno desarrolle su régimen de previsión en armonía con las condiciones generales de trabajo y demás características específicas de cada Sector Laboral.

Habida cuenta tal manifestación, expresada de modo unánime por la citada Asamblea, y oído el parecer del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, así como visto el informe técnico pertinente,

Este Ministerio, en uso de sus facultades, tiene a bien disponer:

Artículo 1.º Los Sectores Laborales de la

Banca Privada y de las Compañías y Entidades de Seguros formarán dos Instituciones de Previsión Laboral diferentes, que se denominarán "Mutualidad Laboral de Banca" y "Mutualidad Laboral de Seguros", respectivamente.

Art. 2.º Para llevar a efecto la separación de ambos Sectores Laborales y su encuadramiento en las respectivas Instituciones de Previsión Laboral, se crea una Comisión Liquidadora, integrada por los dos Presidentes de ambas Mutualidades y por el Director, Secretario e Interventor del Montepío que por esta Orden se extingue.

Art. 3.º Queda facultada la Jefatura del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales para dictar aquellas normas e instrucciones necesarias para el cumplimiento de cuanto establece la presente Orden, bien por su propia iniciativa, o a propuesta de la Comisión Liquidadora.

235 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—NORMAS DE APLICACION GENERAL

Orden del Ministerio de Trabajo de 21 de mayo de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 152 del 1 de junio de 1951.

I. ACCIDENTES DE TRABAJO DE LOS VOCALES DE MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—Se conceden determinados beneficios a los Vocales, natos o electivos, de los Organos de Gobierno de las Mutualidades o Montepíos que sufran accidente con ocasión o por consecuencia del ejercicio de su función.

II. TEXTO LITERAL.—Los preceptos estatutarios de las Mutualidades y Montepíos de Previsión Laboral imponen a los Vocales que integran sus Organos de Gobierno, el deber inexcusable de asistir a las reuniones reglamentariamente convocadas, o desempeñar funciones que aquéllas les encomienden, y realizar una acción constante en defensa del trabajador y de la eficacia de las Instituciones que lo amparan en su infortunio.

Con ocasión del ejercicio de su función, corren el riesgo de sufrir accidentes que, en algunos casos, no tienen cubiertos, y en otros, sólo deficientemente, por lo que se hace aconsejable que el Montepío o la Mutualidad Laboral al que prestan su colaboración asuma tal riesgo en forma adecuada y en recíproco deber de asistencia que, al menos, iguale a la vigente legislación de accidentes de trabajo.

Por todo ello, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Los Vocales electivos o natos de los Organos de Gobierno de las Mutualidades y Montepíos de Previsión Laboral que, con ocasión o como consecuencia del ejercicio de su función, sufran un accidente que les origine la muerte o una incapacidad de les determinadas en la Ley de Accidentes de Trabajo en la Industria causarán derecho a la prestación correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de las Instituciones; si la prestación no estuviera establecida o no reunieran las condiciones estatutarias preci-

sas para su disfrute o su cuantía fuese menor de la que correspondiera de aplicarles aquella legislación, el Montepío o Mutualidad en cuyos servicios se produjese el accidente concederá una indemnización de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley y correspondiente Reglamento.

Art. 2.º El salario regulador para fijar la indemnización a que se refiere el segundo supuesto del artículo anterior, cuando de trabajadores por cuenta ajena se trate, será el que perciban de sus Empresas, computable para accidente de trabajo, sin otra limitación que la establecida en el Decreto de 10 de noviembre de 1950 (Ref. 940/50) y disposiciones complementarias; cuando no se tratase de trabajadores por cuenta ajena, se tomará como tal el salario mínimo reglamentario establecido para la más alta categoría profesional encuadrada en el Montepío o Mutualidad.

Art. 3.º Los beneficios que se establecen por la presente Orden, son compatibles con los que puedan corresponder en otro Montepío o Mutualidad y en los Seguros Sociales y Privados.

Entrará en vigor esta disposición el día de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*.

236 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—BANCO DE BILBAO

Orden del Ministerio de Trabajo de 21 de mayo de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 152 del 1 de junio de 1951.

I. CAJA DE EMPRESA.—Se aprueban sus Estatutos.

II. TEXTO LITERAL.—Visto el Estatuto de la Caja de Previsión Laboral del Banco de Bilbao, por el que se mejoran en beneficio de sus productores las prestaciones que otorga el Montepío Laboral de Banca y Seguros; vista la propuesta elevada al efecto por el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales; de conformidad con el artículo tercero de la Orden ministerial de 3 de febrero de 1949 (Referencia 41/49) y con la Orden ministerial de 23 de mayo del mismo año (Refs. 132 y 134/49).

Este Ministerio, en uso de sus facultades, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueba el Estatuto de la Caja de Previsión Laboral del Banco de Bilbao, disponiéndose su inscripción y registro en la forma que se determina en la Ley de 6 de diciembre de 1941 y Decreto de 26 de mayo de 1943.

Esta Institución de Previsión queda encuadrada en la Organización Mutualista Laboral, de conformidad con lo establecido por el Decreto de 29 de septiembre de 1948, coordinada con el Montepío Laboral de Empleados de Banca y Seguros.

Art. 2.º De conformidad con lo establecido en la disposición adicional del Estatuto tipo aprobado por la Orden ministerial de 23 de mayo de 1949, el Estatuto que se aprueba deberá ser adaptado en su totalidad a los preceptos de la Orden ministerial de 16 de mayo del presente año (Ref. 422/50).

Art. 3.º Queda facultado el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales para

dictar las normas complementarias que se precisan como consecuencia de cuanto disponen los artículos cuarto, quinto y sexto de la Orden de 23 de mayo de 1949 (Ref. 134/49).

237 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—CAJA DE AHORROS VIZCAINA

Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de mayo de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 153 del 2 de junio de 1951.

I. CAJA DE EMPRESA.—Se aprueban sus Estatutos.

II. TEXTO LITERAL.—Visto el Estatuto de la Caja de Previsión Laboral de la Caja de Ahorros Vizcaína; vista la propuesta elevada al efecto por el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, y de conformidad con el artículo tercero de la Orden ministerial de 3 de febrero de 1949 (Referencia 41/49) y con la Orden ministerial de 23 de mayo del mismo año (Referencias 132 y 134/49).

Este Ministerio, en uso de sus facultades, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueba el Estatuto de la Caja de Previsión Laboral de la Caja de Ahorros Vizcaína, disponiéndose su inscripción y registro en la forma que se determina en la Ley de 6 de diciembre de 1941 y Decreto de 26 de mayo de 1943.

Esta Institución de Previsión queda encuadrada en la Organización Mutualista Laboral, de conformidad con lo establecido por el Decreto de 29 de septiembre de 1948, coordinada con el Montepío Laboral de Empleados de Ahorro y Previsión.

Art. 2.º Con el fin de adaptarlo a las normas generales que regulan la materia, el artículo 43 del Estatuto que se aprueba quedará redactado en la forma siguiente:

“Art. 43. La Junta Rectora estará constituida por los siguientes miembros electivos:

1.º Seis representantes de la totalidad de los grupos de los productores afiliados.

2.º Dos representantes de la Empresa designados libremente por ella entre aquellos que con tal carácter figuren en la Asamblea General.”

Art. 3.º De conformidad con lo previsto en la disposición adicional del Estatuto que aprueba su texto, deberá ser adaptado en su totalidad a los preceptos de la Orden ministerial de 16 de mayo de 1950 (Ref. 422/50). Decretos de 10 y 17 de noviembre de 1950 (Ref. 940/50), Orden ministerial de 23 del mismo mes (Ref. 932/50) y cuantas disposiciones le sean aplicables.

Asimismo, el capítulo de prestaciones del Estatuto que se aprueba deberá ser adaptado al capítulo de prestaciones del Estatuto definitivo del Montepío Laboral de Empleados de Ahorro y Previsión, aprobado por Orden ministerial de 21 de abril último y publicado en el *Boletín Oficial del Estado* de 27 del mismo mes (Refs. 159 y 224/51).

Art. 4.º Queda facultado el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales para

dictar las normas complementarias que se precisen como consecuencia de cuanto disponen los artículos cuarto, quinto y sexto de la Orden de 23 de mayo de 1949 (Refs. 132 y 134/49).

238 MUTUALIDADES Y MONTEPÍOS LABORALES.—MAQUINAS DE COSER "ALFA", S. A.

Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de mayo de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 153 del 2 de junio de 1951.

I. CAJA DE EMPRESA.—Se aprueban sus Estatutos.

II. TEXTO LITERAL.—Con el fin de constituirse en Caja de Previsión Laboral de Empresa, en concordancia con cuantos preceptos legales regulan el funcionamiento de las Instituciones de esta clase integradas en el Mutualismo Laboral, la Mutualidad de Previsión Social de los Trabajadores de Máquinas de Coser "Alfa", S. A., ha sometido a este Ministerio, por mediación del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, el Estatuto reglamentario por el que ha de regirse en lo sucesivo y por el que son mejorados los beneficios que conceden los Montepíos Interprovinciales de los Trabajadores de las Industrias Siderometalúrgicas y el Montepío Nacional de la Dependencia Mercantil;

Visto dicho Estatuto, vista la propuesta elevada al efecto por el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, y de conformidad con las Ordenes ministeriales de 15 de junio de 1948 y 23 de mayo de 1949 (Referencias 132 y 134/49),

Este Ministerio, en uso de sus facultades, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueba el Estatuto de la Caja de Previsión Laboral de la Empresa Máquinas de Coser "Alfa", S. A., que sustituirá en el cumplimiento de los fines mutualistas a la Mutualidad hasta ahora existente, a partir de esta fecha.

Se dispone la inscripción y registro del Estatuto que se aprueba en la forma determinada por la Ley de 6 de diciembre de 1941 y Decreto de 26 de mayo de 1943.

La nueva Institución de Previsión queda encuadrada en la Organización Mutualista Laboral, con arreglo a lo dispuesto por el Decreto de 29 de septiembre de 1948, y coordinada con la Caja de Coordinación y Compensación del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 2.º De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional del Estatuto tipo aprobado por la Orden ministerial de 23 de mayo de 1949, el Estatuto que se aprueba deberá ser adaptado en su totalidad a los preceptos de las Ordenes ministeriales de 16 de mayo (Ref. 122/50) y 24 de julio de 1950 (Referencia 652/50), de los Decretos de 10 y 17 de noviembre del mismo año (Ref. 940/50) y de la Orden ministerial de 23 de los repetidos mes y año (Ref. 932/50).

Art. 3.º Queda facultado el Servicio de

Mutualidades y Montepíos Laborales para dictar las normas complementarias que se precisen, como consecuencia de lo que disponen los artículos cuarto, quinto y sexto de la Orden ministerial de 23 de mayo de 1949 (Referencia 134/49).

239 MUTUALIDADES Y MONTEPÍOS LABORALES.—CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BILBAO

Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de mayo de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 135 del 2 de junio de 1951.

I. CAJA DE EMPRESA.—Se aprueban sus Estatutos.

II. TEXTO LITERAL.—Visto el Estatuto de la Caja de Previsión Laboral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, vista la propuesta elevada al efecto por el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, y de conformidad con el artículo tercero de la Orden ministerial de 3 de febrero de 1949 (Ref. 41/49) y con la Orden ministerial de 23 de mayo del mismo año (Refs. 132 y 134/49),

Este Ministerio, en uso de sus facultades, ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueba el Estatuto de la Caja de Previsión Laboral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, disponiéndose su inscripción y registro en la forma que se determina en la Ley de 6 de diciembre de 1941 y Decreto de 26 de mayo de 1943.

Esta Institución de Previsión queda encuadrada en la Organización Mutualista Laboral, de conformidad con lo establecido por el Decreto de 29 de septiembre de 1948, coordinada con el Montepío Laboral de Empleados de Ahorro y Previsión.

Art. 2.º Con arreglo a lo previsto en la disposición adicional del Estatuto que se aprueba, su capítulo de prestaciones deberá ser adaptado al capítulo de prestaciones del Estatuto definitivo del Montepío Laboral de Empleados de Ahorro y Previsión, aprobado por Orden ministerial de 21 de abril último y publicado en el *Boletín Oficial del Estado* de 27 del mismo mes (Refs. 159 y 224/51).

Art. 3.º Queda facultado el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales para dictar las normas complementarias que se precisen como consecuencia de cuanto disponen los artículos cuarto, quinto y sexto de la Orden de 23 de mayo de 1949 (Ref. 134/49).

240 REGLAMENTOS DE TRABAJO.—INDUSTRIA DE LA MADERA

Resolución de la Dirección General de Trabajo de 13 de abril de 1951, *Boletín Oficial del Estado* núm. 153 del 2 de junio de 1951.

I. PRENDAS DE TRABAJO.—Personal con derecho a prendas de trabajo y duración de las mismas.

II. TEXTO LITERAL.—En el apartado quinto de la Resolución de ese Centro directi-

vo de 21 de julio de 1950 (Ref. 647/50), inserta el *Boletín Oficial del Estado*, se establece que las Empresas madereras están obligadas a facilitar monos o prendas de trabajo a todos los trabajadores de la industria, estén o no empleados en máquinas, y con objeto de que quede puntualizado en cada caso cuál sea la clase de prenda y duración de la misma, a propuesta de la Jefatura del Sindicato Nacional de la Madera y Corcho,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar que la provisión obligatoria de las referidas prendas de trabajo se efectuará con sujeción a las siguientes normas:

1.ª Todos los obreros que trabajen en máquinas, cualquiera que sea la clase de ésta, deberán ser provistos de mono.

2.ª Asimismo corresponderá idéntica prenda de trabajo a los productores que trabajen en los grupos de ebanistería, carpintería de taller, carpintería de ribera, carrocerías y carpinterías, serrerías, tonelería y fábricas de chapas y tableros.

3.ª El resto del personal obrero masculino encuadrado en las industrias madereras recibirá de las Empresas un pantalón con peto y tirantes.

4.ª El personal administrativo y el femenino que trabaje en talleres, cualquiera que sea su cometido, tendrá derecho a que se les facilite guarda polvos o batas.

5.ª Con independencia de las prendas de trabajo señaladas en las normas anteriores cuya duración será de un año, de acuerdo con lo que especifica la citada Orden de 21 de julio de 1950, las industrias dedicadas a carreterías y carpinterías de ribera deberán tener a disposición de sus obreros petos de cuero y botas de goma, respectivamente, a los efectos de que sean utilizados por los forjadores en las industrias de carretería y para aquellos obreros que trabajen en sitios húmedos y con agua en las carpinterías de ribera, en las que también, y siguiendo costumbre tradicional establecida, tendrán a disposición del productor prendas especiales para aquellos trabajos que originen un desgaste fuera de lo corriente.

241 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—ENERGIA E INDUSTRIA ARAGONESA, S. A.

Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de mayo de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 155 del 4 de junio de 1951.

I. CAJA DE EMPRESA.—Se aprueban sus Estatutos.

II. TEXTO LITERAL.—La Empresa "Energía e Industrias Aragonesas", S. A., al amparo de la Ley de 6 de diciembre de 1941 y del Decreto de 26 de mayo de 1943, creó en 1945 un nuevo Montepío de Previsión para proteger a los empleados que tenía a su servicio, y en 1946, una Mutualidad de Previsión destinada a procurar los mismos beneficios al personal obrero de su organización. Al ser promulgada la Orden ministerial de 15 de junio de 1948, por las que se establecían las condiciones y requisitos que debían reunir

las Cajas de Previsión de Empresa para desenvolverse dentro de las normas del Mutualismo Laboral "Energía e Industrias Aragonesas", S. A., en su deseo de obtener para todos sus productores un régimen más beneficioso que el estatuido por los Montepíos Interprovinciales de Industrias Químicas, resolvió fundir el Montepío de Empleados y la Mutualidad de Obreros que había creado en una Institución Mutualista de Empresa que garantizase la solidez y permanencia de los mayores beneficios que pretendía proporcionar a su personal mediante su encuadramiento en las normas y organización del Mutualismo Laboral. Con este objeto sometió al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, en unión de los documentos técnicos preceptivos, el Estatuto reglamentario por que había de regirse la proyectada Caja de Previsión de Empresa, recogiendo en dicho texto reglamentario los preceptos reguladores de la constitución y funcionamiento de esta clase de Instituciones.

En su consecuencia, visto el mencionado Estatuto reglamentario, por el que son mejoradas las prestaciones que conceden los Montepíos Interprovinciales de Industrias Químicas, vista la propuesta elevada al efecto por el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, y de conformidad con lo establecido en las Ordenes ministeriales de 15 de junio de 1948 y 23 de mayo de 1949 (Referencias 132 y 134/49),

Este Ministerio, en uso de sus facultades, tiene a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueba el Estatuto de la Caja de Previsión Laboral de la Empresa "Energía e Industrias Aragonesas", S. A., y se dispone su inscripción y registro en la forma determinada por la Ley de 6 de diciembre de 1941 y Decreto de 26 de mayo de 1943.

Esta Institución de Previsión, con arreglo a lo establecido por el Decreto de 29 de septiembre de 1948, queda encuadrada en la Organización Mutualista Laboral y coordinada con la Caja de Coordinación y Compensación del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 2.º En la Caja de Previsión Laboral de la Empresa "Energía e Industrias Aragonesas", S. A., quedan fusionados e incorporados el Montepío de Previsión de los Empleados de "Energía e Industrias Aragonesas", S. A., y la Mutualidad de Previsión de los obreros de dicha Empresa, que fueron aprobados por Resoluciones de la Dirección General de Previsión de fecha 6 de febrero de 1945 y 10 de enero de 1946.

Los mencionados Montepíos de Previsión de Empleados y Mutualidad de Previsión de Obreros, dejarán de tener existencia legal a partir de esta fecha y su activo y pasivo pasará a la Caja de Empresa, cuyo Estatuto se aprueba.

Art. 3.º De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional del Estatuto tipo para las Cajas de Empresa aprobado por Orden ministerial de 23 de mayo de 1949, el Estatuto que se aprueba deberá ser adaptado en su totalidad a los preceptos de la Orden ministerial de 16 de mayo de 1950 (Referencia 422/50) de la Orden ministerial de 24 de

julio de 1950 (Ref. 652/50), de los Decretos de 10 y 17 de noviembre del repetido año (Referencia 940/50) y de la Orden ministerial del 23 del mismo mes (Ref. 932/50).

Art. 4.º Queda facultado el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales para dictar las normas complementarias que sean precisas como consecuencia de cuanto disponen los artículos cuarto, quinto y sexto de la Orden de 23 de mayo de 1949 (Ref. 134/49).

242 MUTUALIDADES Y MONTEPIÓS LABORALES.—SERVICIO DE MUTUALIDADES LABORALES

Decreto del Ministerio de Trabajo de 25 de mayo de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 158 del 7 de junio de 1951

I. REORGANIZACIÓN.—Normas fundamentales.

II. TEXTO LITERAL.—Los resultados de la labor realizada desde que por Decreto de veintinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho se organizó el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, hacen posible, sin mengua de la eficacia, simplificar su actual estructura suprimiendo la Dirección Técnica y la Secretaría General, cuyas funciones asumirá el Director general de Previsión, obteniéndose así una mayor uniformidad de criterio y la máxima sencillez administrativa.

En su virtud a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero. Queda integrado en el Ministerio de Trabajo el Servicio de Mutualidades Laborales con personalidad jurídica, administración y fondos propios, al que corresponderá la orientación, vigilancia, difusión y fomento de las Entidades de este carácter que existan o puedan crearse en el futuro.

Artículo segundo. La Jefatura del Servicio corresponde al Director general de Previsión, que asumirá su representación legal con las más amplias facultades para su administración y gobierno, auxiliado por el Subdirector general del Servicio y el Consejo Asesor.

Artículo tercero. Bajo la dependencia directa del Servicio quedan encuadrados todos los Montepíos, Mutualidades, Cajas de Jubilaciones y Subsidios o Cajas o Montepíos de Empresa donde la cotización esté señalada con carácter obligatorio por disposición legal, sin más excepciones que aquellas Instituciones de este carácter dependientes de otros Organismos del Ministerio de Trabajo.

Artículo cuarto. Son facultades exclusivas del Servicio, las siguientes:

a) Proponer al Ministro de Trabajo la aprobación o modificación de los Estatutos de esta clase de Entidades, la incorporación o segregación de Sectores Laborales de una a otra y todas las demás disposiciones que estime adecuada para el mejor cumplimiento de los fines de Previsión Social encomen-

dados a las Instituciones en él encuadradas.

b) Dictar las resoluciones e instrucciones necesarias y las aclaraciones o interpretaciones que estime oportunas sobre los Estatutos o disposiciones de carácter general que afecten a esta clase de Entidades. Unas y otras de obligado cumplimiento para todas las Instituciones.

c) Vigilar e inspeccionar la organización y funcionamiento de las Instituciones, conocer de sus acuerdos y suspender su efectividad cuando no se ajuste a las disposiciones vigentes e instrucciones del Servicio, sin perjuicio de exigir las responsabilidades a que hubiere lugar.

d) Ordenar y dirigir la compensación, coordinación y reaseguro de las diversas Instituciones.

f) La Jefatura del personal del Servicio y de las Instituciones del mismo dependientes, efectuar los nombramientos, disponer los ceses por justa causa, conceder premios e imponer sanciones, fijar las retribuciones y demás condiciones relativas a la prestación de servicios del personal.

g) Formular los presupuestos y cuentas del Servicio; intervenir los correspondientes a las Instituciones en él encuadradas y fijar los gastos de administración de éstas.

h) Estudiar y proponer al Ministro de Trabajo lo que estime oportuno respecto a constitución, modificación, disolución y funcionamiento de las Cajas de Previsión Laboral de Empresa, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia.

i) Entender de los recursos que puedan presentarse contra los acuerdos de los Organos de Gobierno de las Instituciones, cuando por la naturaleza de los mismos no sean competentes para ello las Delegaciones Provinciales de Trabajo o Magistraturas de Trabajo.

j) Nombrar los Vocales de los Organos de Gobierno de las Instituciones, de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia.

Artículo quinto. Son recursos propios de este Organismo los siguientes:

a) El medio por ciento de los ingresos que obtengan las Instituciones a que se refiere el artículo tercero de este Decreto.

b) Cualquiera otros fondos, bienes o derechos que pudieran ser asignados por disposición del Ministerio de Trabajo.

Artículo sexto. El Subdirector general del Servicio, de igual rango que los demás del Departamento, se designará por Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo, asumirá la Jefatura del Servicio durante las ausencias del Director general, y con carácter permanente las facultades que éste le delegue.

Artículo séptimo. El Consejo Asesor, presidido por el Director general de Previsión, estará integrado por el Vicepresidente, que será el Subdirector general del Servicio, y los siguientes Vocales designados por el Ministro de Trabajo:

Dos Presidentes de Organos de Gobierno; dos Directores de Montepío o Mutualidad y dos Delegados provinciales, propuestos por el Director general.

Un Representante de la Asesoría general y Técnica de la Dirección General de Previsión, propuesto por el Director general.

Un Asesor Técnico de Política Laboral, a propuesta del Director general de Trabajo.

Dos Representantes de la Organización sindical, propuestos por el Delegado Nacional de Sindicatos.

Cuatro Vocales designados libremente por el Ministro de Trabajo.

El Jefe de la Sección de Montepíos y Mutualidades de la Dirección General de Previsión.

Artículo octavo. El Consejo Asesor, como Órgano consultivo, conocerá de todas aquellas cuestiones propias de la competencia del Servicio que, por razón de su importancia o trascendencia, considere oportuno someter a su dictamen el Director general de Previsión y, en especial, respecto de los siguientes:

a) De los proyectos de disposiciones relativas a organización y funcionamiento del Servicio o de las Instituciones de él dependientes y del régimen del personal de uno y otras.

b) De los proyectos de disposiciones de carácter general para el régimen de previsión que desarrollan las Instituciones en los expedientes de constitución y disolución de las Cajas de Previsión Laboral de Empresa en los expedientes de unión, incorporación o segregación de Montepíos y Mutualidades Laborales.

c) De los presupuestos y cuentas del Servicio.

d) Respecto a cualesquiera otras cuestiones que el Director general estime oportuno someter a su consideración.

Artículo noveno. El Servicio de Mutualidades Laborales se organizará de acuerdo con las instrucciones que dicte al efecto el Director general, de forma que permita ejercer con toda eficacia las facultades que le están atribuidas en el artículo cuarto.

Artículo décimo. Queda facultado el Ministro de Trabajo para dictar las disposiciones que precise la aplicación y desarrollo del presente Decreto; se deroga el de veintinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho y cuantas disposiciones se opongan a lo aquí decretado.

243 MUTUALIDADES Y MONTEPIOS LABORALES.—INDUSTRIAS DEL VIDRIO, CERAMICA Y SIMILARES

Orden del Ministerio de Trabajo de 24 de abril de 1951, *Boletín Oficial del Estado* número 160 de 9 de junio de 1951.

I. ESTATUTOS.—Se aprueban los Estatutos definitivos del Montepío de las Industrias del Vidrio, Cerámica y Similares, que responde al siguiente índice general.

Orden aprobatoria.—Derogación de los Estatutos anteriores (art. 1).—Disposiciones Transitorias (art. 2).—Disolución de las Secciones Independientes (art. 3).

Título I.—Naturaleza y extensión del Montepío (arts. 1 al 7).

Título II.—De los socios beneficiarios. *Capítulo I.*—De las clases de socios (art. 8).

Capítulo II.—De los socios protectores (artículo 9). Sección 1.ª De los socios protectores obligatorios (arts. 10 al 13). Sección 2.ª De los socios protectores voluntarios (artículos 14 y 15).—*Capítulo III.*—De los socios beneficiarios (arts. 16 al 19).—*Capítulo IV.*—De los demás beneficiarios (art. 20).

Título III.—Organización y funcionamiento.

Capítulo I.—Del Gobierno del Montepío (arts. 21 al 23).—*Capítulo II.*—De los Organos de Gobierno Nacionales. Sección 1.ª De la Asamblea General (arts. 24 al 35). Sección 2.ª De la Junta Rectora (arts. 36 al 41). Sección 3.ª De la Comisión Permanente Nacional (arts. 42 al 45). Sección 4.ª Del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas (artículos 46 al 49).—*Capítulo III.*—De los Organos de Gobierno Provinciales (arts. 50 al 56).—*Capítulo IV.*—Elección de Vocales y Organos de Gobierno. Sección 1.ª Disposiciones relativas a los miembros de los Organos de Gobierno (arts. 57 al 60). Sección 2.ª De la elección de los Organos de Gobierno (artículos 61 al 64).—*Capítulo V.*—De los Organos ejecutivos del Montepío. Sección 1.ª Del Director (art. 65). Sección 2.ª Del Delegado Provincial (arts. 66 y 67).

Título IV.—Régimen económico.—*Capítulo I.*—Recursos económicos (arts. 68 al 76). *Capítulo II.*—Presupuestos y gastos (artículos 77 al 79). *Capítulo III.*—De las reservas (arts. 80 al 86).—*Capítulo IV.*—Sistema contable (arts. 87 y 88).

Título V.—Prestaciones.—*Capítulo I.*—De sus clases (arts. 89 y 90).—*Capítulo II.*—Pensión de Jubilación (arts. 91 al 95).—*Capítulo III.*—Pensión por Invalidez (arts. 95 al 101).—*Capítulo IV.*—Pensión de Viudedad (artículos 102 al 106).—*Capítulo V.*—Pensión de Orfandad (arts. 107 al 114).—*Capítulo VI.*—Auxilio en favor de los padres (artículos 115 al 117).—*Capítulo VII.*—Larga Enfermedad (artículos 118 al 121).—*Capítulo VIII.*—Premio de Nupcialidad (arts. 122 al 124).—*Capítulo IX.*—Auxilio por Defunción (arts. 125 al 127).—*Capítulo X.*—Asistencia sanitaria (artículos 128 al 131).—*Capítulo XI.*—Disposiciones comunes a todas las prestaciones.—Disposiciones generales (arts. 132 al 135). Consideración de socio activo (arts. 136 al 139).—Período mínimo de cotización (artículo 140).—Concepto de antigüedad (artículos 141 al 143).—Salario regulador (artículos 144 y 145).—Solicitud de prestaciones (artículos 146 y 147).—Percepción de prestaciones (arts. 148 al 152).

Título VI.—Régimen disciplinario.—*Capítulo I.*—De las faltas y sus sanciones (artículos 153 al 155).—*Capítulo II.*—Procedimiento y competencia para la imposición de sanciones (arts. 156 al 158).

Título VII.—De los recursos contra los acuerdos de los Organos de Gobierno (artículos 159 al 162).

Título VIII.—De la Inspección e Intervención (arts. 163 al 166).

Título IX.—Disposiciones generales.—Reforma de los Estatutos (arts. 167 y 168). Valor y eficacia de los acuerdos de los Organos de Gobierno (arts. 169 y 170).

Disposición final.—*Fecha de entrada en vigor de los nuevos Estatutos.*

Disposiciones transitorias.

II. TEXTO LITERAL.—En cumplimiento de lo establecido en la Reglamentación Nacional de Trabajo de las Industrias del Vidrio, aprobada por Orden de 21 de septiembre de 1946, fué creado el Montepío Nacional de las Industrias del Vidrio, cuyos Estatutos provisionales fueron aprobados por Orden de 30 de abril de 1947.

Con posterioridad, y por Ordenes de 25 de mayo de 1948 y 23 de julio de 1948, fueron incorporados al citado Montepío, en concepto de Secciones independientes, los Sectores Laborales de Cerámica y Tejas y Ladrillos, por lo que fueron aprobados los nuevos Estatutos provisionales de fecha 6 de julio de 1949 (Ref. 203/49) y cambiada la denominación de la Institución por la de Montepío Nacional de las Industrias del Vidrio, Cerámica y Similares.

Modificada la cotización de los Sectores de Vidrio y Cerámica por Ordenes de 10 de noviembre de 1950 (Ref. 815/50) e igualada con la del Sector de Tejas y Ladrillos en el 6 y 3 por 100 a cargo de Empresas de trabajadores, respectivamente, se hace necesario refundir todos los Sectores incorporados, con desaparición de las Secciones independientes, y unificar igualmente el régimen de prestaciones aplicables a los beneficiarios de la Institución;

Visto el proyecto de reforma de Estatutos aprobado por la Asamblea General del Montepío, las conclusiones adoptadas por la Conferencia celebrada por sus representantes y los estudios realizados por la Dirección Técnica del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Se aprueban los Estatutos del "Montepío Nacional de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias del Vidrio, Cerámica y Similares", que comenzarán a regir el día 2 de mayo de 1951 en sustitución de los actuales, que quedan derogados por la presente.

Art. 2.º Los derechos a prestaciones nacidos en virtud de hechos acaecidos con anterioridad a la fecha citada se regularán, en cuanto a clases, cuantía y requisitos de las prestaciones, conforme a las normas contenidas en los Estatutos provisionales de 30 de abril de 1947 y 6 de julio de 1949 según corresponda, de acuerdo con la fecha del hecho causante.

No obstante, en las prestaciones de viudedad causadas con anterioridad al 2 de mayo de 1951 por asociados pertenecientes a los Sectores de Vidrio y Tejas y Ladrillos se aplicarán las normas contenidas en la tercera disposición transitoria de los Estatutos que se aprueban por la presente, siempre que las beneficiarias tuvieran menos de cuarenta y cinco años de edad.

Art. 3.º Las tres Secciones independientes existentes en la actualidad en el Montepío del Vidrio, Cerámica y Similares quedarán disueltas, y unificados en lo sucesivo sus bienes, inventarios, inversiones y contabilidad.

TITULO PRIMERO

Naturaleza y extensión del Montepío

Artículo 1.º El "Montepío Nacional de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias del Vidrio, Cerámica y Similares", constituido en cumplimiento de lo establecido en la Orden del Ministerio de Trabajo de 21 de septiembre de 1946 (*Boletín Oficial del Estado* de 29 de septiembre), se regirá por los presentes Estatutos y disposiciones sobre Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 2.º Esta Entidad tiene por objeto el ejercicio de la Previsión Social complementaria de los Seguros Sociales Obligatorios, siendo sus fines la más amplia protección y ayuda a sus asociados y familiares contra circunstancias fortuitas y previsibles, en la forma que disponen los presentes Estatutos y de acuerdo con las Ordenes y Disposiciones que por el Ministerio de Trabajo se dicten para la concesión de beneficios que deba otorgar la Entidad en atención a sus posibilidades económicas.

El Montepío no podrá ejercer más actividades que las de Previsión Social autorizadas o que se autoricen por el Ministerio de Trabajo.

Art. 3.º La duración de esta Entidad será indefinida.

Su disolución o incorporación a otro Montepío o Mutualidad de Previsión Social corresponderá al Ministerio de Trabajo mediante disposición expresa.

Art. 4.º Esta Entidad desarrollará sus actividades en todo el territorio nacional y plazas de Soberanía, teniendo su domicilio social en Madrid. Dichas jurisdicción y domicilio podrán ser modificados por el Ministerio de Trabajo si lo considera conveniente por razones sociales o intereses mutualistas.

Art. 5.º En este Montepío estarán encuadrados las Empresas y trabajadores afectados por las siguientes Reglamentaciones de Trabajo.

Reglamentación Nacional para las Industrias del Vidrio de 21 de septiembre de 1946.

Reglamentación Nacional para las Industrias de Fabricación de Tejas y Ladrillos de 26 de septiembre de 1946.

Reglamentación Nacional para las Industrias de Cerámica de 26 de noviembre de 1946.

Art. 6.º El "Montepío Nacional de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias del Vidrio, Cerámica y Similares" tiene personalidad jurídica, y, en su consecuencia, gozará de capacidad plena para adquirir, poseer, gravar y enajenar bienes, así como realizar toda clase de actos y contratos relacionados con sus fines, sin más limitaciones que las establecidas en las disposiciones vigentes o que puedan establecerse en el futuro. Igualmente podrá promover y seguir los procedimientos que fueren oportunos y ejercitar los derechos y acciones que le correspondan ante los Juzgados y Tribunales de Justicia, ordinarios y especiales, y Organismos y Dependencias de la Administración Pública.

Art. 7.º Esta Entidad estará sometida a

la jurisdicción del Ministerio de Trabajo, quien ejercerá sobre ella su ordenación, tutela, inspección e intervención a través de los Organos competentes.

TITULO II

De los socios y beneficiarios

CAPITULO PRIMERO

De las clases de socios

Art. 8.º Los socios de la Institución se clasifican en socios protectores y socios beneficiarios.

CAPITULO II

De los socios protectores

Art. 9.º Los socios protectores podrán ser:

- a) Socios protectores obligatorios.
- b) Socios protectores voluntarios.

SECCIÓN 1.ª—De los socios protectores obligatorios

Art. 10. Serán socios protectores obligatorios todas las Empresas, a las que se refiere el artículo quinto de estos Estatutos que, en virtud de las Disposiciones aplicables, coticen o deban cotizar preceptivamente a favor del Montepío.

Art. 11. Serán obligaciones de los socios protectores obligatorios:

1.º Su afiliación al Montepío, así como la del personal que trabaje a su servicio, siempre que reúnan las condiciones señaladas en los vigentes Estatutos.

El no uso por parte del productor de la facultad señalada en el apartado primero del artículo 17, no eximirá a la Empresa de la obligación reseñada anteriormente ni de la consiguiente responsabilidad.

2.º Remitir al Montepío, a través de la Delegación Provincial, un padrón inicial de los trabajadores a su servicio, conforme al modelo y con los datos que por aquél se señalen.

3.º Remitir al Montepío, a través de la Delegación Provincial, relación de las altas y bajas causadas en la Empresa, así como las variaciones de salarios producidas por mejoras voluntarias o cambios de categoría profesional de los trabajadores, dentro de los plazos que la Institución señale.

4.º Abonar las cuotas patronal y obrera, en la cuantía, plazos y forma que se determina en el Título V de estos Estatutos.

5.º Presentar oportunamente y tener a disposición de sus trabajadores, "en sitio visible", la liquidación de pago de cuotas.

6.º Proceder al abono de prestaciones —por cuenta y delegación expresa del Montepío— a los beneficiarios que residan en localidad donde la Empresa tenga Centro de Trabajo.

7.º Cumplir todas las obligaciones que se deriven de los presentes Estatutos y demás disposiciones aplicables, así como de los acuerdos que adopten los Organos de Gobierno de la Institución en interpretación de unos y otras.

Art. 12. Las Empresas que cuenten con Centros de Trabajo situados en diferentes provincias podrán solicitar, y la Junta Rectora acordar, que las liquidaciones de cuotas se realicen totalmente en la capital de la provincia donde radique la Sede Central de la Empresa, siempre que ésta presente tantas Hojas de liquidación, debidamente diligenciadas, como Centros de Trabajo de la misma dependan, y atendiendo los requisitos que para el mejor servicio y funcionamiento consideren conveniente establecer los Organos de Gobierno de la Entidad.

Art. 13. Los socios protectores obligatorios tendrán derecho a formar parte de los Organos de Gobierno de la Institución cuando fueren elegidos para ello y en la proporción que se establezca.

SECCIÓN 2.ª—De los socios protectores voluntarios

Art. 14. Serán socios protectores voluntarios, aquellas personas naturales o jurídicas que por donaciones a la Entidad o servicios prestadas a la misma, se consideren con méritos suficientes para ser así conceptuadas.

Art. 15. El título de socio protector voluntario será honorífico, y el que lo ostente estará facultado para asistir, con derecho a voz, a las reuniones que la Asamblea General celebre, a cuyos efectos deberá ser citado oportunamente.

La concesión del título de socio protector voluntario corresponderá a la Asamblea General, a propuesta de la Junta Rectora.

CAPITULO III

De los socios beneficiarios

Art. 16. Serán socios beneficiarios con carácter obligatorio todos los productores afectados por lo que se dispone en el artículo quinto de los presentes Estatutos; también lo serán con el mismo carácter todas las personas a que se refiere el Decreto de 17 de noviembre de 1950.

Corresponderá la afiliación de todos los trabajadores españoles, hispano-americanos, portugueses, andorranos y filipinos que prestan sus servicios por cuenta ajena en territorio nacional o plazas de Soberanía, exceptuándose temporalmente los productores vinculados a las Empresas por el contrato de trabajo a domicilio. Asimismo corresponderá la afiliación de los trabajadores franceses en la forma y requisitos señalados en la Resolución del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, de fecha 22 de noviembre de 1949.

Sin embargo, no será admitida la afiliación a esta Entidad de productores a quienes falten menos de cinco años para cumplir la edad señalada en los presentes Estatutos para poder solicitar la jubilación. Se exceptúan de esta prohibición:

a) Los que procedan como socio activo de otro Montepío o Mutualidad Laboral o hayan tenido tal condición, con una antelación máxima de un año, a la incorporación de que se trate.

b) Los que con un período mínimo de antelación de dos años están trabajando en una actividad en el momento en que para la mis-

ma se ordene su encuadramiento en el Montepío.

Art. 17. Los socios beneficiarios tendrán los siguientes derechos:

1.º Solicitar su afiliación al Montepío cuando la Empresa por cuya cuenta trabajen no la efectúe.

2.º Conocer la efectividad del pago por la Empresa de las cuotas correspondientes.

3.º Obtener el reconocimiento, por parte del Montepío, de la antigüedad adquirida en la prestación de sus servicios por cuenta ajena, y la de cotizante como socio mutualista, conforme a lo establecido en el Título V de estos Estatutos y con arreglo a las normas que señale el Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

4.º Percibir los beneficios y causar las prestaciones que correspondan con arreglo a lo regulado en el Presente Estatuto y en las disposiciones o acuerdos del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

5.º Recurrir contra los acuerdos de los Organos de Gobierno de la Entidad en materia de reconocimiento de derechos, conforme se determina en los presentes Estatutos.

Art. 18. Serán obligaciones de los socios beneficiarios:

1.º Extender y entregar a la Empresa la declaración de afiliación individual, consignando en ella los datos personales, familiares y profesionales que por la Entidad se determinen.

2.º Permitir que por parte de su Empresa les sean descontados de sus salarios las cuotas a su cargo que se establecen en los presentes Estatutos.

3.º Dar cuenta a la Institución, por medio de la Delegación Provincial, de las variaciones de orden personal, familiar o profesional que puedan modificar la declaración inicial a que se refiere el apartado primero de este artículo.

4.º Cumplimentar, para la obtención de cualquiera de los beneficios concedidos por estos Estatutos, el necesario documento de solicitud, al que unirá aquellos documentos o declaraciones que para cada caso se exijan.

5.º Observar los plazos y formalidades establecidos en los presentes Estatutos para la presentación de las solicitudes de beneficios.

6.º Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Institución facilitando a ésta cuantos datos le sean interesados y allanando en la medida que esté a su alcance, las dificultades que los funcionarios de aquella puedan encontrar en el desempeño de sus funciones; si así no lo hicieren podrán incurrir en responsabilidad y ser objeto de sanción.

7.º Cumplir los preceptos de los Estatutos y los acuerdos y Resoluciones de los Organos de Gobierno de la Institución.

Art. 19. Los asociados que voluntaria o forzosamente dejen de prestar sus servicios por cuenta ajena serán baja en el Montepío, sin perjuicio de que cuando se reintegren al trabajo en cualquiera de las Empresas encuadradas en esta Entidad, y así se notifique a la misma, se le reconozca la antigüedad laboral y mutualista que con anterioridad a su baja hubieran adquirido.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo

anterior y, por consiguiente, serán considerados como socios en servicio activo:

1.º Los productores enfermos, los que estuviesen cumpliendo el servicio militar y los que se encuentren en situación de paro involuntario, con las limitaciones y requisitos que para todos estos casos se establecen en los artículos 136, 137 y 138 del presente Estatuto.

2.º Los que se encuentren en situación de excedencia voluntaria o forzosa.

Este derecho quedará limitado al período de tiempo que, según la Reglamentación de Trabajo, esté obligada la Empresa a reservar al productor su puesto en el trabajo. Por parte del asociado deberán cumplirse a estos efectos los siguientes requisitos:

a) Solicitar su continuidad como socio activo del Montepío, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que hubiera dejado de prestar su trabajo a la Empresa.

b) Abonar por su cuenta, y en los plazos reglamentarios, las cuotas patronales y obreras correspondientes. Para la determinación de éstas se considerará como salario base de cotización el que fuere regulador de prestaciones, según las cotizaciones efectuadas, al tiempo de su baja en el trabajo activo.

No gozarán del beneficio de continuar como socios activos de esta Institución aquellos trabajadores que en situación de excedencia ejerciten otra actividad que lleve consigo su obligada incorporación a otra Institución de Previsión Laboral.

CAPITULO IV

De los demás beneficiarios

Art. 20. Tendrán también la consideración de beneficiarios de este Montepío aquellas personas que sin estar asociadas a la Institución puedan solicitar y tengan derecho a percibir las prestaciones o beneficios establecidos en estos Estatutos, en virtud de la relación familiar en que se hallen con cualquier socio beneficiario causante.

Se añ obligaciones de las personas a que se refiere el presente artículo:

1.º Solicitar dentro de los plazos que en los presentes Estatutos se determinan y en la forma que se establece para cada caso los beneficios que puedan corresponderle.

2.º Aportar los documentos y datos que por la Entidad se les exija para la concesión de beneficios, y prestar con exactitud y fidelidad las declaraciones que les fueran exigidas con el mismo fin.

TITULO III

Organización y funcionamiento

CAPITULO PRIMERO

Del Gobierno del Montepío

Art. 21. Los Organos de Gobierno del Montepío Nacional de Previsión Social de los Trabajadores en las Industrias del Vidrio, Cerámica y Similares, son:

- La Asamblea General.
- La Junta Rectora.
- La Comisión Permanente Nacional.

d) Las Comisiones Provinciales Permanentes.

Art. 22. Son ejecutores de los acuerdos de los Organos de Gobierno:

- a) El Director del Montepío.
- b) Los Delegados provinciales.

Art. 23. Los Organos de Gobierno del Montepío estarán integrados por el número de vocales natos y electivos que se determinen en la Resolución del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales, a propuesta de la Junta Rectora de la Institución.

Para formular dicha propuesta deberá tenerse en cuenta la proporcionalidad existente entre el número de afiliados de los distintos sectores laborales y categorías profesionales, así como las normas establecidas en las Disposiciones vigentes sobre proporción entre las representaciones empresaria y obrera y demás requisitos que en ellas se exijan.

CAPITULO II

De los Organos de Gobierno Nacionales

SECCIÓN 1.ª—De la Asamblea General

Art. 24. La Asamblea General es el Organó supremo de la Institución, constituida por representantes de los socios protectores y beneficiarios. En ella concurren la orientación del presente y futuro de la Entidad, la adopción de medidas y estudio de sugerencias que entrañen modificación de estos Estatutos y la superior vigilancia de los Organos de Gobierno de ella derivados en el cumplimiento de sus misiones.

Art. 25. Será competencia de la Asamblea General:

- 1.º Elegir los miembros que han de constituir la Junta Rectora.
- 2.º Conocer la actuación de la Junta Rectora y de sus miembros en relación con el ejercicio de las funciones propias de sus cargos.
- 3.º Intervenir, en la forma que corresponda, en todos aquellos asuntos del Montepío cuya competencia no esté reservada a otros Organos del mismo.
- 4.º Examinar y aprobar, si procede, la Memoria, Presupuestos, Cuentas, Inventarios y Balances del Montepío que le someta la Junta Rectora.
- 5.º Estudiar, bien a propuesta de la Junta Rectora o por iniciativa propia, la concesión de otros beneficios que mejoren los establecidos en estos Estatutos, elevando la propuesta al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.
- 6.º Resolver sobre las propuestas que le remita la Junta Rectora y las Comisiones Provinciales Permanentes por mediación de aquella.

7.º Acordar la reforma de estos Estatutos cuando lo estime oportuno, elevándola al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales para su estudio y resolución.

Art. 26. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias o extraordinarias. Las reuniones ordinarias tendrán lugar una vez al año; las extraordinarias siempre que, con la suficiente justificación, lo acuerde la Junta Rectora por su iniciativa o por solicitarlo así la tercera parte de los asambleístas.

En las reuniones extraordinarias sólo podrán tratarse aquellos asuntos expresamente consignados en la Orden del día, el que deberá ser sometido a la previa aprobación del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 27. Las convocatorias de la Asamblea General se harán por su Presidente con una antelación mínima de veinte días, y por duplicado, a fin de dejar un ejemplar en poder del convocado y de que el otro sirva para poder acreditar en cualquier circunstancia el momento en que fué recibido por su destinatario.

A las convocatorias deberá acompañarse el orden del día de la sesión correspondiente.

Art. 28. Las reuniones de la Asamblea General podrán celebrarse en primera o segunda convocatoria. Desde el momento en que debiera haberse celebrado en primera convocatoria, al señalado para celebrar sesión en segunda, mediará un espacio de veinticuatro horas, sin que por ningún motivo ni en ningún caso, pueda reducirse este lapso de tiempo.

Art. 29. Para que la Asamblea General se considere válidamente constituida, será necesaria la asistencia de la mitad más uno de sus componentes en primera convocatoria; en segunda, será suficiente con que asista la tercera parte de los miembros.

Art. 30. Los miembros de la Asamblea General podrán hacer uso de la palabra:

- 1.º Para una cuestión previa o de orden.
- 2.º Para defender o impugnar una proposición.
- 3.º Para contestar cuando hayan sido aludidos personalmente.
- 4.º Para rectificar una sola vez, cuando hayan tomado parte en algún debate.

Art. 31. Siempre que los miembros de la Junta Rectora hagan uso de la palabra en reuniones de la Asamblea General se entenderá que no consumen turno a los efectos reglamentarios.

Art. 32. Cuando un miembro de la Asamblea General se halle en el uso de la palabra, no podrá ser interrumpido sino para ser llamado al orden por la Presidencia.

El Presidente podrá retirar la palabra al miembro de la Asamblea General a quien hubiese llamado al orden e incluso ordenará su expulsión del local, si ello fuese necesario.

Art. 33. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría de votos entre los miembros que se hallen presentes. Cuando resulte empate en una votación decidirá con su voto el Presidente.

Art. 34. Las votaciones serán nominales cuando así lo solicite la tercera parte de los miembros asistentes.

Art. 35. De las deliberaciones de la Asamblea General se harán constar en el Libro de Actas correspondiente —debidamente diligenciado por la Delegación de Trabajo— las conclusiones y acuerdos adoptados, autorizándose las actas con las firmas del Presidente y Secretario.

SECCIÓN 2.ª—De la Junta Rectora

Art. 36. La Junta Rectora es el Organó que, en nombre de la Asamblea General, tiene a su cargo el gobierno constante y directo del Montepío.

Art. 37. Será competencia de la Junta Rectora:

1.º Cumplir y hacer cumplir los preceptos contenidos en los presentes Estatutos y los de carácter general que sean aplicables al Montepío.

2.º Proponer a la Asamblea General la creación de nuevos beneficios cuando las posibilidades económicas del Montepío lo permitan y la reforma de estos Estatutos si lo estimare necesario.

3.º El estudio y resolución previo informe de la Comisión Provincial respectiva y de la Dirección del Montepío, de los expedientes sobre las siguientes prestaciones:

Pensión por Jubilación.

Pensión por Invalidez.

Pensión por Viudedad.

Pensión por Orfandad.

Auxilio en favor de los padres.

Pensión de larga enfermedad.

Igualmente resolverá los expedientes de prestaciones extarreglamentarias con cargo al tanto por ciento que, del fondo a este fin destinado, le corresponde según lo establecido en el artículo 85 de estos Estatutos.

4.º Autorizar que sea trimestral el pago de cuotas por parte de aquellas Empresas que lo soliciten y en las que concurren las circunstancias prevenidas en el artículo 71 de estos Estatutos.

5.º Conocer y aprobar, en su caso, las solicitudes formuladas por las Empresas relativas al ingreso conjunto del importe total de cuotas correspondientes a centros de trabajos establecidos en distintas provincias.

6.º Nombrar el Vocal representante del Montepío en las Entidades de Previsión Social que pudieran constituirse por las Empresas.

7.º Estudiar y someter a la aprobación de la Asamblea General los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

8.º Someter a la Asamblea General para su aprobación la Memoria anual, los estados de cuentas, inventarios y balances del Montepío.

9.º Aprobar la distribución de fondos.

10. Acordar las inversiones.

11. Imponer las sanciones procedentes con arreglo a lo establecido en el Título correspondiente de estos Estatutos.

12. Proveer interinamente hasta la inmediata renovación de los Órganos de Gobierno las vacantes que se produzcan con anterioridad a la extinción del mandato de sus miembros o los de la Asamblea General.

13. Resolver o informar a la Superioridad, según los casos, en los desacuerdos entre las Comisiones Provinciales Permanentes y los Delegados provinciales.

14. En general, adoptar las resoluciones que considere convenientes, siguiendo la orientación y las normas señaladas en los presentes Estatutos, así como elevar a la Superioridad las sugerencias que estime oportunas para la adopción de medidas que redunden en beneficio de los beneficiarios.

Art. 38. La Junta Rectora se reunirá, por lo menos, una vez cada tres meses, a fin de estudiar y resolver cuantos asuntos tenga pendientes.

Además de estas reuniones preceptivas se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente, bien por iniciativa de éste o por ha-

berlo así solicitado la tercera parte de los miembros, o por que el Director lo proponga atendiendo a razones justificadas.

Art. 39. Las convocatorias para las reuniones de la Junta Rectora deberán hacerse con una antelación mínima de siete días y en la forma prevenida en el artículo 27.

Art. 40. En todo lo referente al número de asistentes necesarios para que la Junta Rectora se considere válidamente constituida, deliberaciones, acuerdos y acta de las sesiones, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 29 al 35, relativos a la Asamblea General.

Art. 41. Cuando por circunstancias especiales se hallen reunidos en el domicilio social la totalidad de los miembros de la Junta Rectora, sin previa convocatoria, podrán celebrar sesión y tener plena validez los acuerdos adoptados en la misma, sin más requisito que la aprobación previa y por unanimidad de declarar la conveniencia de celebrarla en tal forma, debiendo levantarse el acta correspondiente al igual que en las demás sesiones.

SECCIÓN 3.ª—De la Comisión Permanente Nacional.

Art. 42. La Comisión Permanente Nacional es el Órgano delegado de la Junta Rectora, que se constituye para la más ágil y rápida resolución de los expedientes de prestaciones y asuntos de trámite de la Entidad.

Art. 43. Corresponde concretamente a la Comisión Permanente Nacional las funciones y cometidos que se regulan en los apartados primero, tercero y noveno del artículo 37 de los presentes Estatutos, así como todas aquellas funciones que, siendo de la competencia de la Junta Rectora, sean expresamente delegadas por ésta.

Art. 44. La Comisión Permanente Nacional se reunirá, por lo menos, una vez al mes.

Además de esta reunión preceptiva, se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente, bien por iniciativa de éste, por haberlo solicitado así la tercera parte de sus miembros o por proponerlo el Director, atendiendo a razones justificadas.

Las convocatorias para las reuniones deberán hacerse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, en la forma prevenida en el artículo 27 de estos Estatutos.

Art. 45. En todo lo referente al número de asistentes necesarios para que la Comisión Permanente Nacional se considere válidamente constituida, deliberaciones, acuerdos y actas de las sesiones, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 29 al 35, relativos a la Asamblea General.

SECCIÓN 4.ª—Del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Actas

Art. 46. En el Presidente de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional concurren la alta representación y orientación de la Entidad de la que es primera jerarquía y máxima figura representativa de los asociados.

Serán funciones del Presidente del Montepío o de quien reglamentariamente le sustituya:

1.º Representar al Montepío, en unión del Director del mismo, en todos los actos y contratos que se celebren.

2.º Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional, dirigiendo la discusión, así como decidir las votaciones en caso de empate.

3.º Fijar el orden del día de las reuniones de la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional.

4.º Ejercitar funciones de fiscalización en todos los servicios y actividades del Montepío, cuando lo considere oportuno, asistido del Director.

5.º Designar, de acuerdo con la Junta Rectora, las personas que deban cubrir interinamente hasta la inmediata renovación de los Organos de Gobierno, las vacantes que se produzcan con anterioridad a la fecha de terminación del mandato de los Vocales de los Organos de Gobierno.

Art. 47. El Vicepresidente sustituirá al Presidente, con iguales atribuciones y deberes, en caso de ausencia, enfermedad, fallecimiento u otra cualquiera circunstancia, que así lo requiera, como igualmente en aquellos casos en que mediare delegación.

Art. 48. El Secretario del Montepío actuará como Secretario de Actas de la Asamblea General y de los Organos derivados de ésta, sin derecho a voz ni voto.

Art. 49. Serán funciones del Secretario de Actas:

1.º Actuar como tal en las sesiones que celebre la Asamblea General, Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional, redactando las actas, que habrán de ser autorizadas con el visto bueno del Presidente, así como llevar los correspondientes Libros de las mismas.

2.º Asistir al Presidente en la redacción del orden del día de las sesiones y cursar las convocatorias para ellas.

3.º Autorizar, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones que no sean de la especial competencia de otro cargo del Montepío.

CAPITULO III

De los Organos de Gobierno Provinciales

Art. 50. Se constituirá Comisión Provincial Permanente (que tendrá como domicilio irrenunciable el de la Delegación Provincial de Mutualidades y Montepíos Laborales) en las provincias y en la forma que se indique en la Resolución correspondiente del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 51. Las Comisiones Permanentes o Provinciales se reunirán siempre que lo determine el Presidente o mediante propuesta a aquél del Delegado Provincial de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Como mínimo celebrarán sesión cada quince días. No obstante, deberá prescindirse de estas reuniones preceptivas cuando no hubiere asuntos pendientes que tratar.

Art. 52. Las convocatorias se harán con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas y en la forma prevenida en el artículo 27. Deberá constar el día y hora fijado para la reunión y se hará saber que, de ser necesaria, la sesión en segunda convocatoria se

celebrará media hora después de la convocada para la primera.

Art. 53. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, siendo necesario para que tengan validez que concurren en primera convocatoria la mitad más uno de sus componentes, con voto, y un mínimo de la tercera parte de sus miembros, en segunda.

Las Comisiones de cuatro miembros podrán reunirse en segunda convocatoria con sólo dos de ellos.

En caso de empate decidirá con su voto el Presidente.

Art. 54. Los acuerdos de las Comisiones se harán constar en un Libro de Actas, que firmarán el Presidente y el Secretario; estos acuerdos serán ejecutivos, sin que sea precisa la aprobación del Acta en la sesión posterior.

Inmediatamente después de cada sesión, y con el fin del más rápido cumplimiento de los acuerdos adoptados, el Acta se pasará al Delegado Provincial de Mutualidades y Montepíos Laborales, quien tendrá la facultad de suspender aquéllos que se estime anti-reglamentarios.

Art. 55. El Delegado Provincial de Mutualidades y Montepíos Laborales remitirá al Organismo de Gobierno superior inmediato, en el plazo de cuarenta y ocho horas, copia autorizada de las Actas, las cuales visará o extenderá en ellas la correspondiente diligencia de suspensión en los casos en que proceda.

Art. 56. Las Comisiones Provinciales Permanentes, como delegadas de sus Organos Jerárquicos Nacionales, tendrán las siguientes misiones y facultades:

A) Informativas:

1.º Cuidar y mantener la relación directa con los asociados para lograr el más cierto conocimiento de sus aspiraciones y necesidades y orientarles en cuanto redunde en beneficio de la Obra Mutual.

2.º Informar a los Organos Superiores del Montepío de los defectos que observen o comprueben en el desarrollo y acción social de la Entidad, así como de las medidas que las circunstancias aconsejen adoptar para remediarlas.

3.º Examinar e informar las solicitudes de las prestaciones que a continuación se establecen, elevándolas a la Comisión Permanente Nacional para su resolución definitiva:

Pensión por Jubilación.

Pensión por Invalidez.

Pensión de Viudedad.

Pensión de Orfandad.

Auxilio en favor de los padres.

Pensión por larga enfermedad.

4.º Examinar e informar los expedientes relativos a la concesión de prestaciones extrarreglamentarias que fueren de la competencia de la Junta Rectora.

5.º Fomentar el espíritu mutualista entre los asociados, mediante la gestión y actos convenientes que divulguen las ventajas del sistema.

B) De representación:

1.º Actuar como delegadas de la Junta Rectora, dentro de su jurisdicción a todos los efectos que los presentes Estatutos determinen, ostentando la representación de la Entidad y de sus Organos Rectores.

2.º Representar a los Organos Superiores en los asuntos de la exclusiva competencia de éstos, cuando exista delegación.

C) De vigilancia:

1.º Hacer cumplir los preceptos contenidos en los presentes Estatutos, las disposiciones dictadas con carácter general, así como los acuerdos de la Junta Rectora y Comisión Permanente Nacional.

2.º Examinar las liquidaciones de cuotas.

3.º Cuidar la inmediata entrega a los asociados y beneficiarios de las prestaciones acordadas y aprobadas.

4.º Revisar los expedientes relativos a pensiones por Invalidez y Larga enfermedad que se hubieran concedido por los Organos de Gobierno competentes a cualquiera de los asociados de su jurisdicción.

D) Resolutivas:

1.º Conocer y resolver, dando cuenta a los Organos Centrales, conforme determinan estos Estatutos, los expedientes sobre Auxilio por Defunción y Premio por Nupcialidad.

2.º Resolver los expedientes sobre prestaciones extrarreglamentarias con cargo a los fondos que para este fin correspondan a la provincia, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 85 de estos Estatutos.

3.º Constituirse en patronato tutelar de los huérfanos de padre y madre de la respectiva profesión o rama laboral, con residencia en la provincia.

CAPITULO IV

Elección de Vocales y Organos de Gobierno

SECCIÓN 1.ª—Disposiciones relativas a los miembros de los Organos de Gobierno.

Art. 57. Para ser Vocal de los Organos de Gobierno Nacionales o Provinciales del Montepío se precisará reunir los siguientes requisitos: ser asociado, mayor de edad, estar en el pleno disfrute de sus derechos civiles y profesionales, llevar trabajando como mínimo diez años y pertenecer a la Organización Sindical.

No podrán ostentar cargos representativos en la Entidad aquellos socios que no cumplan normalmente las diversas obligaciones que estos Estatutos les imponen.

Art. 58. Para ser Vocal de las Comisiones Provinciales Permanentes se preferirá, en igualdad de circunstancias, aquellas personas que reúnan la condición de residir en la localidad donde tenga su Sede la respectiva Comisión, o en sus cercanías.

Art. 59. Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocales de los Organos de Gobierno del Montepío son honoríficos y obligatorios.

Los miembros de los Organos de Gobierno, por su asistencia a las reuniones reglamentariamente convocadas, percibirán dietas de asistencia o de asistencia y desplazamiento, según los casos. La cuantía de estas dietas será fijada por la Junta Rectora.

Art. 60. La asistencia a las reuniones reglamentariamente convocadas tendrá la consideración de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, a los efectos prevenidos en el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo.

SECCIÓN 2.ª—De la elección de los Organos de Gobierno

Art. 61. Las Juntas Económicas y Sociales de los Sindicatos Provinciales elegirán las Comisiones Provinciales Permanentes entre las personas que reúnan las condiciones que se determinan en estos Estatutos.

A las Juntas Sociales corresponderá la elección de los Vocales representantes de los trabajadores, y a las Económicas, los de las Empresas. En la elección solamente tomarán parte aquellos vocales de las Juntas Sociales y Económicas que sean socios del Montepío.

Art. 62. Las actas de elección, debidamente autorizadas por el Delegado Provincial de Sindicatos, serán remitidas a las Delegaciones Provinciales de Trabajo, las que, con su informe, las elevarán a la Jefatura del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Una vez autorizada por aquella Jefatura la constitución de una Comisión Permanente Provincial será convocada por el Delegado Provincial de Trabajo, quien dará posesión a los vocales, elevando el acta correspondiente, que la remitirá al Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

En esta sesión los Vocales elegirán al Presidente y Secretario de Actas.

Art. 63. La Asamblea General quedará constituida con Vocales de las Comisiones Provinciales Permanentes en la forma y número que se determine en la Resolución del Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales.

Art. 64. La Asamblea General en su primera reunión elegirá de entre sus miembros los componentes de la Junta Rectora; ésta designará a su vez los cargos de Presidente y Vicepresidente, que lo serán de todos los Organos de Gobierno Nacionales.

Los cargos de Presidente y Vicepresidente deberán recaer en miembros electivos de la Junta Rectora.

El Servicio de Mutualidades y Montepíos Laborales podrá poner su veto a los nombramientos efectuados, previas las informaciones que considere precisas para fundar su resolución.

CAPITULO V

De los Organos Ejecutivos del Montepío

SECCIÓN 1.ª—Del Director

Art. 65. Corresponderán al Director y serán funciones del mismo:

1.ª Representar al Montepío, en unión del Presidente, en todos los actos y contratos que se celebren, así como ante las autoridades, Tribunales y Juzgados, Centros de Administración del Estado y particulares, o cualesquiera otros Organismos, Entidades, Oficinas y personas con los poderes oportunos de la Junta Rectora cuando sean necesarios a los indicados efectos.

2.ª Asistir al Presidente, cuando proceda, en la fiscalización de las actividades y los servicios administrativos del Montepío.

3.ª Ejecutar los acuerdos de los Organos de Gobierno.

4.ª Proponer las reuniones de dichos Organos, cuando lo estime oportuno.